UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL *TESIS DE MAESTRÍA*

Título:

“Transformaciones contemporáneas y ejercicio profesional hoy ¿De qué lado de la mecha te encontrás?:

*LOS DESAFÍOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN ÁREAS SOCIO
JURÍDICAS EN TIEMPOS DE RESTAURACIÓN CONSERVADORA”*

Directora: Mg. Silvina Pantanali

Maestranda: Lic. Mariana De Benedetti

Fecha de entrega: 17 de marzo de 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
7 de Julio 2021

TRIBUNAL DE DEFENSA:

Resumen

El presente trabajo consiste en un informe de investigación realizado en el marco de la Maestría en Trabajo Social de la FTS de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene como objetivo caracterizar los aspectos particulares de la intervención de los trabajadores sociales en áreas socio jurídicas que trabajan con niños y familias en estado de vulnerabilidad, enmarcados en un contexto de complejidad con múltiples determinaciones.

Asimismo, se describe la intervención profesional analizada desde una mirada contextualizadora, en la localidad de Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, mencionando la presencia de situaciones de pobreza, las migraciones constantes y los mandatos del consumismo que influyen en la vida cotidiana de los sujetos sociales en tanto su reproducción. La perspectiva elegida prioriza el análisis de lo relacional, mientras se abordan diversas concepciones de la niñez según sea el contexto temporal y los mandatos familiares que la enmarcan -y orientan- hacia su control y posterior disciplinamiento.

A su vez, plantea la relación entre el ejercicio profesional y las representaciones sociales sobre el colectivo profesional. Por otro lado, se esbozan líneas acerca de la importancia de las necesidades, no sólo materiales sino simbólicas de dicha población entendiéndolas en la sociedad moderna con sus características, en cuanto a las condiciones materiales de existencia. Se busca analizar, a través de este estudio cualitativo, la particularidad de las intervenciones profesionales en ámbitos socio jurídicos de ciudades pequeñas del interior del país, en la región patagónica, para poder plantear futuros escenarios de acción y nuevas propuestas hacia estrategias de intervención emancipadoras.

Resumo

O presente trabalho constitui uma pesquisa de investigação no quadro do Mestrado em Trabalho Social da Faculdade de Trabalho Social da Universidade Nacional de La Plata. Tem como objectivo caracterizar os aspetos particulares da intervenção das e dos trabalhadores sociais nas áreas sócio jurídicas que trabalham com infância e família em estado de vulnerabilidade, enquadrando-se num contexto de complexidade multidimensional. Mesmo assim, descreve-se a intervenção profissional analisada desde uma olhada contextualizadora na cidade de Puerto San Julián na província de Santa Cruz, referindo a presença de situações de pobreza, as migrações contínuas e os mandatos do consumismo que influem na vida cotidiana dos sujeitos sociais para sua reprodução.

A perspectiva escolhida dá prioridade à análise do relacional, no entanto se tratam diferentes concepções da infância segundo seja o contexto temporal e os mandatos familiares que a enquadram, e orientam em direção ao seu controle.

Por sua vez, apresenta a relação entre o exercício profissional e as representações sociais sobre o colectivo profissional. Aliás, esboçam-se linhas sobre a importância das necessidades não só materiais mas também simbólicas dessa população, compreendendo-as na sociedade moderna, com as suas condições materiais de existência.

Procura-se analisar através deste estudo qualitativo a particularidade das intervenções profissionais em âmbitos sócio jurídicos de cidades pequenas do interior do país, da região patagônica, para poder apresentar futuras cenas e novas propostas em direção a estratégias de intervenção emancipadoras.

Agradecimientos

Agradezco profundamente a la Universidad Nacional de La Plata que me formó en muchos aspectos de mi vida ya como profesional, haciendo que me encuentre con la reflexión y la búsqueda de un pensamiento crítico permanente, generando autonomía en los espacios de mi ejercicio cotidiano.

Son, tanto, la educación pública como los docentes y los espacios compartidos los que me han alentado a seguir formándome en esta profesión.

A los movimientos de derechos humanos, que riegan de compromiso social a cada paso que dan por una Latinoamérica unida y por aquellos que han sido callados y hasta muertos, muertos por pensar.

A Silvina Pantanali, directora de la tesis, quien con su rigurosidad y solidez teórica, además de su acompañamiento permanente al momento de dar sugerencias sustantivas, me ha permitido superar los devenires presentes en esta elaboración en un marco de calidez y aliento constante.

Familia, amigos y personitas especiales, muchas gracias a ustedes también por acompañarme en este recorrido haciendo camino, camino al andar.

Índice

RESUMEN	Pág.2
RESUMO (Portugués).....	Pág.3
AGRADECIMIENTOS.....	Pág.4
INTRODUCCIÓN.....	Pág.7
OBJETIVOS.....	Pág.11
 CAPÍTULO I	
“Las transformaciones sociales, del Estado y las políticas sociales en el capitalismo contemporáneo”.....	Pág.12
Pobreza, los '90 y los ajustes actuales.....	Pág.12
Modelos de Estado y las respuestas a las manifestaciones de la “Cuestión Social”.....	Pág.13
La Argentina reciente.....	Pág.19
Estado Neoliberal y desregulación estatal.....	Pág.22
Los cambios en las instituciones y el Estado.....	Pág.27
Las políticas sociales y las nuevas manifestaciones de la “Cuestión Social”.....	Pág.29
Características socio demográficas y económicas de Santa Cruz.....	Pág.35
Puerto San Julián, una comunidad urbana al interior de la Patagonia.....	Pág.37
 CAPÍTULO II	
“La concepción de la profesión del Trabajo Social y sus transformaciones contemporáneas”.....	Pág.42
La profesión: génesis y significado social.....	Pág.43
Características de la profesión y autonomía relativa.....	Pág.46
Legitimidad profesional.....	Pág.50
Transformaciones contemporáneas e intervención profesional hoy ¿de qué lado de la mecha te encontrás?: Los desafíos.....	Pág.52

CAPÍTULO III

“Les niños y las familias, sujetos de la intervención profesional”	Pág.56
Aquel niño esperado, aquella familia “normal”	Pág.56
La niñez a lo largo del tiempo	Pág.59
La realidad de las familias...ha variado	Pág.63
Los comportamientos de la expulsión	Pág.69
Ser migrante en la Patagonia: al sur del sur	Pág.73
Vida cotidiana y vulnerabilidad: categorías para comprender a los sujetos desde el Trabajo Social	Pág.76

CAPÍTULO IV

“La intervención del profesional del Trabajo Social en el ámbito socio jurídico”	Pág.79
Repensando el ejercicio profesional en Santa Cruz	Pág.79
Particularidades de la intervención profesional en el ámbito socio-jurídico:	
“Cuestión Social” como cuestión judicial	Pág.80
Particularidades del Informe Social en el ámbito socio-jurídico	Pág.89
Particularidades de la intervención profesional en pequeñas localidades	Pág.95
<i>Condiciones de trabajo en el espacio socio ocupacional</i>	Pág.95
<i>Características y significado social de la actividad profesional</i>	Pág.101
<i>Concepciones sobre los niños, adolescentes y las familias</i>	Pág.108

CONSIDERACIONES FINALES	Pág.113
--------------------------------------	---------

BIBLIOGRAFÍA	Pág.119
---------------------------	---------

WEBGRAFÍA	Pág.127
------------------------	---------

ANEXO	Pág.128
--------------------	---------

Introducción

La tesis de posgrado se basa en una investigación teórico-empírica que adopta un diseño de carácter exploratorio-descriptivo. Se trata de una investigación cualitativa que tiene como objetivo analizar la intervención profesional de los trabajadores sociales que trabajan con niñas, niños y familias en estado de vulnerabilidad desde ámbitos socio jurídicos en la provincia de Santa Cruz en el período 2016-2019, en el marco de un contexto de regresividad en políticas sociales bajo el gobierno de Cambiemos. Partiendo de este análisis se vislumbran las creencias, las representaciones y las nociones instauradas sobre los trabajadores sociales que intervienen desde dispositivos judiciales, además de los prejuicios y las significaciones sociales que recaen sobre los niños y familias, en estado de vulnerabilidad, con los que se interviene. De este modo, se podrían deconstruir realidades dadas para construir, entonces, nuevos sentidos.

En este caso, el contexto de producción de la investigadora tiene relación con diversos cursos y capacitaciones realizadas que permiten aprehender herramientas teóricas de trabajo, sumado a intervenciones realizadas desde la experiencia laboral, como perito Ad-hoc, las que deberían abordarse sin las “recetas” que las propias estructuras institucionales instauran. Este insumo persigue poder permitir la generación de reflexiones y debates sobre el quehacer profesional contemporáneo, contextualizado en instituciones normativas que conforman históricamente un área interventiva del Estado: el sistema judicial.

Asimismo, el trabajo de investigación aborda la temática analizada desde una mirada contextualizada y de complejidad, mencionando las determinaciones estructurales y los mandatos de consumo que influyen en el desarrollo del hombre como ser social. Es así que se prioriza lo relacional entre los niños, la familia y su contexto inmediato, mientras se recorren las diversas concepciones de la niñez según han sido las condiciones históricas sobre la “normalidad idílica” ya sea para lo familiar como para lo societal a lo largo del tiempo.

A su vez, se plantea la relación entre esas familias que son clasificadas como “disfuncionales” o “anormales” y las representaciones sociales y estigmatizaciones de la sociedad sobre éstos, así como también se plantean significaciones sociales sobre los profesionales del Trabajo Social actuantes. Por otro lado, se esbozan líneas acerca de la importancia de las necesidades, no sólo materiales sino simbólicas de dichos grupos poblacionales definidos desde la categoría vida cotidiana.

Siguiendo estas líneas y, ante un panorama de incertidumbre y escepticismo generalizado, se presentan a diario problemáticas cada vez con mayor grado de complejidad frente a una sociedad y una cultura mercantilizada, capitalista, donde la competencia se sigue afianzando como componente del vínculo social básico que refuerza los individualismos y consolida las desigualdades. De Jong, Basso, Paira y García en su libro acerca de representaciones y significados sobre la familia, explican que hoy en día:

“Mientras la familia va cambiando en sus modos de estructuración y organización dándose una creciente pluralidad de situaciones (...) siguen proliferando las desigualdades entre el hombre y la mujer, muchas

tareas recaen sobre la mujer dentro de su papel como contenedora afectiva, hacerse cargo de la desestructuración de la identidad que supone para el hombre la inestabilidad laboral, la pérdida de empleo, estar desocupado no pudiendo muchas veces cumplir con el papel asignado socialmente de ser el soporte económico del hogar, lugar esperado y legitimado socialmente, lo que desestructura su mundo simbólico. Las bases del sistema industrial no han cambiado, lo que si ha cambiado es que ante el deterioro del mundo productivo y de las redes sociales de contención, la familia aparece como el lugar de depositación por excelencia de la alta conflictividad social generándose problemas de identidad individual y familiar. Situación que la hace cada vez más vulnerable con la aparición de nuevos vínculos conflictivos que suelen estallar violentamente fragilizando los vínculos. (...). Ante el desgranamiento del empleo vuelven a aparecer formas artesanales en la resolución de la subsistencia como los pequeños emprendimientos familiares, que introducen modificaciones en las relaciones asimétricas familiares, creando nuevos lazos de solidaridad y de sustitución de roles ante la emergente conflictividad social, así como también aparece el “sálvese quien pueda” en una tensión entreindividualismo y comunitarismo” (Jong, Basso, Paira y García, 2010:35).

Es en este marco de vulneración de derechos, frente a las nuevas manifestaciones de la “cuestión social”, que les trabajadores sociales deben actuar mediando en la conflictividad permanente. El Trabajo Social, surgido como profesión con una intencionalidad meramente interventiva, se debe reposicionar dada la relación dinámica y dialéctica entre el conocer, el intervenir y el fin de transformar la situación problemática¹ que dio inicio a la intervención profesional, el revertir la situación inicial.

Ante este panorama es que toda la investigación se enmarca en la indagación sobre la repercusión de políticas neoliberales que visibilizan esta crisis. A partir de dicha crisis es que las ciencias sociales han caracterizado a la situación como un “*quiebre en el imaginario igualitarista*” (Svampa, 2005), un debilitamiento y fragmentación del tejido social elementos que, a pesar de sus crisis, busca sostener el Trabajo Social.

A partir del 2003, la dinámica de las desigualdades en el país no ha sido constante, sino que hubo ciertas mejoras -pero con desigualdades persistentes- y a su vez, se evidenció la profundización de ciertas problemáticas. Así, los focos de pobreza urbana, la precariedad e informalidad en el mercado de trabajo, la vulnerabilidad y el surgimiento de nuevas formas de expulsión son procesos que describen la complejidad social siendo retos para las políticas públicas y las profesiones inherentes a las ciencias sociales.

¹ Para Silvina Cavallieri (2008) la demanda institucional se encuentra legitimada por la relación patronal que el Estado establece para con los profesionales a los que se exige procesos de intervención. Los profesionales identifican y elaboran situaciones problemáticas a partir de la mediación que se produce para la intervención profesional entre la demanda institucional y la demanda social. Se entenderán desde su particularidad, resultante de la mediación entre sus dimensiones universales y singulares. En sus palabras “*abordar la demanda de la particularidad, la cual corresponde a un proceso de mediación que se constituye como un espacio donde la legalidad universal se singulariza y la inmediatez de lo universal se universaliza*” (2008:46). La demanda entonces también será definida a partir de la demanda de los usuarios.

Partiendo de estas líneas, entonces, hay un escenario de pobreza que persiste (Clemente, 2014) sumado a un proceso de acumulación de desventajas sociales que se cristaliza en territorios relegados, con sujetos expulsados y sobre colectivos sociales vulnerables como mujeres jefas de hogar que acceden sólo a obtener trabajos informales, jóvenes que no pueden terminar sus estudios y que están desocupados, otros tantos desocupados y despedidos, trabajadores del núcleo informal, migrantes internos y externos, territorios mercantilizados, población de origen indígena que es expulsada de sus lugares nativos, adultos mayores fuera del sistema previsional, discapacitados con menores prestaciones, entre tantos otros.

De este modo, se abordan los elementos vinculados al modelo de acumulación flexible, las relaciones contradictorias que se establecen entre capital – trabajo, entre Estado y políticas sociales, en su dinámica e interrelación, analizando los escenarios a partir de la categoría de vida cotidiana- con las tendencias socio históricas prevalecientes- ante la ofensiva neoliberal dentro del orden social vigente.

A lo largo de la investigación, y a través de las técnicas cualitativas de recolección de información (entrevistas semi estructuradas y observación), se abordan las estrategias y prácticas que les trabajadores sociales despliegan con les niñes y las familias en estado de vulnerabilidad social con las que intervienen, configurando -desde el sistema- una judicialización de la vida familiar como respuesta a las múltiples problemáticas mencionadas. La búsqueda de material bibliográfico se basó en el análisis de los contenidos trabajados en la Maestría en Trabajo Social y sus seminarios, cursos de posgrado, jornadas y en materiales de estudio que permitieron definir categorías conceptuales y ejes temáticos como: totalidad, situación problemática, estrategia profesional, control social, normalidad, justicia, rol punitivo, “cuestión social”, política social, historicidad de las familias, peligrosidad, sujeto situado, expulsión y vida cotidiana, entre otras.

También, la dimensión temporal de la investigación situada consiste de un recorte sincrónico y una dimensión diacrónica. Por un lado, se busca analizar la situación que atraviesan les niñes y las familias que se encontraban en estado de vulnerabilidad en Puerto San Julián, en el período 2016 -2019. Esto hace referencia al devenir de la “cuestión social” y sus manifestaciones para visualizar, tanto los factores influyentes como las características que adopta la propia situación problemática, en un contexto de desigualdades donde actúan les profesionales, dentro de un modelo extractivista que evidencia las implicancias de la apropiación o no del capital en la vida cotidiana.

Durante el desarrollo de la tesis, a fin de dar cuenta de la intervención profesional en el ámbito judicial, se caracteriza la composición del Poder Judicial Provincial dependiente de Tribunal superior de Justicia de la provincia, además del Consejo Profesional de trabajadores sociales correspondiente por región geográfica; con las dificultades que recupera este último en cuanto a la participación del colectivo profesional dentro de un modelo de acumulación por desposesión².

En el caso específico de la investigación, se recuperan las labores que la profesional del Trabajo Social desempeña dentro del Poder Judicial en la localidad de Puerto San Julián, siendo que sólo una trabajadora social es quien conforma el gabinete profesional interdisciplinario del mismo, acompañada de dos psicólogos. En su caso, se desempeña como profesional que responde a demandas provenientes desde diversos fueros en simultáneo: Juzgado

de Familia, Juzgado Civil, Juzgado de Instrucción y Cámara, Juzgado de Paz, Defensoría y algunas veces atención a demandas de Fiscalía, sumado a la cobertura de guardias permanentes desde Juzgado de Familia en permanente vinculación con la Oficina de Asistencia Letrada para víctimas de Violencia de Género en esta localidad, también dependiente del Poder Judicial de la provincia. Es por esta descripción que se comprende que la flexibilización laboral también se traduce en someter al máximo de expedientes -sujetos e historias de vida devenidos en trámites- a sólo un/a profesional referente del gabinete social en términos instrumentales.

La presente investigación refiere, entonces, a una muestra teórico-intencional en función de develar los lineamientos que subyacen a los abordajes profesionales que se enmarcan en instituciones del Poder Judicial, atendiendo sus limitaciones además de sus potenciales alcances.

Por último, se destaca que el diseño cualitativo permitió analizar, comprender y explicar la realidad social en su complejidad, su detalle y su contexto, aportando nuevas perspectivas sobre los escenarios coyunturales.

²En palabras de Harvey (2005) tal modelo se conforma desde diversas lógicas y medidas como han de ser la privatización, mercantilización, financierización, gestión y manipulación de la crisis con redistribuciones estatales (citado por Klachko y Arkonada, 2016).

OBJETIVOS

Objetivo general:

Conocer las particularidades que adquiere la intervención profesional del Trabajo Social con NNA y familias en situación de vulnerabilidad, en el ámbito socio jurídico, en Puerto San Julián, Santa Cruz, en el período 2016-2019.

Objetivos específicos:

- Caracterizar el contexto de intervención profesional de los trabajadores sociales en la provincia de Santa Cruz entre 2016 y 2019 en ámbitos socio jurídicos.
- Profundizar en el debate sobre el significado social del Trabajo Social analizando la construcción social del ejercicio profesional en su devenir histórico.
- Analizar las características de los niños y las familias en estado de vulnerabilidad contribuyendo al conocimiento de las realidades sociales.
- Identificar las particularidades del ámbito socio-jurídico como determinaciones de las estrategias de intervención de los profesionales del Trabajo Social.

CAPÍTULO I

Las transformaciones sociales, del Estado y las políticas sociales en el capitalismo contemporáneo

A continuación, se expone una caracterización de los factores socio políticos y económicos vivenciados en el país a partir de los diversos modelos de Estado y sus modificaciones hasta llegar a las condiciones del período estudiado. Así, se tendrá como referencia la coyuntura, evidenciando el aumento de la pobreza y las condiciones de expulsión, como así también las transformaciones perceptibles en las instituciones a cargo de la contención, -pero también de la homogeneización- de los sujetos sociales, siendo garantes de la reproducción social.

Pobreza, los '90 y los ajustes actuales

“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”

Eduardo Galeano

En poco menos de 50 años el sistema socioeconómico y político argentino llegó a sumergir a más de la mitad de la población en la pobreza. En Argentina, la población bajo la línea de pobreza e indigencia alcanzó su máximo nivel histórico, registrando en octubre de 2002 un 57,5% de pobres sobre el total de la población, teniendo así un alto impacto en los niveles de vida de la población y las generaciones venideras. Argentina pasó de comenzar el siglo XX entre las diez naciones con más potencialidad de crecimiento y desarrollo a sufrir un golpe irreversible en las clases más desposeídas.

A mediados del siglo XX la industria sustitutiva de importaciones y la industria fabril han sufrido una gran caída, a diferencia de lo que se venía construyendo desde los años '30, afectando directamente el bienestar de inmensas capas sociales. Los grandes centros urbanos y sus cordones albergaron a los desplazados por situaciones de pobreza extrema, los recientes desempleados, sin cobertura de salud y marginados, asimismo, la estructura productiva durante los años '80 todavía se mantenía. Sin embargo, con el comienzo de la presidencia de Carlos Menem en 1989, ésta terminó por destruirse definitivamente.

En los '90, se llevó a cabo una política de privatizaciones, acompañada por una concepción que asociaba la “eficiencia” con lo privado, junto al constante desguace del Estado. Éste resignaba responsabilidades propias en la atención de los problemas sociales, y pasó a brindar funciones mínimas, apareciendo así las organizaciones intermedias (ONGs y Fundaciones) para atender ciertas problemáticas sociales estando éstas históricamente a cargo del Estado.

Para muchos críticos, tal lógica se trató de ceder un “negocio” a manos privadas amigas, como se observa en la reciente coyuntura del país. Se siguieron las instrucciones del Banco Mundial y las organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, quienes decían cómo debían administrarse los subsidios, planificaciones y proyectos, los créditos sociales sumado a indicar cómo debían atenderse las problemáticas locales, cualquier parecido con el contexto cercano no es pura coincidencia.

Las consecuencias de esta lógica de desguace del Estado, de la industria, del sistema de salud, la educación y el trabajo fueron guiados en la década de los '90 por los ejes centrales de la política económica: tendían al achicamiento del Estado (vía privatizaciones) y del Gasto Público (como porcentaje del Producto Bruto Interno). Estas políticas de ajuste, sumado a las políticas comerciales de libre cambio, como las del escenario 2016-2019, condujeron al cierre de empresas y despidos masivos, el abandono de los servicios privados de salud y educación (por la imposibilidad de pago), para buscar la gratuidad del servicio estatal, lo cual demandaba mayores fondos a un Estado con pretensiones de achicarse en materia social.

El impacto de este proceso de pauperización fue acompañado por el surgimiento de nuevas organizaciones sociales que fueron amalgamando demandas cada vez mayores de una población desamparada y con plena incertidumbre, sin perspectivas a mediano plazo. Es en ese contexto que surgen entidades de la sociedad civil: organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones civiles y fundaciones, dando respuestas compensatorias al corrimiento del Estado en términos de políticas sociales. En algunos casos estaban dotadas de conocimientos técnicos y capacidad organizativa para solucionar problemáticas sociales específicas y, en otros, desde una mirada netamente filantrópica o de beneficencia atendían demandas inmediatas en vistas de “poner parches”, desde Lessa (2000) éstas deben rechazarse como apriorismos metodológicos .Según M. Twaytes Rey:

“Tras estos postulados se esconde la pretensión de despolitizar las demandas y protestas sociales, en el sentido de redireccionarlas del reclamo al Estado a la auto responsabilización por el destino propio. Como complemento, la figura del voluntariado social aparece como la vía moderna de la beneficencia o caridad cristiana. Como la meta fundamental es ahorrar en gasto público directo (destinando menos recursos a metas sociales) e indirecto (por la vía de la desburocratización), detrás de la figura del voluntariado o de las asociaciones civiles está el afán de suplantar la provisión de bienes universales entendidos como derechos, por la donación caritativa (y discrecional) y la auto procuración de los bienes y servicios básicos para la subsistencia” (Twaytes Rey, 2004:33, 34).

Modelos de Estado y las respuestas a las manifestaciones de la “Cuestión Social”

Antes de continuar profundizando en las consecuencias de las políticas de ajuste de la década de los '90, se acompañará el recorrido histórico de los autores Marta Reinoso y Daniel Jaremchuk (2012) sobre los diversos modelos de Estado en la Argentina y las formas institucionalizadas de abordaje de la “cuestión social”³:

★ Estado oligárquico conservador:

En Argentina la generación del '80 y, a partir de la incorporación del país a la división internacional del trabajo como productor de materias primas, se consideraba a la "cuestión social" como las expresiones indeseables de la instauración de este nuevo modelo económico, por la imposibilidad del ser social de asumir ese nuevo cambio. Principalmente, desde estas expresiones la mirada recaía en responsabilizar a ese sujeto por la situación que se encontraba atravesando. Existía un alto nivel de explotación, acentuándose la desigualdad económica entre clase dominante y clase subalterna, entre la capital y las provincias.

Desde diversos sectores, entonces, se produce un cuestionamiento a las instituciones políticas y sociales del Estado respecto a la capacidad de éste para responder a la "cuestión social" y sus expresiones. Esto generaba una serie de cuestionamientos sobre los mecanismos de inclusión de su aparato. Surge (ante la necesidad de sostener la gobernabilidad) que el Estado deba intervenir en la "cuestión social" ampliando sus funciones con formas tecnificadas de filantropía, constituyendo la acción social como una instancia pública, buscando así actuar sobre las contradicciones en el proceso de acumulación capitalista para garantizar la "integración" social. Este es el punto de origen y de partida para la profesionalización del Trabajo Social.

En esta etapa pueden distinguirse las siguientes corrientes, con sus propias lecturas acerca de la "cuestión social", las que determinaron diferentes modalidades y estrategias de intervención: corriente médico higienista, corriente católica, corriente obrera y la Sociedad de Beneficencia. Cada una con una mirada particular de los sujetos, las "causas" de tal situación y por ende una forma de abordaje específica ya prefijada.

✦ El Estado de Bienestar

A fin de analizar la relación entre política pública, Estado y sociedad, los autores se refieren al Estado de Bienestar desarrollándolo a lo largo de tres momentos:

1. Década Infame

Con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 se inaugura una nueva etapa institucional en la Argentina. Las consecuencias del Crack de 1929 y su posterior gran crisis de 1930 alcanzaron dimensiones internacionales afectando la balanza comercial de Argentina, obligando así al Estado a redefinir políticas económicas, laborales y sociales. Se produce, por ende, un desmejoramiento de las economías regionales con fuertes movimientos migratorios desde las provincias del interior hacia el Río de la Plata, atraídos por la incipiente industrialización que se comienza a desarrollar alrededor de Buenos Aires. En este período la economía va a estar marcada por un modelo de industrialización por sustitución de importaciones.

³ Dicen "La cuestión social será para el caso argentino la manifestación de las diferencias económicas políticas, culturales regionales y/o raciales vinculadas a la instauración de la economía capitalista sobre la base de una sociedad colonial, esta abarcará mestizos, aborígenes, españoles segregados y movimiento obrero en etapa de organización. Como puede inferirse de los diferentes autores consultados la cuestión social adquiere rasgos particulares contraponiendo la organización política jurídica- que asegura los derechos a todos los ciudadanos con un sistema económico que genera miseria y pobreza-, cuestionando de este modo los patrones de integración prometidos por la generación del '80. Se manifestará histórica y socialmente a través de proyectos políticos antagónicos" (Reinoso y Jaremuk ,2012:47)

Según el recorrido bibliográfico realizado por los autores, hasta el año '40 no existieron políticas amplias ni abarcativas por lo que la intervención estatal se remitirá solamente al aspecto económico. Con respecto a las intervenciones en lo social, el Estado promoverá el control de los subsidios, que se traducirá en instituciones de registro y control de la población asistida y de las instituciones de asistencia social. Las acciones sobre demandas laborales tendrán como respuesta fuertes acciones de tipo represivo.

2. Gobierno Peronista

Con el ascenso de Perón a la presidencia de la Nación se produce una mayor presencia del Estado en el diseño y ejecución de políticas sociales y el advenimiento de nuevos sujetos de derechos. El Estado toma parte activa en la relación capital – trabajo siendo que se fortalece el rol del mismo en la generación de empleo, principalmente a través de planes de obra pública, la que se convierte en una herramienta más de redistribución. Se redefinen, además, las alianzas para el sostenimiento de la gobernabilidad y la legitimación popular.

Se produce en esos años la lectura crítica de la situación a nivel mundial: se vincula la situación de las poblaciones como consecuencia de la crisis del capitalismo, por lo que se realiza un importante cambio conceptual que va de la culpabilización individual a la responsabilización social.

El Estado en este momento adquiere protagonismo en la intervención sistemática ante las expresiones de la “cuestión social”. En el caso argentino, durante el primer gobierno de Perón (1946- 1952) se institucionaliza la política social como política de Estado. Se legislan, además, los derechos sociales de los trabajadores asumiendo rango constitucional, además el Estado va a influir en las prácticas sindicales y el sindicato, a su vez, se introducen éstos dentro del Estado.

El Estado de bienestar, por otro lado, permitió ampliar la base social y política con una clase obrera integrada produciéndose, entonces, un acceso masivo a los servicios básicos de grandes grupos poblacionales. De este modo, se entiende la ayuda social como cuestión de justicia y de derecho. En relación con las políticas públicas, respecto a salud, educación, vivienda y previsión se redefine la función social del Estado, logrando ampliar el nivel de legitimidad social por el carácter inclusivo y universal de algunas de estas políticas.

Aquí, la estrategia universalista de las políticas sociales estará asociada a la de los derechos sociales. Por su parte, la asistencia legitimada y conformada como política pública se afianza en 1948 con la creación de la Dirección de Asistencia Social. Para ese momento se amplían las funciones del Estado disolviendo la Sociedad de Beneficencia, creándose en su lugar la Fundación Eva Perón, la cual centraliza la acción asistencial, generando el Estado un plan económico para sostenerla.

La fundación, entonces, va a estar signada por muchos logros y avances junto a una intensa actividad interventiva del Estado hacia los sectores que se encuentren al margen del sistema productivo, siendo su lema que allí donde haya una necesidad habrá un derecho.

Desde los hogares de niños, ancianos, mujeres solas y en hospitales se trabajará en la cotidianeidad de las poblaciones, fortaleciendo también el imaginario cultural y social que el lugar en la escala social no debía impedir el

acceso a todos los bienes y servicios que poseían las clases dominantes. También el discurso -y el hecho - marcaba la posibilidad de la movilidad social de amplios sectores a través de la educación y de un empleo digno que así lo permitiera.

3. El Desarrollismo

Durante la etapa desarrollista, con el gobierno de Frondizi entre 1958 y 1962, se incorpora en todos los ámbitos del Estado la planificación para el desarrollo, direccionando la vida económica y social, con fuerte relación con las universidades. Se crean organismos de investigación y desarrollo que buscarán, a través de un ejercicio científico, superar las desigualdades regionales vinculadas a proyectos y planes que trabajen el desarrollo de la comunidad. Se intenta modernizar el Estado, mediante la renovación científica y técnica, entendiendo la necesidad de trabajar el desarrollo comunitario.

Junto con varios países de la Región, Argentina se incorpora a la Alianza para el Progreso lo que implicó el direccionamiento y la intervención de los organismos internacionales en los asuntos internos del país y en las políticas públicas a llevar adelante.

En este período, la mirada del Estado con respecto a las expresiones de la “cuestión social” se vinculó con la necesidad de una intervención estatal centralizada, coordinada y efectuada por especialistas superando las prácticas de “bondad” o “caridad” que se habrían desarrollado hasta el momento.

Por último, la política pública para el período se presentó como sinónimo de planificación del Estado. Asimismo, durante los gobiernos militares el desarrollo comunitario se vinculó al control y la represión, al “ordenamiento” y la “seguridad”.

✦ Estado burocrático autoritario

En este período se sientan las bases para el ajuste neoliberal que tomará forma y profundidad en la década del '90 y llegará hasta nuestros días. La dictadura cívico-militar comenzada el 24 de marzo de 1976, entre otras cosas, generará políticas económicas regresivas para el mercado interno la apertura de las importaciones e inversiones extranjeras con perjuicio de preservar la economía nacional. Durante este gobierno las políticas públicas relacionadas a lo social tendrán como principal objetivo el control y registro de las poblaciones atendidas con una racionalidad burocrática. Se instauran los primeros signos de la focalización de las políticas sociales que verá tres décadas más tarde su severa profundización.

La política que signará la etapa de la dictadura será la del disciplinamiento social en lo económico, político, cultural y social. Así se conformará una alianza compuesta por la oligarquía terrateniente agrícola ganadera, la alta burguesía industrial, la jerarquía eclesiástica y las fuerzas armadas, los que constituirán el “nosotros” como estrategia de instalación de un discurso uniforme.

Al decir de Gramsci⁴, la función de la sociedad política es el ejercicio de la coerción, conservando por medio de la violencia el orden establecido. Esto no se limitará solamente al campo militar sino que englobará el gobierno

jurídico y la coacción legal para la cual *“El derecho es el aspecto represivo y negativo de toda la actividad positiva de formación civil desplegada por el Estado”* (Portelli, 1977:17- 18). Enfrente quedarán constituidos “los otros”: los grupos de investigadores, agentes culturales, militantes, docentes, estudiantes -entre otros- a los cuales les estará destinado el confinamiento, la persecución, la “desaparición”, la ejecución, el fusilamiento, el encarcelamiento, el silenciamiento, la tortura y el temor permanente por ser considerados “peligrosos”, “comunistas” e instigadores de la rebeldía en una supuesta “guerra interna”, término que justificaría desde su óptica tal genocidio.

★ Estado de Transición: el regreso a la democracia

El gobierno de Alfonsín estuvo signado por la transición, entre un gobierno de facto con facetas liberales a un gobierno neoliberal. Si bien durante este gobierno se trabajó fuertemente en la reconstitución de la democracia argentina, con juicios hacia los responsables de la matanza, tortura, desaparición de 30 mil de personas y la apropiación de muchos de sus hijos, se evidenció una economía acorralada por la inflación y una crisis productiva por el desmantelamiento previo de la estructura productiva media. También puede verse en este período un deterioro del nivel de ocupación, con caída de los ingresos.

El gobierno se enfrentó a un alto grado de hiperinflación, paros generales y la ingobernabilidad que generaba no solamente unas fuerzas armadas empeñadas en no perder fuerza a nivel social sino, además, ante la presión de los grupos económicos concentrados y con un sindicalismo que, en conjunto, consiguieron que no se concrete un plan económico que pusiera freno a la crisis inminente. De este modo, se evidenciaron fuertes movilizaciones sociales en un primer momento con miradas optimistas hacia el futuro y hacia la participación popular.

En relación con las políticas públicas, en palabras de los autores, se continúa en gran medida con los planes y programas paliativos que ya existían y se crea el primer programa de política nutricional para la población más vulnerable y de pobreza extrema (PAN), intentando fortalecer la solidaridad social y el trabajo voluntario. Desde la planificación se consideraba un programa transitorio, que debería ser utilizado para situaciones de emergencia, existía así una lógica de atacar las consecuencias y no las causas de esas situaciones problemáticas, por ende, el programa fracasó.

Neoliberalismo

Con la llegada de Carlos Menem en 1989 al gobierno nacional se inicia una década de desmantelamiento del aparato productivo, del Estado de bienestar y del campo social. Las modificaciones en el mundo del trabajo trajeron aparejados el crecimiento sostenido del empleo informal y de los niveles de desocupación.

⁴ Gramsci agrupa en la estructura ideológica a las organizaciones cuya función es la de difundir ideología sino que también todos los medios de comunicación social y todos los instrumentos que permiten influir sobre la opinión pública. El autor, retomado por Portelli (1977), distingue así en el seno de la estructura ideológica las organizaciones encargadas de la difusión de la ideología de aquellas que incorporan su actividad a la fracción cultural, los jueces y oficiales del ejército, dice, forman parte de esta última. Las organizaciones culturales serían la Iglesia, la organización escolar y los órganos de prensa.

Con los acontecimientos descriptos previamente, atendiendo a que se dio comienzo a la ofensiva neoliberal con la instauración de la dictadura cívico militar en el país, se suma a este panorama un regreso a la mirada de responsabilidad individual: el sujeto, entonces, es puesto frente al mercado para que intente resolver su situación económica, educativa, habitacional, sanitaria y social. Se produce un ascenso de la conflictividad social además de una complejización de tal entramado, redefiniéndose el campo de las relaciones sociales.

En este período descrito por los autores, se heterogeniza la estructura social mientras que el estrato superior se homogeniza y achica. Las características del tejido social estarán marcadas por un aumento de vulnerabilidad, la agudización de las desigualdades sociales, aumento de la pobreza y la informalización del trabajo, produciéndose una reestructuración de género del mercado productivo informal ante la ola de despidos y la salida de las mujeres a realizar trabajos informales para poder subsistir. Todo este escenario terminó arrojando una gran crisis social en diciembre de 2001.

Las políticas sociales sufrieron fuertes focalizaciones aumentando, además, los requisitos para poder acceder a la cobertura de los programas, en su mayoría delineados y financiados por los organismos internacionales. En los años previos, en 1993, se crea la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, desde donde se realizaron algunas políticas de corte asistencialistas, focalizadas, subsidiarias y secundarias ante el agravamiento de las desigualdades sociales, es en este período donde se perdió la figura de sujeto de derecho siendo éste reemplazado por la de beneficiario.

★ ***¿El Neo Estado de Bienestar?***

A partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en el año 2003 se modifica el escenario presentado con anterioridad. Se señala, en base a la bibliografía trabajada, que a nivel de las políticas sociales se genera una importante labor con una fuerte presencia estatal (recuperando la perdida) en el ámbito del territorio nacional, frente a políticas con ciertos aspectos progresistas desplegadas simultáneamente en diversos gobiernos de Latinoamérica.

Se fortalece, como estrategia, la política alimentaria y economía social, de la cual se desprenden programas y proyectos. Se tiende hacia una ruptura con la lógica de la focalización, buscando implementar políticas de tipo universal las cuales no se han concretado en profundidad. Otra característica importante de este período es la gestión asociada a la participación de la sociedad civil, como estrategia de trabajo, como mecanismo de fiscalización de las políticas sociales, fortaleciéndose el trabajo con las ONGs y cooperativas en cada lugar, siendo éstas muchas veces las ejecutoras y fiscalizadoras de los proyectos y programas. El sujeto de la intervención deja de ser nominado como beneficiario (concepto propio del neoliberalismo) para ser nombrado titular de derecho y usuario de la política social.

En este período, existe una mayor participación en los espacios de debate político con un fuerte peso en materia de revisionismo histórico. Aumentó la presencia del Estado en todos los niveles de la vida política, económica y social. Por primera vez una profesional del Trabajo Social ocupó la dirección del Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación. Según refiere el equipo de investigación de Zambrini:

“Consideramos que las políticas sociales actuales están signadas en sus discursos y atravesadas en sus objetivos por las concepciones de universalización y de derechos intentando establecer un quiebre con las políticas neoliberales propias de la década del noventa. Sin embargo, las intensas transformaciones sufridas en la estructura social que se iniciaron a mediados de la década del setenta y se profundizaron en la década del noventa han dejado huellas en el mundo del trabajo y mercado laboral, que se traslucen en niveles de pobreza y condiciones de vida que las políticas sociales actuales no llegan a revertir” (Zambrini, 2010: 17) .

Miguez (2004) explica que para esos años el superávit fiscal fue casi de 6% por el aumento de ingresos consecuencia de la recuperación económica y del aumento de las exportaciones. La recaudación impositiva recae sobre el presupuesto de la población de menores ingresos. Kirchner prometió una reforma impositiva y un control más estricto de la evasión, cuestión que no se concretó. Se distribuye así el superávit entre el pago de deuda externa e interna.

Desde el 2003 la economía se logra recuperar por la fijación de un tipo de cambio que facilitó la sustitución de importaciones, las políticas sociales sostuvieron la demanda interna y el establecimiento de retenciones a las exportaciones contra la presión del FMI y la protesta de los exportadores. Esa recuperación permitió un crecimiento sustentable para la nación, el Estado promovió la recuperación tanto del empleo como de la educación, la industria y la innovación tecnológica, aunque se mantuvieron altos niveles de informalidad en el mercado laboral. Se producen amplias mejoras en la población, su calidad de vida y sus expectativas de futuro, pero se debía seguir trabajando sobre las marcas que han dejado los cuatro decenios previos.

La Argentina reciente

En la actualidad, evidenciamos como peligro el fortalecer en el imaginario social la idea de que el capitalismo es eterno, con el “fin de la historia” proclamado por Fukuyama (1992). Las caracterizaciones abordadas en el apartado anterior engloban lo que Isuani (1992) llama “El tejido de la “Cuestión Social”⁵, por mezclar aspectos nacionales, regionales y culturales junto a los económicos y políticos. El tejido de la “Cuestión Social”, de este modo, mezcla desigualdades y antagonismos de significación estructural (Isuani, 1992) con los que interviene el profesional del Trabajo Social.

Cabe destacar que, durante el período abordado, en nuestro país se repiten las medidas mencionadas previamente con lógicas de desprecio por la “cosa” pública, dejando que sea el mercado el único regulador económico social y político cultural. Esto mismo se reproduce a nivel regional presenciando una ola de gobiernos de tinte conservador en el continente, con liderazgos carismáticos de figuras que llegan para “cambiar la cara de la política” y “redimir a la política desde la moral”, siempre parándose desde una doctrina aliada al imperialismo, al cuidado del mercado internacional en detrimento del interno. Esto asienta niveles de racialización⁶ puertas adentro abriendo caminos represivos como se evidencia ante los reclamos sociales recientes en países de Latinoamérica por las

consecuencias que el neoliberalismo genera, favoreciendo la consolidación de desigualdades.

Daniel García Delgado (2018), explica que en los últimos años estas condiciones descritas se evidenciaron en el contexto nacional y regional comprendiendo un pasaje de un modelo de acumulación neo desarrollista inclusivo a un modelo neoliberal restringido. Este cambio presentó dos diferencias estructurales en función de la modificación de las formas de producción capitalista (fordista y posfordista), la tercerización y deslocalización de la producción global y la incorporación de la tecnología en la producción. También se sumó a ello la falta de resolución de la crisis capitalista de 2008.

Desde su abordaje describe que, durante décadas pasadas al surgir el Estado social y la organización gremial, se lograron procesos de industrialización sustitutiva que han permitido una movilidad social ascendente, con una sociedad consciente de sus derechos que le disputó la distribución del ingreso a las elites. Tal como explica el autor, la Argentina es un país que ha alcanzado buenos niveles de educación, teniendo una escuela pública, laica y obligatoria, acompañada de una reforma universitaria trascendental ocurrida hace ya cien años. Sin embargo, a fines del siglo XX se instauró rígidamente un capitalismo neoliberal de libre mercado que promovió políticas privatistas, con endeudamiento y apertura indiscriminada de la economía que destruyó la industria local, entre otras medidas que se fueron mencionando en el subtítulo precedente. Las políticas han sido aperturistas sumadas a una cultura de consumo de tecnologías e incorporación de estas, sin creación local. Posteriormente con la crisis se da comienzo en el siglo XXI a un modelo neo desarrollista inclusivo (García Delgado y Ruiz del Ferrier, 2013; Cao, Rey y Duca, 2016), donde el Estado asumió un rol activo y la cultura cambió el entramado de las instituciones y la participación popular en las mismas. Otros autores como Feliz M. y E. López (2012) analizan si el proyecto neo desarrollista nacional ha sido un modelo nacional-popular o una nueva etapa en el desarrollo capitalista, merecería todo un debate aparte.

Es a partir del año 2016 cuando el modelo neoliberal con su intención explícita de abrirse al mundo con la compra en el exterior, busca una modernización que persigue “liberar las fuerzas del mercado”, para “terminar con las fantasías populistas” –que se han dado también en la región- de movilidad ascendente, de paritarias sin techo, de mayor consumo y de aumento del salario real. A su vez, se aumenta la competencia y la productividad, abriéndose al comercio internacional mientras la mayoría de los países desarrollados se tornan proteccionistas y se cierran protegiendo su mercado interno. Sostienen Grassi y Hintze (2018):

“La simplicidad de ese discurso político se conjuga con la cosmovisión neoliberal que, a su vez, tiene como característica principal ser radicalmente a-social, y por eso, antisocial”(...)

⁵ Emerge la “cuestión social” descrita por Zimmermann, en mirada segmentada, como “El conjunto de consecuencias sociales del proceso de inmigración masiva, urbanización e industrialización que transformó al país, entre los que se encontraron problemas relacionados a las áreas de vivienda, sanidad, salud pública, el aumento de la criminalidad urbana, la protesta obrera y el surgimiento de nuevas corrientes ideológicas que desafiaban la validez de las instituciones políticas y económicas vigentes” (Zimmermann, 1994:74)

⁶ Para Quijano (2000) la conformación de América está caracterizada desde sus inicios por la asociación estructural de dos determinaciones: la clasificación racial de las poblaciones se ensamblaba con el control del trabajo y sus frutos, configurando una división racial del trabajo.

Por eso, la economía y la política neoliberal pueden ser tan destructivas de la vida social, como muestra la experiencia más reciente bajo el gobierno de Cambiemos. La política neoliberal asimila y reduce los contenidos del discurso político a lo más primario y evidente del sentido común y con eso y sobre eso construye, fundamenta y lleva a cabo un proyecto de gobierno. Es decir, desde el lugar donde los lazos de pertenencia deben recrearse (función de los símbolos, los relatos históricos, el panteón de héroes y “padres de la patria”, tanto como de los bienes y servicios sociales, que amalgaman la diversidad en algún “nosotros” común), se producen y reproducen, en cambio, autopercepciones de grupos restringidos de gentes “como uno” (pertenencias de clase) capaces de cooptar las visiones y la comprensión de amplias capas de la sociedad” (citado en Grassi, 2019: 7) .

Desde el inicio de su gestión, a fines de 2015, el gobierno de la coalición Cambiemos buscó disminuir costos sociales, reduciendo salarios y cuestionando los derechos laborales: rasgos típicos de la flexibilización laboral justificada desde un discurso que se orienta a la “meritocracia”. Realizan una apuesta al emprendedurismo, como estrategia de invisibilización del empleo en condiciones flexibilizadas y de precariedad y la recesión, en donde -dentro del desempleo incluso- se ven limitadas las changas y los trabajos temporales del núcleo productivo informal. Esto no es un accionar inocente sino que es propio de un orden moral neoliberal (Roy, 2006). Expone Grassi:

“También entre nosotros se trató de priorizar el control y de asegurar el merecimiento. Nos ocupamos del lugar del miedo y la culpa en el discurso de Cambiemos en los años anteriores (Grassi-a, 2018; Ayos y Jack, 2018). Entonces, los controles del Estado se dirigieron a lo micro: a la economía doméstica y los comportamientos respectivos en la vida cotidiana, mientras se liberalizaban los movimientos del capital y los comportamientos de sus agentes” (Grassi, 2019:9)

De este modo mientras el capital global se nutría de especulaciones de los gobernantes y empresarios cercanos, la iniciativa individual adopta carácter de informalidad, siendo monotributistas subsidiados, desmantelando así la trama industrial y las agencias públicas como educación, salud, ciencia y tecnología y hasta la educación universitaria. En esta reproducción sistémica, con una administración de la crisis del capitalismo contemporáneo, mientras se reduce el empleo formal y de calidad se disipan los anhelos de alcanzar tales condiciones. Al no diseñar políticas para generar empleo, lo que crece entonces es la gestión criminal del desempleo por medio de la persecución a las conductas y consecuencias de dicha falta. Grassi afirma que:

“El discurso político neoliberal y este apego a lo que se cree saber del sentido común, conlleva el efecto de la despolitización de la cuestión social, para poner en marcha una política social fundada en otras problematizaciones que combinan policiamiento y banalidad: la inseguridad en primer lugar, la felicidad y la vecindad, y la actitud proactiva entretejen otra politización de lo social. Esa combinación fue proverbial durante el periodo del gobierno de Cambiemos” (Grassi, 2018-b).

Estado Neoliberal y desregulación estatal

“La suya es una sociedad de clases, señora, y la suya también, señor y ténganlo muy en cuenta, si no quieren que su amnesia termine en terapia de choque. También es una sociedad capitalista y accionada por el mercado, uno de cuyos atributos es el ir dando trompicones de una depresión/recesión a otra. Como es una sociedad de clases, reparte los costes de la recesión y los beneficios de la recuperación de forma desigual, aprovechando cualquier ocasión para dotar de mayor firmeza a su columna vertebral: la jerarquía de clases.”

Zygmunt Bauman, 2012

Moncada (2009) sostiene que, aparte de defender que la economía es básicamente un ejercicio de libertades individuales, el neoliberalismo tiene principios muy sencillos, que adoptan generalmente fórmulas dogmáticas como han de ser: “cuanto menos Estado mejor”, “la iniciativa privada es siempre más eficaz”, “el capital debe viajar libremente, sin fronteras” (especialmente en tiempos de globalización). La guía principal de la acción de los postulados liberales es la fórmula “que todo lo cura” titulada teoría del derrame, en cuya virtud el Estado debería otorgar capital y libertades a los sectores dominantes que, de forma inevitable, derramará el excedente de capital como el contenido en una copa llena, llegando éste indefectiblemente a las clases subalternas. Pero la aplicación de este ilusorio e irrisorio pronóstico nunca se producirá.

En este marco es que a partir de la década del '90, en el contexto de Reforma del Estado y del aumento de la brecha entre ricos y pobres, existe un aumento de las experiencias de vulnerabilidad, expulsión, inestabilidad y precariedad en el entramado social, que afecta a niños, adolescentes y sus familias.

Casi todos los países de América Latina en la década de los '90 han atravesado por transformaciones y reformas. Argentina sufrió que una alianza de intereses se apoderará del control del Estado. Estos intereses relacionados con las corporaciones transnacionales hicieron que se implementen políticas de ajustes que modificaron el esquema político de la nación.

El Estado Benefactor argentino, siguiendo el recorrido de Tenti Fanfani (2007), se dismanteló junto con una campaña de desprestigio de lo público. Esta campaña, como se evidenció en los últimos años, se basó en un programa de reformas inspirado en el neoliberalismo y en el neoconservadurismo. El modelo apuntó a achicar el Estado, reduciendo “lo público” en materia social.

Este modelo se había convertido en un pensamiento único, mientras que su política era negar lo que se estaba haciendo y los verdaderos objetivos que se perseguían. Sostiene el autor que:

“(…) La dicotomía Estado-mercado organizaba las visiones del mundo. El primero era el lugar de todos los pecados, defectos y errores, y en el mejor de los casos se lo consideraba un mal inevitable. El mercado, por su parte, era el espacio de todas las virtudes y potencialidades. El Estado estaba habitado necesariamente por burócratas y

políticos, por lo general ineficientes, incapaces y corruptos. En cambio, los emprendedores, en tanto sujetos protagónicos del mercado, se controlaban a sí mismos a través de un sistema automático de premios y castigos, tan inapelables como "objetivos". Las leyes del mercado son naturales (Tenti Fanfani, 2007:16) así también "Las leyes del mercado no necesitan ejecutores, ya que producen ganadores y perdedores de un modo automático" (Tenti Fanfani, 2007:17).

Menciona Susana Torrado (2010), retomando el modelo instaurado en las décadas previas, que las políticas aperturistas de la década del '70, que se profundizaron en la última década del siglo XX, marcaron el deterioro de la calidad de vida de grandes sectores de la población sumado a un aumento en los niveles de pobreza.

La década del '70, entonces, con la crisis capitalista y la impronta conservadora que se fue dando internacionalmente expresó en el país un fortalecimiento de la "Doctrina de seguridad nacional" a partir de la cual, el peligro ya no era la amenaza externa de las "ideas comunistas", sino que se encontraban al interior de cada país siendo así el pueblo -y en especial quienes presentaban ciertas características entendidas por ellos como "transgresoras"- el considerado como peligroso. En sus comienzos, esta década mostraba un crecimiento económico y un mejoramiento distributivo, pero se notaron a su vez tensiones económicas, sociales y políticas, acompañadas de un debilitamiento del modelo sustitutivo de importaciones.

De este modo, la dictadura militar comenzada en 1976, junto con la complicidad de sectores de la burguesía y empresas trasnacionales, da por finalizada la industrialización como objetivo principal del desarrollo. A partir de aquí, se inicia la era del ajuste ya que la política económica (marcada por la apertura) permitía y fomentaba el avance del capital financiero en la regulación de la economía local, además de la creciente deuda pública, combinado con una regresión en la distribución de los ingresos y con amplias violaciones a los derechos humanos.

Para Rappoport (2006) *"Con el golpe militar se produjo un verdadero punto de inflexión en la historia del país (...) Esto llevó a la adopción de una serie de políticas que incluían una drástica redistribución regresiva de los ingresos"* (citado en Torrado 2010 :31). Posteriormente cabe remarcar que, con la restauración democrática, se encuentra al país más desigual y empobrecido con una debilitada actividad productiva por la apertura económica y con una estrategia basada en el endeudamiento público y privado externo, que luego con la estatización de las deudas privadas, configuró una gran traba para el desenvolvimiento económico del país. Para Grassi y Alayon (2004) :

"Si los años de la última dictadura militar (1976-1983) iniciaron el ciclo regresivo (...) fue el gobierno democráticamente elegido, que condujo el Estado entre 1989 y 1999, que logró instalar y consolidar, consciente y voluntariamente, el proyecto político del neoliberalismo produciendo, por ese camino, la más extraordinaria catástrofe social. Un país productor de alimentos, con importantes recursos energéticos, con altas tasas de ocupación, terminó con más de la mitad de su población en situación de pobreza (una parte importante de ella, sin capacidad de cubrir las mínimas necesidades alimentarias) y con índices de desocupación abierta de alrededor del 20%" (citado en Torrado, 2010 : 35).

Las citas expuestas hacen referencia a que la tarea que se inició a mediados de los '70 con acento en la

represión política, robo y apropiación ilegal de bebés de los detenidos, “desapariciones”⁷, se profundizó durante los ’90 en el marco de un gobierno popular sostenido por el voto, y se retomó con un escenario de ajuste brutal en el período abordado.

Las privatizaciones, la apertura de la economía para el ingreso de productos extranjeros, el cambio de la relación capital-producto, (en base al endeudamiento externo), la creciente desprotección del sector del trabajo asalariado, son elementos que marcaron aumentos inéditos en lo que tiene que ver con desempleo, subempleo, precariedad laboral, bajo salario real y disminución de la participación del salario en el producto. Mientras tanto, se produjeron profundos cambios socioculturales en la mencionada “*década del 90, como ciclo de la hegemonía neoliberal*” (Danani y Grassi, 2008:259). A partir de allí existió un gobierno débil en lo interno y carente de apoyatura internacional, desacreditado en un contexto político que se expresó en las elecciones legislativas de octubre de 2001.

Luego de años de acumulación, concentración del ingreso, despilfarro de los fondos públicos, privatizaciones, y priorización del mercado por sobre el Estado llegan, con un fuerte carácter represivo por parte del aparato estatal que se llevó la vida de varios manifestantes que exponían diversos reclamos sociales por sus derechos vulnerados, las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001. A partir de esta crisis, se presupone que se da por “derrotado” el modelo neoliberal, que afecta no sólo la economía sino que produce una pauperización en las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad. Luego de este período se avanza hacia otro rumbo, fortaleciéndose un modelo diferente, ahora sí, con intervención del Estado pero sin poder abandonar la impronta del modelo neoliberal reinante.

Además de dejar elementos desfavorables importantes como ha de ser el deterioro de la sociedad y de la economía, Torrado agrega que “*El período 1976-2002 no sólo se ha caracterizado por el retraimiento de la acción estatal, sino por la pérdida de capacidad regulatoria del Estado*” (Torrado, 2010:210). Se había producido una polarización social, mientras que la clase política se enorgullecía de “instalar al país en el primer mundo” por la apertura económica dando un paso para la globalización.

⁷ En América Latina existieron diversas estrategias para ocultar lo que se buscaba implementar, el método aplicado en la Argentina (guiado por el Plan Cóndor) consistía en las desapariciones, es decir, ya nadie sabía dónde estaba la persona que no encontraban, preguntarían por ella hasta que se cansaran de buscarla generando un agotamiento también subjetivo, de este modo también podría existir en los cercanos la duda de que se haya ido por motus propio. Esta modalidad siniestra fue utilizada para encubrir que los asesinaban, así como en otros países como Chile y Uruguay se dieron los fusilamientos y las torturas, en casa país se implementaban diversas modalidades criminales de represión. Cabe destacar que Plan Cóndor es el nombre con el que se conoce el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América —Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador— con la compañía de los EE. UU., llevada a cabo entre las décadas de 1970 y 1980. Esta coordinación se tradujo en “*el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como 'subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de la región'*” (Espasa Calpe, 2013). El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado - y su criminalidad-, que instrumentó el asesinato, desaparición de decenas de miles personas (entre ellos niños y bebés en apropiación ilegal sin registros hasta nuestros días).

Este mismo panorama es el que se evidencia y se repite en la coyuntura nacional reciente, específicamente entre 2016 y 2019, produciéndose una desnacionalización de la industria, imponiéndose los shoppings e hipermercados, la compra de lo importado como otorgador de status concentrando la oferta en estos nuevos formatos.

Desde un análisis similar, Ignacio Lewkowicz (2004) explica que ocurrió en el país un desfundamiento del Estado, que en el “estallido social” del 2001, no sólo la sociedad se puso de pie con su reclamo público, sino que se acabó en el proceso de agotamiento del Estado-nación siendo la expresión unánime de amplias mayorías el “que se vayan todos”; de esta manera se abre la necesidad de “pensar sin Estado”- en sus palabras. Asimismo, el Estado no desaparece como ente, sino que se agota la capacidad que éste tenía para instituir subjetividad. Explica el autor que se evidenció una conversión del Estado-nación a un Estado técnico-administrativo (post estallido social), emergiendo la figura del ciudadano como mero consumidor. De este modo, y gracias a la desregulación, desapareció el rol moderador del Estado en los procesos de concentración del capital.

Postula que en el discurso el Estado representa el lazo social, en donde el ciudadano se establece como soporte subjetivo del Estado nacional. Esta emergencia la explica diciendo que *“La relación social ya no se establece entre ciudadanos que comparten una historia, sino entre consumidores que intercambian productos”*. Así, afirma que *“los no-consumidores pierden la condición humana”* (Lewkowicz, 2004: 35). Con respecto al lazo social, sostiene que el discurso económico, prescribe la privatización y el ajuste, deshaciendo aún más el tejido social. El ajuste, destaca, tiene dos aspectos: el material (visible) y el aspecto discursivo (imperceptible) donde se busca instalar en el centro un discurso económico como realidad unidimensional. Agrega, entonces, que no se habla de empobrecimiento sino de expulsión de ciudadanos, sumado al cambio en el estatuto social de la ley donde se borra la figura del semejante.

Mientras se dismantelaban los restos del Estado benefactor, se aceptaron acríticamente los requerimientos del Banco Mundial para implementar programas asistenciales (diseñados y aplicados de igual forma en todos los países, por lo que son llamados “enlatados”). Los criterios de los créditos se basaban en focalizar los programas en la población en situación de indigencia y requerir así alguna contraprestación de la población asistida.

En el periodo 1991-2001 la pobreza se hace masiva y estructural ya que se implementaron políticas focalizadas de tinte compensatorias que, aunque los recursos se concentraban entre los más necesitados, nunca atacaban las causas reales de tal situación. El resultado ha sido una asistencia social que terminó basándose en las carencias inmediatas -y visibles- pero no en el resultado de investigaciones profesionales, siendo básicamente dependientes de créditos externos, controlada y predeterminada por prestadores que estipulaban lo que era o no necesario en este país desde un escritorio del extranjero. A pesar de ello, actualmente somos testigos de la reinstalación de este organismo, el Fondo Monetario Internacional como organizador del Estado Nación, el cual fijó sus oficinas en el país en 2018 para consolidar parte de una restauración conservadora en gran parte de la región.

Las políticas implementadas en las últimas décadas, según Escudero (2005) resultaron caras y malas. Caras por la cantidad de especialistas contratados a precios internacionales y malas porque al focalizar se señalaba a los indigentes, a los más necesitados, a “los peores” contribuyendo a una especie de descalificación, diferenciación, rotulamiento y estigmatización de los asistidos, segregándolos entre las propias víctimas del sistema. Comenzaron a

abrirse, entonces, comedores populares ya que a medida que aumentaba la pobreza los programas colapsaron o financiaron sólo la emergencia alimentaria. Los comedores contribuyeron a romper la comensalidad hogareña intrafamiliar, con su potencial socializante, dándose así una comensalidad de tipo colectiva.

Siguiendo con las políticas de ajuste referenciadas, Susana Torrado (2010) revisa aspectos sobre la vivienda y el acceso a la educación. Sostiene que en el Estado se evidenció una dificultad para garantizar la coherencia y continuidad de las políticas sociales, por lo que se han ido consolidando asentamientos precarios en diversas zonas periféricas y céntricas de las grandes ciudades. Desde el punto de vista de los intereses populares, las elecciones de los espacios para la supervivencia revelaron la importancia de la centralidad urbana, la proximidad a los espacios con mayor cantidad de gente, la circulación, la accesibilidad a servicios urbanos, pero no garantizaba de este modo el “derecho a la ciudad”. Esta realidad no se evidencia en la localidad abordada de la Patagonia, donde el acceso a la tierra fiscal es garantizado, aunque no en su totalidad, por medio de planes nacionales de viviendas de montos accesibles implementados mediante articulación provincial y municipal que, a diferencia del resto de las grandes urbes, cuenta con amplia extensión territorial y una población acotada para su ocupación y oportuna distribución.

Por otro lado, una consecuencia de este modelo (con ausencia del Estado garante) se dio también al presentarse una segmentación y deterioro en la educación pública. Sostiene Guillermina Tiramonti (2004) que hubo una fragmentación, para dar cuenta del agravamiento de la división social del sistema educativo. Apunta así a subrayar la falta de vínculo entre los fragmentos de una totalidad común y normativa, en contraposición con la idea de segmento que supondría un campo integrado. Se suma la ampliación inédita de las brechas sociales entre los alumnos incluidos masivamente, muchos de los cuales asisten a la escuela con el fin de poder tener un único plato de comida diario.

Las nuevas configuraciones económico sociales de la estructura poblacional demuestran que las sociedades -como un todo- son cada vez más ricas, a la vez que son cada vez más desiguales. Cada vez se produce más riqueza con menor fuerza de trabajo y para menos consumidores, aumentando la concentración de la misma. De esta forma, el empleo se convierte en un elemento escaso de la sociedad tendiendo a su informalización, siendo así una relación social de hecho. Esta desregulación produce una modificación del equilibrio de poder entre los capitalistas y los asalariados, beneficiando a los primeros, aspecto que se abordará en el siguiente subtítulo.

Muchas de estas poblaciones y sus descendencias pasan entonces a encontrarse “por fuera del sistema”, considerando que las oportunidades de acceso real a sus derechos y la garantía de los mismos, son limitadas por el propio sistema. El neoliberalismo, y tal como se mencionó en la introducción de la presente tesis, no sólo es un modelo económico, con injerencias políticas, educacionales, sociales y culturales, sino que además configura un afianzamiento ideológico de las nociones instauradas de individualismo y competitividad como competencias “positivas” fomentadas. Dentro de la cosmovisión que instala el neoliberalismo, la territorialidad no existe en términos de apropiación, identidad ni pertenencia, sino que se refuerzan nociones de fronteras desde miradas basadas en relaciones sociales mercantilizadas.

Tal como se afirmó previamente (Escudero, 2005), Argentina en el momento posterior de auge neoliberal había tenido un récord -entre los 40 países del continente americano- en sus niveles de empobrecimiento, además de

haber sido el que se empobreció más rápido. La caracterización de la pobreza, según la ONU tiene que ver con indicadores de índole biológicos, esto entonces permite demarcar cómo los sectores hegemónicos adjudican la culpa a los pobres de su situación omitiendo así las responsabilidades del Estado en sus omisiones para tal caso.

Particularmente, se ha observado en el país un aceleramiento de los niveles de la pobreza con la crisis de 2001 para posteriormente evidenciarse entonces una alta concentración de la riqueza. Esta amplia brecha hace que las desigualdades sean cada vez más marcadas, siendo los pobres los que padecen una falta de acceso a la educación (lo cual los atrasa), malas condiciones de salud, siendo algunos analfabetos y viviendo situaciones que los enmarcan en un estado de vulnerabilidad. Escudero (2005) explica que las condiciones de salud de los sectores más desposeídos se caracterizan por tener un desarrollo psicomotor tardío, sin demandar atención-estimulación, contando con un vocabulario menor, así como menor es el tamaño físico que adquieren, menor expresión, mayor probabilidad de enfermarse y morir, retraso en los ciclos menstruales, casos de desnutrición y malnutrición, retraso psicológico tardío, entre otros estados que atraviesan. La población en situación de pobreza⁹ es más vulnerable, y a su vez presenta menor esperanza de futuro (el cual es más impredecible que en cualquier otro caso). Esta poca seguridad en el futuro se da como consecuencia del proceso de ruptura del tejido social sumado a, entre otros factores, el desmoronamiento de las redes de contención con las que podían contar.

Argumenta que, por la falta de empleo, de redes contenedoras y de servicios de atención inmediata también aumentarían las agresiones domésticas por causas de depresión, de consumo de sustancias; a partir del aumento de la impotencia que se concretiza al no “mantener la casa”, reflejando el mandato cultural patriarcal en el cual el hombre-adulto-heterosexual indefectiblemente debería ser el proveedor, el jefe del hogar.

Los cambios en las instituciones y el Estado

La teoría del Estado, según Poulantzas (1980), es una crítica a las concepciones simplistas del marxismo instrumentalista, que sostienen que el Estado es un simple instrumento en manos de una clase social determinada. El autor afirma que el Estado es quien asegura el funcionamiento de la sociedad capitalista, donde se beneficia esta clase en una forma compleja, donde la represión no es la única función del Estado, sino que persigue lograr consensos por medio de alianzas y la promoción de cierta ideología que garantice la reproducción social.

Poulantzas (1973), postula que el Estado posee la función particular de constituir el factor de cohesión entre clases sociales, siendo factor de orden y de regulación del equilibrio en el sistema.

⁸ Concepto que se abordará en el capítulo III.

⁹ Se aclara que según el organismo INDEC son consideradas pobres aquellas personas que no acceden a cubrir bienes y servicios, mientras que los indigentes serán quienes no accedan tampoco a la canasta básica de alimentos. Esta definición oficial de tales categorías deja por fuera las posibilidades de acceso y permanencia en ámbitos educativos, de salud, condiciones de vivienda, entre otras limitaciones existentes que reflejan inaccesibilidad a diversas políticas públicas de corte, supuestamente, universal.

En esta articulación, forzada, es que el Estado impide el conflicto político de clases como parte y contraparte de una formación social históricamente determinada por su modo de producción. En cuanto a su función de orden y control, el Estado presenta diversas modalidades como la técnica económica (organizando el proceso de trabajo y la productividad de este) y la función política en la lucha de clases e ideológica (organizando el proceso de educación y enseñanza).

El autor afirma que, el papel central del Estado es político, sobre todo en una sociedad dividida en clases donde el conflicto es una amenaza permanente. Esta concepción está presente en el argumento de Pastorini (2004) sobre el uso y objeto de las políticas sociales -como anticipatorias de los conflictos sociales-, enmarcadas en un neoliberalismo que persigue como fin último la restauración del determinismo mercantil.

En una formación capitalista, en el nivel de dominación política, explica, coexisten fracciones de clases que se constituyen en un bloque de poder. Éste configura una unidad dominada por la clase o la fracción hegemónica. El Estado capitalista funciona como unidad centralizada, organizada, partiendo del dominio de ciertos poderes sobre algunos otros: es el Estado el lugar donde se expresa la legitimidad del poder político institucionalizado.

Cantamutto y Strata (2018) afirman, citando a Poulantzas, que los impulsos estructurales encuentran siempre resistencias de parte de los sectores afectados, y su resultado final nunca está dicho. Las tensiones no sólo se inscriben en la oposición dialéctica con las clases populares, sino también al interior de las propias clases dominantes, cuyos intereses y demandas tienen aspectos comunes, pero también puntos de disidencia. Los capitalistas, se encuentran así en lucha con las clases populares -lucha de clases- pero también entre sí, buscando determinar qué fracción del bloque de poder dirige el proceso (Poulantzas, 1980).

Retomando a Lewkowicz (2004), la sociedad atraviesa por una violencia generalizada, una condición generalizada de experiencia al no actuar los Estados como capaces de determinar el devenir de la sociedad, convirtiéndose en meramente administrativos.

Con relación a las instituciones, agrega que *“Las instituciones se articulan en una red simbólica de sentido. La unificación no significa homogeneización, fluyen capitales, imágenes, información que desrealizan (universalizan) las fronteras”* (Lewkowicz, 2004:73). En la crisis de 2001, del estallido social en sus palabras, se produjo una destitución del Estado-Nación como práctica dominante, fundamentando que no tiene que ver con un mal funcionamiento de éste sino con la descomposición gradual de un Estado ordenador de todas las situaciones, como articulador simbólico. Pasa entonces a adquirir el Estado un grado de incertidumbre y perplejidad, caracterizando a esta etapa, para el autor, como un pasaje de la solidez a la fluidez¹⁰.

Con este término enmarca la perplejidad permanente vivenciada, la cual deriva de la “indeterminación intrínseca de la realidad social”. Lo que no estaba cohesionado, entonces, se estaba dispersando ya que, en esa fluidez, las instituciones pasan a ser, según su consideración, meros galpones¹¹ depositarios tanto de personas como de reglamentaciones.

Agrega, que esta lógica supone un pensar sin Estado, siendo una manera de pensar en donde no se suponen las condiciones de regulación estatales, implicando ello el pensar una experiencia en sus propias determinaciones,

enmarcadas en el desfondamiento del mismo. Acompañados por este cambio, tanto en el Estado como en las instituciones, se han dado modificaciones en la subjetividad de las personas como también en reestructuración de la trama tradicional con relación a las familias, siendo éstas nuevas manifestaciones de la “cuestión social”. Como se ha abordado anteriormente, los cambios de ésta se relacionan tanto a su composición, sus niveles de organización, los momentos que atraviesan, sus necesidades, las formas de superar las crisis o cambios, los espacios que habitan, como a los tiempos propios de sus miembros. Al decir del autor, su constitución dependerá de diversos ambientes como el familiar, el de conformación institucional y los espacios que le sean asignados en la estructura de clases.

En nuestro país, ante los cambios y las nuevas manifestaciones de la “cuestión social” es el Estado quien diseña y ejecuta políticas sociales -focalizadas y descentralizadas- hacia el “combate de la pobreza”, con la excepción de la AUH que se mantuvo como política transversal en el período analizado, en pos de mantener el status quo. Así se permite ir dando respuestas individualizadas con una creciente criminalización de la pobreza y de las protestas sociales, tal como se ha descripto.

Las políticas sociales y las nuevas manifestaciones de la “Cuestión Social”

Sostiene Iamamoto que la “cuestión social” indica la emergencia de la clase obrera y su ingreso en el escenario político por la lucha en pos de los derechos laborales y su reconocimiento como clase por parte del bloque de poder, en especial por el Estado. Así, las luchas sociales rompen el dominio privado en las relaciones entre capital y trabajo, extrapolando la “cuestión social” hacia la esfera pública, exigiendo la interferencia del Estado para el reconocimiento de los derechos y deberes de los sujetos sociales implicados. Según Iamamoto (2001) la expresión daba cuenta de la amenaza que la lucha de clases representaba al orden instituido.

La autora propone comprender la profesión como históricamente situada, como una especialización del trabajo colectivo dentro de la división social del trabajo, en la sociedad industrial. La “cuestión social”, entonces, pasa a ser tomada como recorte sin comprender a la misma como totalidad, y enfrentada entonces con políticas sociales específicas, para el Estado el Trabajo Social deberá “administrar” la “integración”. Sin embargo, es dentro del Trabajo Social donde se deben encausar las rupturas necesarias para consolidarse desde una mirada crítica que cuestione e interpele el lugar asignado de orden, control y vigilancia.

Margarita Rozas (2001) entiende la “cuestión social” como originada y emergente de la relación contradictoria entre capital-trabajo, cuando las clases sociales hacen su aparición en el escenario sociopolítico y cuando la clase trabajadora se evidencia como actor político y social.

¹⁰ Concepto que se asemeja a la categoría de liquidez de Zygmunt Bauman, refiriéndose el autor a la vida líquida como una sociedad basada en el individualismo, convirtiéndose en algo temporal e inestable que carece de aspectos sólidos. Desde este enfoque, afirma, que todo es cambiante y con fecha de caducidad, sin estructuras fijas.

¹¹ Refiere el autor que las instituciones devienen en galpones por los efectos del desvanecimiento institucional, todo lo procesa sin un discurso institucional. Remarca, (...)“ *Entonces, no estamos en la ruina de las instituciones, en las crisis de las instituciones, sino en el agotamiento de lo institucional mismo por desfondamiento de su condición Estatal y meta institucional*” (Lewkowicz, 2004:175).

Para ella entonces, se manifiesta en el despliegue de un conjunto de desigualdades marcadas por aspectos políticos, económicos, raciales y culturales, conjunto de contradicciones que la sociedad capitalista no resuelve y que marca un dilema en la relación entre lo económico y lo social, lo político y lo económico, lo público y lo privado, constituyéndose en un sistema de injusticia social, de explotación y alienación del hombre.

Iamamoto (2001) expone que en la contemporaneidad la “cuestión social” es objeto de un violento proceso de represión y criminalización de las clases subalternas; se da una “naturalización” de ella, y sus manifestaciones son objeto de programas focalizados de “combate a la pobreza”. Plantea que se corre el riesgo de caer en la pulverización y fragmentación de la “cuestión social” en “cuestiones sociales”, a su vez atribuyendo unilateralmente a los individuos la responsabilidad por las dificultades que se presenten. Así se deriva en el análisis de los problemas sociales como problemas de los individuos aislados, perdiéndose la dimensión colectiva de los mismos. Expresa que este mecanismo es una “artimaña ideológica liberal”, para autonomizar las múltiples expresiones en “cuestiones sociales”, sacando el foco en su origen: la organización social capitalista.

Netto (2000) afirma que no hay una nueva “cuestión social”, sino que hay una vieja causalidad invisibilizada (el antagonismo entre capital-trabajo) ante lo imprescindible que resulta el trabajo para la reproducción del capital. La tesis de Iamamoto afirma que hay una renovación de la vieja “cuestión social”, que se metamorfosea, con nuevas condiciones socio-históricas de producción y reproducción. Como aspectos de la escena contemporánea describe: la mayor concentración de la renta y el aumento de la pobreza; la apertura de la economía, el cierre de empresas nacionales, la destrucción del aparato industrial, la mayor necesidad de financiamiento externo, con una gran reducción de los niveles de empleo. Por otro lado, como se abordó anteriormente, la flexibilidad que afecta los procesos de trabajo y los derechos sociales y laborales (aumentando el lucro y reduciéndose la demanda de trabajo vivo); la restricción del gasto social estatal y privatización de la cosa pública. Por último, recae en que la sociedad de mercado es el eje regulador de la vida social, con un refuerzo de la mentalidad individualista y por ende del pragmatismo en ello. Tal escenario amplía y consolida la pobreza, en todas sus formas.

Retomando la noción de pobreza, ésta tiene un abanico de abordajes que van desde la búsqueda de su origen en los modos de organización social, en la teoría marxista, hasta la visión de economistas liberales que consideran la pobreza como un “mal necesario” cuya función es motivar a los sujetos a entrar en el circuito del trabajo - por propio mérito y “esfuerzo”-. Más allá de eso, surgen rasgos propios de dicha situación como la desposesión, el deterioro, la carencia, la deficiencia, la privación, la ausencia, la escasez, la incertidumbre, el descontento, la incapacidad de satisfacer necesidades, además de la falta de seguridad, la falta de ingresos e imposibilidad de acceso a bienes materiales y sociales.

Estos aspectos son los que hacen de la pobreza un concepto relacional, en tanto y en cuanto necesita la presencia de un “otro” que no es pobre para definirse a sí misma. Además, la pobreza es relativa, ya que los parámetros con que se la define se enmarcan en un determinado espacio-tiempo, que van a diferenciarse de los parámetros de otros momentos históricos, condicionando la forma con la que se distribuyen socialmente los recursos,

siendo por tal motivo que se elige hablar de situación de pobreza, otorgándole un carácter de posible transición y movilidad hacia otro estado que modifique lo previo. Estos parámetros, son indicadores que se utilizarían en la construcción de políticas sociales. Para medir el tamaño de la población en situación de pobreza en la actualidad se utilizan dos modalidades distintas: el cálculo de la línea de pobreza y el de línea de indigencia.

Siguiendo a Escudero (2008), el método de “línea de pobreza”¹² es aquel que mide los ingresos, y que presenta méritos y limitaciones; estas últimas consisten en que es un método objetivo (ya que no describe la experiencia propia de los pobres), siendo además un instrumento costoso para el Estado. Desde la mirada del autor, la lógica capitalista remite a una repartición diferencial, en donde los que están empleados son sobre explotados y sobre consumidores (cansados además para poder salir a protestar), el desempleado se haya desesperado y pelea por un empleo, aunque sea éste un trabajo desregulado, inseguro y precarizado siendo tales elementos característicos de la ofensiva neoliberal. Las situaciones anteriormente descritas como manifestaciones de la “cuestión social” configuran un conjunto de contradicciones que genera el propio sistema, las cuales debe atender, al mismo tiempo, para mantener el orden social vigente. Es un concepto complejo que permite dilucidar cómo desde el sistema productivo y a partir de la revolución industrial -que sustenta el advenimiento del capitalismo como sistema de regulaciones-, la variable económica prevalece sobre los distintos órdenes de la vida cotidiana de los sujetos.

En esta secuencia, surge la necesidad de preguntarse qué lugar ocupa lo social en el marco de estas transformaciones, precisamente evidenciando que ocupa el lugar intermedio que no responde estrictamente ni a la lógica de lo económico, ni a la jurisdicción estrictamente política. De este modo y, por lo tanto, lo social normativizado consiste en ser un sistema de regulación que no es el del mercado, que debería restaurar los vínculos entre esas dos esferas. En este sentido, la “cuestión social” se convertirá en el lugar que ocupan la franja de los trabajadores y otros sectores sociales subalternos en la sociedad industrial (Rozas Pagaza, 2001).

Para atender a ella, la respuesta desde el Estado se concretó a través de un conjunto de dispositivos montados para promover la integración de ambas esferas, si bien lo social ya existía antes de la industrialización, con formas institucionalizadas y prácticas de asistencia para la indigencia y el “vagabundeo”; existía el mercado como intocable mientras que los sujetos se aferran a él para no caerse y no quedar afuera, para no ser desafiliados de sus “bondades”.

¹² “El cálculo de los hogares y personas bajo la Línea de Pobreza (LP) se elabora en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). A partir de los ingresos de los hogares se establece si éstos tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) con el fin de obtener el valor de la Canasta Básica Total. Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT; para el caso de la indigencia, la proporción cuyo ingreso no superan la CBA.” En revista pedagógica de los trabajadores de la educación “La educación en nuestras manos” Año 17 N°79, SUTIBA, CTERA, CTA. JUNIO DE 2008: Artículo “Nuevas leyes de infancia, viejas deudas sociales”.

La “cuestión social” es justamente eso que el sistema suprime, lo que se precisa constantemente controlar para garantizar las condiciones de reproducción del orden vigente y del hombre, como ser social. Esta se hace presente a través de diversas manifestaciones en la sociedad como “problemas sociales”, escindidos de sus determinantes políticos, económicos, culturales, ideológicos, a través de la violencia simbólica ejercida por el Estado siendo ésta, según sostiene Marx, su mayor aliada.

Si bien se puede acordar con esta afirmación, es necesario mencionar que es el Estado el primero en reconocer la existencia de la “cuestión social” cuando despliega una serie de medidas (políticas sociales) para dar respuesta a la misma, incluso para ser el empleador de los trabajadores sociales, quienes en su condición de asalariados median -entre el conflicto y el derecho- en pos de ser garantes de este último.

A partir de ello, cobran gran relevancia las instituciones que mediatizan las relaciones entre las personas a través de la normativización de la vida cotidiana. Desde otra autora, la institución “*Se utiliza como sinónimo de regularidad social, aludiendo a las normas y leyes que representan valores sociales y pautan el comportamiento de individuos o grupos fijando sus límites*” (Fernández, 1998:47). Marc, a su vez, expresa que “*Se ve en la institución una forma fundamental de organización social, definida por un conjunto estructurado de valores, de normas, de roles, de formas de conducta y de relación*” (Marc, 1998:56).

Atendiendo a estos argumentos es que se manifiesta que no es casual que las instituciones en tanto constructos sociales, aparecieran en el mismo momento en que el mercado cobró relevancia en la vida social, dominando las demás esferas de la vida de los sujetos. Éstas fueron creadas configurándose dentro de una lógica de funcionamiento de acuerdo con las leyes establecidas, desarrollando una serie de prácticas e intervenciones -como las políticas sociales- que resultan necesarias para alcanzar los fines políticos y económicos de las clases dominantes que se expresan en coyunturas sociohistóricas diversas (Rozas Pagaza, 2001).

Pastorini (2004) realiza una recuperación de las tendencias teóricas para el análisis de las políticas sociales, abordando de manera crítica el binomio concesión -conquista que se presenta en la perspectiva histórico crítica. Sostiene entonces, la existencia de dos enfoques contrapuestos: el enfoque tradicional vinculado al Estado de Bienestar y otro vinculado a la corriente crítica marxista, donde se puede observar que el primero entiende a las políticas sociales como acciones de redistribución de la renta, mientras que el crítico entiende a las políticas sociales como espacio y consecuencia de las luchas sociales y por ende de las luchas de clases. Remarca la autora que en el momento de la ejecución de las políticas concretas intervienen una multiplicidad de actores donde entran en tensión los sujetos y a su vez las posturas de éstos en cuanto a cómo consideran a tales políticas.

La perspectiva tradicional, supone la planificación de políticas sociales como restitución de derechos a través de mecanismos de redistribución social. Para la autora, esta perspectiva tiende a des economizar y des politizar las políticas sociales, destacando la función social de ajustar los desequilibrios producidos por el desarrollo capitalista. De este modo se invisibiliza que no sólo el Estado produce las políticas sociales, sino que las políticas sociales son producto de la relación conflictiva de lucha y tensión entre las clases hegemónicas, el Estado, la clase trabajadora y clase subalterna. Así, el Estado se erige como un organismo administrativo que busca el “bien común”, anticipándose a

la búsqueda de consensos, pero sin embargo se debe repensar si es el Estado el cual está por encima de la lucha de clases o si es en el Estado en donde se condensa esta lucha de clases, poniendo en cuestión su nivel o no de neutralidad en la misma.

Desde la perspectiva crítica marxista, se concibe a las políticas sociales como espacio y consecuencia de las luchas sociales dentro de la lucha de clases y como articuladora de dimensiones políticas, económicas y sociales. Allí se recuperan las categorías de totalidad y de coyuntura para el análisis de éstas. En el enfoque crítico, las políticas sociales son un producto de la historia, es decir, no son estáticas ni ahistóricas. Aquí se arraiga entonces el hecho de que una política social no tiene una función social que busca el bien común, sino que esto es lo que se hace visible. Su función social sería la de ser complemento salarial para los sectores desfavorecidos, disminuyendo las desigualdades en parte, garantizando el consumo y la reproducción ampliada del capital. A esta función económica se le suma la función política, otorgándole la legitimación del orden social mediante la descompresión del conflicto y la búsqueda del consenso, pudiendo integrar sectores desfavorecidos de la vida social y política de un país.

En palabras de Dulcich (2008) la sociedad contemporánea no ha destruido el lazo social sino que produjo de cierto modo lazos deshumanizantes por lo tanto ante la presión de las clases subalternas es el Estado el que se ve obligado a incorporar, aunque subordinadamente a su materialidad, algunas reivindicaciones de las clases trabajadoras siempre y cuando no afecten los intereses de la clase capitalista. Pastorini postula una crítica al binomio concesión (dar) conquista (ocupar / usurpar) por ocultar la procesualidad conflictiva y de negociación que se presenta en la totalidad: demandas -lucha - negociación -otorgamiento. El binomio omite que las demandas y las negociaciones están en el medio del proceso ya que siempre existen como parte de este. La idea de proceso, asimismo, implica entonces negociación, concesión, conquista, alianzas, tácticas y estrategias, ganancias y pérdidas.

A su vez, las políticas sociales, para Irene de Vasilachis (2003), se diseñan para paliar efectos de la desigualdad y opresión, pero no para evitarlos. Desde esta óptica, fracasan cuando se desconoce que la persona es persona antes que una categoría de pobre. Esas acciones de privación de identidad producen, y reproducen, las estructuras de poder y dominación de la sociedad, consolidando las situaciones de pobreza por no cuestionar criterios, entre tantos otros, de nominación ni categorización. Las políticas sociales son fundamentadas¹³ en una funcionalidad basada en la lógica positivista, e idealizada a su vez desde la lógica del bienestar social o ideas de integración.

¹³ Para Fernández Soto: *“En este sentido, los estilos de políticas económicas y sociales responden a una concepción de sociedad, y más específicamente a los mecanismos y dispositivos institucionales que se construyen para atender la conflictividad social emergente en la sociedad moderna en un momento histórico determinado”* (Fernández Soto, 2005:196). Las políticas sociales son mecanismos de intervención social del Estado moderno que surgen centralmente a mediados del siglo XIX como respuesta a las manifestaciones de la cuestión social. Así, la política social se constituye en una fuerza activa (que se institucionaliza), que interviene en el ordenamiento de las relaciones sociales, participando en procesos de mantenimiento del orden social, y en procesos de construcción de legitimación de los proyectos sociales vigentes. Al mismo tiempo supone procesos de lucha por la definición de los problemas sociales que deben ser atendidos públicamente y por la distribución de recursos necesarios para atenderlos, según postula.

Fernández Soto (2005) plantea que las políticas sociales del período presentan momentos fundantes: el primero, relacionado con el contexto latinoamericano de tensión y lucha como expresiones populares, como contestación a un avance de proyectos regresivos y reaccionarios donde se enuncia que el neoliberalismo no es un sistema, sino que es una táctica y que a su vez no presenta avances sino disputas. Otro elemento, para la autora, consiste en que son parte de un momento de tipo procesual por contar con avances y movimientos donde se dé una disputa entre otorgar materialidad y su propia legitimidad al neoliberalismo. Así es el Estado aquel resultado de las relaciones de fuerza en una sociedad en un momento determinado, por ello estará también determinado por relaciones de poder y su materialidad manifiesta en una supremacía de sectores capitalistas.

En síntesis, las intervenciones profesionales en políticas sociales estatales debieran atender a un análisis histórico-social, desde lineamientos profesionales que trabajen con estrategias y elementos táctico-operativos, evitando sostener la idea de métodos, técnicas o metodologías preestablecidas. De este modo, para las intervenciones desde el sistema judicial pueden pensarse diversos ejes que serán planteados en este trabajo.

En referencia a lo ocurrido en los últimos años, la búsqueda de equilibrio y de restitución de derechos ha sido un eje central del discurso en el anterior modelo de Estado, con el gobierno kirchnerista, brindándole protagonismo a los grupos sociales con ciertas medidas otorgadas. Sin embargo, siguiendo a García Delgado (2018) si bien el discurso en cuanto a las políticas sociales añoraba coberturas universales, en términos de ejecución han sido políticas focalizadas, por no ser una población económicamente activa que consiga coberturas ampliadas, sino que terminaron consistiendo en políticas de prestaciones subsidiarias.

Analizando las políticas sociales, en el período abordado en Santa Cruz, podemos señalar que existieron varios programas de vivienda. El dato central, como se ha hecho referencia, remite a la cuestión de que se evidenció un aumento considerable en la población que se encuentra habitando la provincia en pocos años, convirtiéndose en un posible “foco” de conflicto social, poblaciones que necesitan empleo y han migrado en busca de un trabajo -formal o informal- y no siempre lo han obtenido. Como consideración general, se analiza que parte de las políticas de vivienda son anticipatorias, para evitar el conflicto. En esta arista, la problemática del déficit habitacional expresa una manifestación de la “cuestión social” que atraviesa a todo el país y que asume algunas intensidades en ciertas regiones, como puede ser en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, donde se intensificó el modelo extractivista, lo que acarrió una constante corriente migratoria en busca de empleo bajo cualquier condición, sin reparar en la infraestructura local ni las cuestiones que remiten a un clima hostil en cuanto a sus condiciones de habitabilidad.

Asimismo, entre otras políticas sociales, se implementan políticas culturales, deportivas y de recreación, de turismo, de niñez y juventud, de género, que no sólo expresan intenciones discursivas universales, sino que aportan prestaciones positivas a los grupos sociales destinatarios generando pequeños consensos comunitarios.

Características socio demográficas y económicas de Santa Cruz

Santa Cruz constituye una de las seis provincias que conforman la Región Patagónica junto a Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La misma posee una superficie de 243.943 km² siendo la segunda provincia en extensión y la que cuenta con menor población a nivel Nacional (234.087 habitantes a junio de 2010 según la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Santa Cruz), representando el 0,68% de la población nacional, tratándose de una de las provincias más escasamente pobladas, con una densidad poblacional de apenas 1,1 habitantes por km². Sin embargo, en la actualidad, se estima que ha incrementado la población total de la provincia, rondando los 270 mil habitantes a 2019.

La provincia presenta zonas con características geográficas y climáticas diferenciadas en las que se localizan una serie de ciudades de variadas escalas y características, vinculadas y/o dependientes estas en mayor o menor medida de alguna actividad productiva específica. Entre las actividades productivas principales se encuentran la actividad petrolera, la minería, el turismo, la pesca, en el ámbito rural la actividad ovina, distribuidas estas por regiones en la gran extensión geográfica de la Provincia, constituyendo junto a la administración pública -en sus tres niveles-, las principales fuentes de empleo.

Ya sea tanto por su localización, su clima, sus recursos naturales, las actividades productivas posibles y las grandes distancias que existen entre estas ciudades Santa Cruz presenta características particulares que la diferencian de otras zonas del país, determinando sus transformaciones en el tiempo y los procesos de movilidad de población que se presentan. En estas zonas se revela un crecimiento poblacional como refleja la comparación con los datos del Censo 2001, en el período intercensal la población de la Provincia de Santa Cruz incrementó un 39,1%, ubicándolo en primer lugar entre las provincias argentinas en cuanto a la tasa de crecimiento poblacional, por constantes movimientos migratorios. Asimismo, según proyecciones del INDEC, se esperaba que esta tendencia continuara hacia 2020 a partir de los cambios en las actividades productivas que generarían nuevas demandas y requerimientos específicos: represas hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz configurando un daño irreparable como impacto ambiental natural.

En cuanto a la dimensión socio económica Santa Cruz se presenta como una provincia con indicadores socios económicos favorables en relación con la media nacional. Presenta particularidades significativas en torno a la estructura y comportamiento del mercado laboral. Por un lado, la principal fuente de empleo es el sector público, contando con 138 empleados públicos por cada mil habitantes, y registrando en relación con el empleo privado un 52,9%,¹⁴ que, si bien supera ampliamente la media nacional de 36,1%¹⁵ se equilibra con el empleo privado registrado en tanto el primero supera en solo 3 puntos a este. Asimismo, cuenta con las actividades productivas que pagan las remuneraciones privadas más altas del país, entre las que se encuentran la actividad petrolera y minera. Sin embargo, quienes no ingresan en dicho sistema laboral, trabajan en la construcción, oficio que no está en permanente movimiento ni cuenta con contrataciones formales, o actividades de servicio no registradas, siendo secundarias a las mencionadas. En esta coyuntura al decir de García Linera (2016), el modelo regional es netamente extractivista con la

expropiación de recursos naturales estratégicos, acompañado de un repliegue del Estado.

En cuanto a las desigualdades socio económicas, los niveles provinciales son bajos, en tanto existe coherencia entre los valores favorables de los indicadores de empleo y los de distribución del ingreso, siendo entonces un contexto propicio para un desarrollo económico y social sostenido; sin embargo ante situaciones de desocupación no se encuentran alternativas laborales con facilidad para quienes habitan la provincia, y muchas veces se recurre a solicitar personas de otras provincias, retomando al viejo lema “poblar la Patagonia”, “hacer la patria grande”, “modernizar y civilizar a los pobladores” entre otras para trabajos por temporada, de tipo “golondrina”. Cabe destacar que aún se utilizan estos viejos lemas para “argentinar” la zona patagónica, que indudablemente no puede ser escindidos de la historia que los atraviesa como han sido el disciplinamiento y el adoctrinamiento evidenciados en estas regiones por medio de discursos europeizantes a los cuales los pobladores originarios y pobladores rurales han sido sometidos, cuando no fusilados en la “Conquista” del “desierto”. Por su parte para la estimación de parámetros de desigualdad socio-económica se considera que en rasgos generales el mercado laboral en la provincia de Santa Cruz presentaba en 2016 niveles favorables en sus indicadores, esperando que los parámetros de desigualdad socio económica fueran coherentes con este perfil.

En primer lugar, según datos de la EPH INDEC para el segundo trimestre del 2016, Santa Cruz se ubicaba en segundo lugar a nivel nacional respecto del indicador Desarrollo Humano, registrando un valor de 0.86, escoltado por la provincia de Tierra del Fuego y C.A.B.A. quienes presentan 0,89 como valor de este indicador. En segundo lugar, en lo que refiere al grado de desigualdad presente en la sociedad de Santa Cruz, la provincia se ubicaba en sexto lugar respecto de la media nacional, registrando un Coeficiente de Gini¹⁴ de 0.38. En este sentido, si bien se presentaba con mejores parámetros que el total país, cuyo valor del indicador es de 0,43, varias son las provincias que presentan menos desigualdad: La Rioja (0,31), Jujuy y Santiago del Estero (0,34), Entre Ríos (0,35), Chaco (0,36), San Luis, Tierra del Fuego y Formosa (0,37), y compartiendo el posicionamiento con Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Teniendo en cuenta que, según el Coeficiente de Gini, el grado de desigualdad social es moderado. Aun no se cuenta con registros actualizados ni con el total de la población incluida en estos datos debido a las fluctuantes y permanentes migraciones internas que se evidencian provincialmente, en busca de un mejor porvenir. Estos sujetos no suelen tener asegurado empleo ni espacio habitacional: los micros de larga distancia y camiones de transporte conectan a diario, mediante ruta nacional N°3, fronteras y trayectos de una punta a la otra del país y países limítrofes haciendo que todas las madrugadas arriben a la ciudad personas -muchas con sus familias- para saber si les depara un trabajo o changea en estos pequeños lugares. Por último, en base a los datos arrojados por la EPH INDEC para el mismo período, respecto de la Brecha de Ingresos, Santa Cruz se posicionaba menos favorablemente con relación a los anteriores indicadores, pero mantiene el margen dentro de las diez primeras ubicaciones. La provincia registra una brecha de ingresos de 14,9%.

¹⁴ Min. del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Índice Mercado de Trabajo Provinciales

¹⁵ Sistema de Inf. Desarrollo Prov. del Ministerio del interior, ObrasPúblicas y Vivienda de la Nación.

Puerto San Julián, una comunidad urbana al interior de la Patagonia

El análisis de caso nos remite a la localidad de Puerto San Julián, fundada el 17 de septiembre de 1901 como colonia agrícola y en 1933 como municipio, se encuentra en el departamento de Magallanes, en el centro Este de la Provincia patagónica de Santa Cruz, ubicándose a 3 km de la Ruta Nacional N.º 3, unida por esta a la localidad de Comodoro Rivadavia por 461 km al norte y a Río Gallegos por 360 km al sur. Esta localidad, es distinguida por ser el lugar donde por primera vez se rezará una misa en territorio argentino en el año 1520, dado el desembarco de H. Magallanes y su tripulación, llegados en la Nao Victoria.

Este dato es importante debido al sesgo católico conservador que mantiene y profesa la población local. En 2020 se cumplieron 500 años de la primera misa en territorio argentino, como hito histórico, con cierto orgullo por la europeización del territorio, marcando rasgos de una posible neocolonización acompañada de una racialización del sur austral. La localidad cuenta con una población aproximada de 17.000 habitantes, conformada por un alto número de personas llegadas desde otras provincias del país y países vecinos. En gran parte los empleos son estatales, dependientes de distintas órbitas (municipal, provincial y nacional) en las áreas de seguridad, educación, salud, justicia y administración pública. Entre las actividades económicas más importantes, la ciudad ha sido puntualmente ganadera hasta la crisis devastadora ocurrida en 1991 tras el volcán Hudson, Chile. El frigorífico Swift, durante casi 50 años encargado del carneo ovino y el trabajo de la lana ha contado con casi 300 trabajadores, quienes frente al aumento de las condiciones miserables de vida han protagonizado huelgas y levantamientos -además de emigrar- ante los manejos latifundistas de la zona. Cabe destacar que en 1920 y 1921 se produjeron diversas huelgas patagónicas de peones rurales, las cuales han sido puestas en valor en la exhaustiva y comprometida obra de Osvaldo Bayer “La Patagonia rebelde”²¹⁶.

En la actualidad se destacan la extracción de arcilla, el manejo de cobre y caolín además de la pesca y la minería, siendo esta última el emprendimiento más grande en la zona, instalado en la localidad desde la década del '90, atraen pobladores de distintos lugares del país, mejorando la economía minorista local de pequeños comerciantes y el nivel de ingresos, descomprimiendo la administración pública, pero con un costo ambiental negativo considerable. Cabe destacar que existen sujetos colectivos que actualmente reclaman en defensa de los recursos naturales de la zona, sin embargo no se observa la presencia de un álgido ni mancomunado reclamo ambientalista por parte de las

²¹⁶En el capítulo XV tomo II titulado “Las putas de San Julián” Bayer recrea lo sucedido en la Casa de tolerancia prostíbulo “La catalana” de esta ciudad donde mujeres meretrices de alrededor de 30 años de edad se niegan a atender a la tropa comandada por el Gral. Varela quienes buscaban un “premio” luego de los fusilamientos y la matanza de los obreros rurales. A fin de reivindicar la causa de los peones estas mujeres llamadas Angela, Amalia, María, Maud y Consuelo, además de Paulina dueña del lugar, todas de distintas nacionalidades se alzaron con armas caseras, escobas y palos, por lo que han sido llevadas a la Comisaría al resistirse por “insultar el uniforme de la patria”.

comunidades en la provincia ante la instalación de las empresas mineras ni de las represas hidroeléctricas, posiblemente por el rédito económico que las mismas conlleven en la traducción de tipo salarial para quienes fuesen allí empleados.

Su arquitectura actual data del año 1900 y mezcla distintas corrientes migratorias, principalmente anglosajona (proveniente de Malvinas), hoy conocida como arquitectura magallánica. Se remarca que, durante la guerra de Malvinas, por su ubicación geográfica al estar a 340 km en línea recta de las islas y siendo el punto más cercano a ellas, ha sido un lugar clave en la organización poblacional para lo que fue asistencia y logística destinada a los combatientes mientras duró la misma. Puerto San Julián es la 8ª ciudad más poblada de la provincia de Santa Cruz. Ubicada sobre la costa atlántica, la ciudad contaba con una población de 7894 personas (según el Censo de 2010).

Asimismo, esta ciudad concentra el 2,8% de la población de Santa Cruz en la actualidad, demostrando un gran aumento en su densidad poblacional en los últimos diez años la cual se estima podría haberse triplicado. El ritmo de crecimiento poblacional de Puerto San Julián se incrementó a partir de 1980, y particularmente con el comienzo del nuevo siglo. El reciente crecimiento demográfico de la localidad produjo una rápida expansión de la construcción, en la que se incluyen programas de viviendas provinciales y nacionales. La localidad no cuenta con edificios, sino que predominan las construcciones bajas y las viviendas prefabricadas, sin presencia de asentamientos. En la ciudad de Puerto San Julián, apenas el 1,75% de los hogares presentaba en el período estudiado condiciones de hacinamiento crítico. Asimismo, el 10,20% de los hogares tiene condiciones de hacinamiento moderado. Estos valores son más bajos que la Provincia de Santa Cruz en su conjunto, siendo de 3,64% el hacinamiento crítico y de 19,89% el hacinamiento moderado siendo que no todas las zonas habitadas cuentan con acceso a servicios básicos al momento. A continuación, se puede observar cómo se presenta el avance y expansión de las viviendas dentro del ejido urbano:

Fuente: Proyecto Lineamientos de Planificación Estratégica Urbana para las Ciudades de la Provincia de Santa Cruz. Primera etapa: Río Gallegos y Puerto San Julián, 2017– INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PCIAL

Las migraciones internas explican aproximadamente el 15% del crecimiento poblacional de la Provincia de Santa Cruz para el período intercensal. Se registran altos números de personas oriundas de todas las regiones del país – los casos más sobresalientes son las provincias de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Formosa, Chubut, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La población de origen extranjero representa el 9,51% de la población de la Provincia de Santa Cruz. Su distribución por sexo es igualitaria, con el 51% de la población de origen extranjero siendo varones y 49% mujeres, en su mayoría provenientes de Bolivia y Chile, este último el principal origen de las migraciones desde principios del siglo XX.

No obstante, en cuanto a su composición por grupos de edad, se observa una clara predominancia de grupos mayores 25 años. De este modo, se observa que el 80% de la población extranjera tiene entre 25 y 75 años. Más allá de estas consideraciones, se puede concluir que la migración – tanto interna como limítrofe– ha contribuido de manera significativa al tamaño de la población económicamente activa, aunque por fuera de las mediciones formales, se evidencian amplios niveles de desempleo y desocupación.

A partir de 1980 es que se instaure en el país un modelo extractivista, de explotación hidrocarburífera en la zona patagónica. Atilio Borón afirma:

“En el cono sur, en cambio, este impulso progresista fue mucho más moderado. Pese al vigor del impulso re-estatizador del gobierno de Cristina Fernández en Argentina, ausente en el caso de Brasil, ninguno de los gobiernos progresistas de esa parte de América Latina se propuso otra cosa que refundar, sobre bases “serias y racionales”, el capitalismo, admitiendo la necesidad de una vigorosa política de inclusión social, pero sin cuestionar, en ningún momento, la hegemonía del capital en el proceso de acumulación. Aquí no hubo atisbo alguno de avanzar hacia otra cosa que no fuese la profundización del capitalismo, cosa que efectivamente se hizo, pero tratando de que a lo largo de ese proceso adquiriese “un rostro humano” (Borón, 2017:20).

Desde esta línea, a nivel global, Isabel Rauber explica que:

“Los motores del poder global del capital se disponen a reacomodar su estrategia de dominación global, conjugando el retorno a ciertas modalidades de proteccionismo nacionalista (en sus territorios cabeceras), enlazado con el libre mercado (para sus expansiones internacionales), según lo requiera el actual proceso de acumulación a escala global del capital” (Rauber, 2017:25).

Expresa que hay una necesidad de alterar el patrón de acumulación, entendiendo que existe una única forma de alterar la realidad periférica y de distribuir la riqueza y el poder, a través de un cambio en el patrón productivo,

“Se crearon de esta forma, reductos electorales sin la adhesión a un proyecto político alternativo al capitalismo. Se dan beneficios sin generar esperanza. Se promueve el acceso al consumo sin favorecer el surgimiento de nuevos protagonistas sociales y políticos. Y lo más grave: no se percibe que, en el medio del actual sistema consumista,

cuyas mercaderías reciclables están impregnadas del fetiche que valoriza al consumidor y no al ciudadano, el capitalismo neoliberal introduce “valores” como la competitividad y la mercantilización de todos los aspectos de la vida y la naturaleza, reforzando el individualismo y el conservadurismo” (Rauber, 2017:39).

Para Emir Sader:

“El proyecto de dominación neoliberal es un régimen que condiciona la circulación de poderes y saberes que legitiman una serie de prácticas que apuntan a resolver la crisis de acumulación de capital fijo, de finales de siglo XX e inicios del XXI, normalizando nuevas formas de explotación de los seres humanos, que ya no son agentes de la acumulación, sino que devienen en sus objetos. El día de hoy ya no solo consumimos manufacturas adquiridas en el mercado, sino que estamos permanentemente conectados en la red virtual que explota y consume nuestra subjetividad cotidiana: relaciones intersubjetivas, modos de vida, afectividades y experiencias” (Sader, 2016:135). (...)
“En esta operación normalizadora se asume el bienestar social como la suma de elecciones individuales reveladas mediante la compra; y se mide a través del ingreso / consumo, y a nivel social a través del ingreso agregado o consumo, o la producción agregada. Así se reivindica como sujeto agente al individuo trabajador perceptor del ingreso, y en el extremo opuesto se encontraría el sujeto pasivo “improductivo”, cuyo malestar se mide a través de la pobreza de ingreso o consumo” (Sader, 2016:135).

Como se intenta reflejar en estas citas, la des ciudadanización existente se da como proceso que prioriza el tener por sobre el ser. En este sentido, las lógicas de productividad en un sistema patriarcal hace de roles predefinidos y estandarizados -diferenciando al hombre de la mujer-, elemento clave para repensar y contextualizar las intervenciones de los Trabajadores Sociales en el territorio ya sea de Santa Cruz como de cualquier otro punto del país /región.

En esta línea, es importante analizar cómo el modelo extractivista supone un uso intensivo de los bienes comunes a la vez que plantea una reconfiguración de las relaciones sociales en donde se acentúa la división sexual del trabajo y la apropiación del trabajo reproductivo que realizan las mujeres. De tal manera:

“El extractivismo supone una patriarcalización del territorio por tres motivos principales: en primer lugar promueve una alianza entre varones (entre las empresas y los trabajadores de las comunidades locales) proponiendo una lógica masculinizada en la toma de decisiones; en segundo lugar acentúa la división social del trabajo al emplear mayoritariamente varones paratareas de fuerza y desgaste físico (quienes en general pasan a tener un salario fijo) relegando a las mujeres el trabajo de servicios (generalmente en modalidad de cuentapropistas y de baja remuneración) y por último, el extractivismo supone un disciplinamiento y control del cuerpo de las mujeres en los territorios mediante el ejercicio de la violencia y la explotación sexual” (Feliz y Migliaro, 2017:7).

A partir de estos planteos es que se deben revisar las cosmovisiones que acompañan al pensamiento cotidiano y ordinario, en diversos momentos históricos, ya que desde lo jurídico se termina de convalidar la mirada

normalizadora de las familias en el marco de la mencionada división sexual del trabajo. Así es Federici (2018) quien sostiene que el capital domina, organiza y se desarrolla por medio del salario. En sociedades precapitalistas la unidad productiva y reproductiva convivía en una misma esfera, siendo la casa el eje central de sostén de la vida, así el capitalismo descompone esta unidad en tres esferas:

“En el esquema de la familia heteronormativa tradicional: los hombres a la fábrica, los niños/as a la escuela y las mujeres a la casa (...) la división sexual del trabajo se derrama como organizador social, de modo tal que las mujeres no pueden renunciar a su trabajo de “ama de casa”, ni los niños a su trabajo de “estudiante”, denegando todo lo que se produce por fuera” (Federici, 2018: 212).

Dar cuenta de esta organización y forma de dominación permite pensar nuevas formas de explotación y desposesión a los sectores populares que no se dan sólo por la explotación salarial, sino por otras formas actuales como el despojo territorial y la profundización de la acumulación por desposesión.

Luego de haber abordado las diversas formas en que se atendió la “cuestión social” a lo largo del tiempo, ante diversos contextos y complejidades en que se requirió la intervención del profesional del Trabajo Social se abordará, en el siguiente capítulo, el significado social existente en torno a la profesión.

CAPÍTULO II: La concepción de la profesión del Trabajo Social y sus transformaciones contemporáneas

“El mundo que imagino como un mundo agradable es un mundo sin hegemonía, sin que ninguno de los mundos y de las propuestas dominen sobre las otras, es un mundo suelto, radical, plural, sin los imperativos de las vanguardias, un lugar donde diferentes formas de felicidad, realización, satisfacción y bienestar pueden existir sin agredirse mutuamente”

Rita Segato, 2020

En este capítulo analizaremos la profesión del Trabajo Social, cuya legitimación es pensada como la validación social de la existencia de un campo de saberes y competencias que interviene con cierta búsqueda de “efectividad” en lo social. A partir de este argumento, se toman los análisis de Susana Cazzaniga quien refiere a que el Trabajo Social busca su legitimación en cada momento histórico, el cual le otorga condiciones para ciertas experiencias y expectativas, tornándose prioridades que permanecen o se resignifican en otros momentos.

En cuanto al Trabajo Social, existe una relación intrínseca de los profesionales con los mecanismos de intervención social, los cuales surgen a partir de las posiciones hegemónicas para sostener la “integración” de la sociedad, permitiendo una permanente producción y reproducción de las condiciones de existencia - materiales y simbólicas de la misma- como se desarrolló ut supra.

El Estado capitalista moderno registra una construcción constitutiva como garante de ciudadanía, es decir de igualdad, mientras que es constitutivo del proceso de acumulación capitalista, por ende, de desigualdad estructural. Como se afirmó, logra así ser un espacio contradictorio en el cual se expresa la lucha de clases. En este contexto es que les trabajadores sociales, como trabajadores asalariados, suelen desempeñarse en ámbitos estatales o derivados de éste, presentándose ciertos nudos críticos en la disputa por el significado social de su ejercicio atento a que convergen diversos designios profesionales que expresan diferentes proyectos societales.

Esto remite a que, por un lado, desde la cuestión de los orígenes de la profesión -con una fuerte presencia de profesionales femeninas- enfrenta una legitimidad anudada a lo asistencial con marcados condicionamientos institucionales y un alto grado de precarización salarial. Es en esta línea que hay que identificar los orígenes de la profesión al predominio de subsidiariedad de la Doctrina Social de la Iglesia, retomando a Cazzaniga, donde la familia sería considerada la solución posible a los problemas estructurales. Tal concepción refleja un posicionamiento ideológico que recae sobre el sujeto, nuevamente, con una “normalidad” marcada por las clases dominantes. Asimismo, estos profesionales atraviesan diversas luchas internas entre la importancia del “hacer” y el “pensar”,

significando ello una dicotomía entre teoría-práctica, lo cual debe ser parte de un mismo ejercicio, una praxis.

La profesión: génesis y significado social

“La regulación de la modernidad está basada en tres principios: el principio del Estado, el principio del mercado y el principio de la comunidad. La emancipación es un proceso de racionalidad creciente de la sociedad que también tiene tres dimensiones: la racionalidad cognitiva instrumental de la ciencia, la racionalidad de la práctica moral del derecho y la racionalidad estética expresiva del arte y de la literatura. Estos pilares son también formas de conocimiento, hay un conocimiento de regulación y hay un conocimiento de emancipación”

Boaventura de Souza Santos, 2008

Gustavo Parra (2001) plantea que el surgimiento del Trabajo social como profesión institucionalizada, inscrita en la división social y técnica del trabajo, se vincula a la necesidad de dar respuesta desde el Estado a la “cuestión social”, y tiene una “*Relación genética con las peculiaridades de la sociedad burguesa en su organización monopólica*” (Netto,1994:14); por otro lado, su práctica y justificación teórica-ideológica estuvo vinculada a los compromisos sociopolíticos con el conservadurismo (Iamamoto, 1995:17). Otra autora que concuerda con esta línea sostiene que:

“De acuerdo con la moral burguesa era preciso, por el contrario, generalizar la imagen del capitalismo como un régimen irreversible, como un orden social justo y adecuado, en fin, como un punto terminal de la historia de la humanidad. Mantener intocable la sociedad burguesa y el orden social por ella producido era un verdadero imperativo para la burguesía para lo cual se tornaba indispensable recurrir a estrategias más eficaces de control social capaces de contener el vigor de las manifestaciones operarias y la acelerada diseminación de la pobreza y del conjunto de los problemas asociados a ella” (Martinelli, 1995:61).

Por todo lo mencionado, cabe repensar estos puntos para poder comprender que la profesión no se ha originado ajena a una realidad, no es ahistórica, ni externa a las condiciones estructurales, a las coyunturas económicas ni políticas. El ejercicio de la profesión, entonces, será delimitado hoy y siempre por las propias contradicciones y antagonismos de la reproducción de las relaciones sociales inherentes al modo de producción vigente.

La profesión, para Martinelli, tiene una identidad atribuida por responder a los intereses de la burguesía y del capitalismo determinando un recorrido alienado en la práctica profesional. La alianza que le dio origen ha sido la generada entre Estado, Iglesia y burguesía, que -para el control social y el disciplinamiento moralizador de la fuerza de trabajo- configura entonces al Trabajo social en una respuesta ante las consecuencias de la “cuestión social”.

Como se ha esbozado, el capitalismo monopolístico precisó de mecanismos de intervención económicos que se han entrelazado con las funciones políticas. Por ende, aparece el Estado como árbitro de las contradicciones entre las clases, legitimándose y obteniendo consenso a través de la extensión de derechos sociales. Según Netto:

“El Estado -como instancia de política económica del monopolio - es obligado no sólo a asegurar continuamente la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo, ocupada y excedente sino que es compelido (y lo hace mediante los sistemas de previsión y seguridad social principalmente) a regular su pertinencia a niveles determinados de consumo y su disponibilidad para la ocupación ocasional, así como a instrumentar mecanismos generales que garanticen su movilidad y ubicación en función de las necesidades y proyectos del monopolio” (Netto, 1992:23).

El Estado, consecuentemente, precisó de un profesional ejecutivo con dependencia salarial, legitimando su práctica por estar institucionalizada ante el cual:

“Es solamente en estas condiciones que las secuelas de la cuestión social se tornan objeto de una intervención continua y sistemática por parte del Estado y sólo a partir de la concretización de las posibilidades económico-sociales y políticas segregadas del orden monopolístico que la cuestión social se pone como objetivo de las políticas sociales” (Netto, 1992:25).

Para el autor, es el Estado funcional al capitalismo monopolístico, su “comité ejecutivo”, que propicia las condiciones para la acumulación y la valorización de dicho capital monopolístico. En relación al tratamiento de la “cuestión social” expresa que se configura una psicologización de los problemas sociales que se combina con una singularización de estos problemas a fin de no asumirlos como consecuencias generalizadas de un sistema voraz y despiadado.

De este modo ese profesional trabaja con políticas sociales, que en el marco del neoliberalismo, adquieren un fuerte carácter compensatorio, ya que no apuntan a asegurar derechos universales, sino que actúan -eficazmente o no- como regulación de la relación capital - trabajo, para mantener la reproducción de la fuerza de trabajo mientras se legitima el mismo Estado y se moraliza a las clases subalternas¹⁷.

La tesis de Parra, además, sostiene que el surgimiento del Trabajo Social tuvo un carácter antimoderno, ya que la modernidad se definía por postulados de universalidad, individualidad y autonomía. En este sentido, plantea que:

“El Trabajo Social desarrollaba su actividad en función de hacer aceptar las desigualdades de clase, de género, de raza, ubicándolas en el terreno individual, cuando no en lo patológico, como disfuncionalidades a ser corregidas. Su intervención apuntada a la regulación ad-hoc es decir caso a caso, basada en la polaridad riqueza/pobreza y buscando las causas en el terreno de lo individual. Ajuste, adaptación y disciplinamiento son conceptos que nada tienen que ver con el reconocimiento universal de los derechos del hombre” (Parra, 2001:91).

Desde este paradigma, todos los “anormales” ya sean huérfanos, ancianos, madres solteras, pobres tenían un destino “preestablecido” siendo que de otro modo podrían alterar el orden vigente. En cuanto a la profesionalización, es Netto quien afirma que:

“La profesionalización del Trabajo Social no se relaciona a la evolución de la ayuda, a la racionalización de la filantropía ni a la organización de la caridad. Se vincula a la dinámica del orden monopólico. Es sólo entonces que la actividad de los agentes del Trabajo Social puede recibir, pública y socialmente, un carácter profesional: la legitimación (con una simultánea gratificación monetaria) por el desempeño de papeles, atribuciones y funciones a partir de la ocupación de un espacio en la división social y técnica del trabajo en la sociedad burguesa consolidada y madura; sólo entonces los agentes se reproducen mediante un proceso de socialización particular jurídicamente sancionada y reiterable según procedimientos reconocidos por el Estado; sólo entonces el conjunto de los agentes (la categoría profesional) se laiciza, se independiza de confesionalismos y particularismos” (Netto, 1992:69-70).

Gustavo Parra explica que el Trabajo Social, en cuanto profesión y práctica institucionalizada, constituye una totalidad histórica y socialmente determinada, que se inscribe en una totalidad más amplia que la contiene. Es parte de un fenómeno histórico y social no considerado como producto acabado sino estando en desarrollo, en movimiento y procesualidad. Para comprender la complejización del planteo, es importante tomar como eje el concepto de totalidad. Este se basa en postulados de Karel Kosik para quien la totalidad significa: *“Realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho (...) los hechos son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico, esto es, si no son átomos inmutables, indivisibles e inderivables, cuya conjunción constituye la realidad, sino que son concebidos como parte estructurales del todo”* (Kosik, 1989:55-56). Explica que,

“El pensamiento dialéctico arranca de la premisa de que el pensamiento humano se realiza moviéndose en espiral, donde cada comienzo es abstracto y relativo. Si la realidad es un conjunto dialéctico y estructurado, el conocimiento concreto de la realidad consiste, no en la sistemática adición de unos hechos a otros, y de unos conceptos a otros, sino en un proceso de concretización, que procede del todo a las partes y de las partes al todo, del fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno; de la totalidad a las contradicciones y de las contradicciones a la totalidad, y precisamente en este proceso de correlación en espiral, en el que todos los conceptos entran en movimiento recíproco y se iluminan míticamente alcanza la concreción” (Kosik, 1989:62).

Para el autor, con este pensamiento dialéctico se logra romper con el mundo de la pseudoconcreción, es decir, con el de las creencias, ideas y la cotidianeidad con la que se encuentra atravesado el mundo externo, el mundo del sentido común. Es este mundo de las representaciones y conceptos sociales en donde se instauran prejuicios, nociones a priori y se cristalizan estereotipos de forma acrítica.

¹⁷ En este sentido, la reproducción de las relaciones sociales es *“La reproducción de la totalidad del proceso social, la reproducción de determinado modo de vida que envuelve lo cotidiano, de la vida en sociedad: el modo de vivir y trabajar, de forma socialmente determinada, de los individuos en sociedad”* (Iamamoto, 1984:78).

Esta ruptura, entonces, dará paso al conocimiento verdadero -a pesar de que la realidad es incognoscible en su totalidad-; por lo que el autor plantea la dialéctica como forma de entender la contradicción imperante para no naturalizar así los fenómenos existentes. La realidad es cambiante y se modifica constantemente, por ello postula que se la debe analizar críticamente para dar cuenta que está atravesada por contradicciones, precisando de cierto análisis para su posterior comprensión. A ésta, entonces, se la conocerá a través del ejercicio dialéctico.

Sumado a esta reflexión permanente se precisa reconstruir el lugar que ocupa -y le otorgan- al Trabajo Social en diversos ámbitos socio ocupacionales para dar cuenta de sus márgenes de acción. En el caso del ámbito de desempeño laboral dentro del poder judicial se deberá mantener un análisis en relación a la mirada histórica construida institucional y socialmente sobre el ejercicio profesional y “su rol”.

Se relacionará ello, entonces, con el momento inicial de la profesión en donde preponderaba el rol femenino, ante lo cual Estela Grassi sostiene que,

“El hecho de tratarse de una profesión ejercida mayoritariamente por mujeres, si bien no constituye una variable que permita acceder a comprender su naturaleza, sí contribuye a definir su perfil; es decir, la naturaleza social de la asistencia social se explica por su rol en la legitimidad y el consenso, en el control de la vida cotidiana” (Grassi, 1989:46).

La recorrida sobre los orígenes de la profesión permite vislumbrar los requerimientos para la misma y sus fines como parte constitutiva de su institucionalización.

Características de la profesión y autonomía relativa

Se considera que el ejercicio de la actividad profesional requiere de una mirada crítica sobre las condiciones en que se produce y se reproduce la vida cotidiana de los hombres. Esto supone desnaturalizar las categorías cristalizadas en la sociedad. En esta línea, se debe, entonces, explicitar la funcionalidad social del Derecho normativo en la sociedad capitalista: postular una igualdad formal de todos los hombres ante la Ley.

Siguiendo este postulado, la igualdad estaría fundada en la libertad de intercambiar mercancías equivalentes entre sus propietarios. Desde esta supuesta relación igualitaria, entonces, es en la esfera de la circulación en donde se consagran las leyes, encubriendo la desigualdad en la esfera de la producción en cuanto al acceso a los medios de producción y a la apropiación de la riqueza socialmente producida.

Es en el marco de dicha desigualdad estructural donde el Trabajo Social se gesta como profesión en la división social del trabajo, teniendo como escenario el desarrollo capitalista industrial y la expansión urbana (Iamamoto 2001). Para esta autora la profesión surge como un hecho histórico, siendo una profesión esencialmente política.

Cabe destacar que el desarrollo de la profesión no se gesta como profesión liberal ya que no dispone del control de las condiciones materiales, organizacionales y técnicas para el ejercicio del trabajo. Una de las condiciones para su realización ha sido la venta de su propia fuerza de trabajo, en cuanto trabajador asalariado dentro del mismo

sistema al cual cuestiona.

Estas condiciones constituyen el campo de disputa entre capital y trabajo, porque allí se encuentra la apropiación del valor del trabajo y la alienación del mismo:

“La importancia de pensar las condiciones laborales -que no son más que una parte de los medios de trabajo con los que cuentan los trabajadores sociales- reside en que no son una condición más de la práctica, meros condicionantes externos, sino el elemento organizador de esa práctica en tanto se encuentra integrada a un proceso de trabajo, y en este sentido van a delinear los límites de lo posible” (Cademartori y otras, 2007: 38).

Los trabajadores, se encuentran con la pobreza, la exclusión y la subalternidad, como consecuencias de este modo de desigualdad social ante un capital que concentra las relaciones sociales vigentes en la expansión capitalista (Iamamoto, 2003). Desde lo cultural, económico y político son estos grupos pobres a los que se le asigna un lugar como “población sobrante”, mano de obra barata, o para la autora “gente de más”, piezas funcionales de un engranaje que garantice la acumulación capitalista, es decir, son parte del denominado por Marx “ejército industrial de reserva”.

La autora afirma que para enfrentar la “cuestión social” se acude al voluntariado, como se hizo referencia anteriormente, a la desprofesionalización del trabajo comunitario como parte de un resurgimiento del trabajo desde un espíritu filantrópico como “fetichismo de la solidaridad”, reforzando así aún más las desigualdades, como puede verse en el contexto local y hasta regional en el período 2016 a 2019.

De este modo, se puede recurrir a los profesionales del Trabajo Social considerándolos apóstoles, que ayudan y gestionan un número “ilimitado de trámites”, quitándole su dimensión crítica y política donde el sujeto “atendido” sería un sujeto de derecho. Por tal motivo es que Marilda Iamamoto, coincidiendo con Netto, sostiene que los profesionales del Trabajo Social deben generar un perfil propositivo en la formulación, la gestión y ejecución de políticas sociales basándose en la dimensión ético-política de la profesión.

Desde esta misma línea, Martinelli (1997) plantea que, para garantizar su objetivo central de reproducción de las relaciones sociales capitalistas, la burguesía intenta eliminar la dimensión política, en este caso también de los problemas sociales, individualizando las culpas por dichas situaciones buscando así, fijarse sólo en los emergentes singulares de los fenómenos sociales.

Para Iamamoto, el pensar que sólo la historia determina la profesión lleva a tener visiones deterministas como el mesianismo, el voluntarismo y el naturalismo, por lo que se necesitaría emprender una visión dialéctica, que tendrá que ver con aprehender el movimiento contradictorio de la práctica profesional como actividad socialmente determinada por las condiciones históricas y las respuestas teórico-prácticas que crea el colectivo profesional.

En este sentido afirma que no es un profesional absolutamente determinado, puede elaborar estrategias, dentro de su autonomía relativa, para no continuar con los mandatos conservadores basados en el disciplinamiento - desde la tutela y el control- de las clases subalternas. De esta forma, no se limita a responder a los requerimientos de las instituciones, favoreciendo la participación social y las relaciones democráticas. Este argumento, en coincidencia con Montaña (2000), marca que, si los profesionales se limitan solo a la atención de la demanda, no ven las demandas

emergentes, ni permiten el aprovechamiento de las políticas sociales como instrumento para favorecer la organización popular.

La intervención profesional no refleja un simple accionar por una “compulsión al hacer”, sino que se encuentra impulsada, acompañada, guiada, planificada, fundamentada y comprendida desde una argumentación teórica por medio de un ejercicio crítico. Nora Aquin (2013) plantea que la intervención implica poder considerar permanentemente las condiciones en que la práctica social se desarrolla, y así argumentar en torno a las complejas relaciones Estado-sociedad que le dan marco.

Aquin, Custo y Torres sostienen, que en el Trabajo Social también existe una preocupación por profundizar el conocimiento y actualizar los debates en torno a los procesos de construcción de la profesión en la relación Estado - sociedad.

Consideran que existen tensiones entre autonomía - heteronomía las cuales implican considerar que el Trabajo Social adquiere sentido y significado social como profesión en el marco de relaciones sociales que se producen y reproducen dentro de una sociedad capitalista, las cuales van señalando los límites y posibilidades de la intervención profesional. En relación a los límites, lamamoto argumenta:

“El trabajador social no posee todos los medios -técnicos y financieros- necesarios para el ejercicio profesional autónomo dependiendo de recursos previstos en los programas y proyectos de la institución que lo requiere y lo contrata, por medio de los cuales es ejercido ese trabajo especializado. Parte de los medios o recursos materiales, financieros y organizacionales necesarios para el ejercicio del trabajo son brindados por las entidades empleadoras. Por lo tanto, la condición de trabajador asalariado no solamente encuadra al Trabajador Social en la relación salarial, sino que también moldea su inserción socio-institucional en la sociedad. Por más que disponga de autonomía relativa para concretizar su trabajo, el Trabajador Social para organizar sus actividades depende del Estado, empresa o entidad no gubernamental, las que posibilitan o limitan que los interesados accedan a sus servicios, provean los medios y recursos para su realización, establezcan prioridades, interfieran en la definición de papeles y funciones que componen el cotidiano del trabajo institucional. Por eso, la institución no es un condicionante más del desempeño del Trabajador Social, sino que interviene como organizador de ese espacio” (lamamoto, 2003:81).

Por otro lado, la noción de autonomía planteada por Faleiros comprende que,

“Al mismo tiempo la construcción de autonomía lleva a la ruptura de lealtades con el orden dominante y al control de las políticas en curso, a través de la presión colectiva para su puesta en marcha, de la exigencia de su derecho, lo que contribuye a la formación de un proyecto desociedad diferente, de una nueva hegemonía. La autonomía no es una teleología, sino un proceso de lucha, de articulación de poderes a través de la organización, de la teorización, de la movilización de energías, recursos y estrategias que se traducen en fuerza contrahegemónica.” (Faleiros, 2001:117).

Refiere a su vez a que existen límites y alcances en el campo de las políticas sociales, que se conceptualizaron durante el capítulo previo, por los cuales los profesionales pueden estar limitados por las instituciones, o por las singularidades presentes en los sujetos intervinientes o por no poseer una concepción teórica-metodológica y política fuertemente fundada que oriente su quehacer profesional.

Por otra parte, Bourdieu (1980) destaca un factor fundamental de las prácticas contemporáneas: la temporalidad, explicando que los sujetos han de producir sus prácticas en la urgencia temporal donde el profesional tiene que actuar, que responder. De este modo, sostiene, la inmediatez obstruye la mirada, impide indagar, evitando poner en análisis los matices de los problemas sociales. Asimismo, los profesionales del Trabajo Social podrían contar con un “plus militante” sustentado en el compromiso social. Estos componentes podrán ser los que expresen la dificultad para poner límites a la multiplicidad de demandas, y en aceptar los bajos salarios, la multiplicación de las horas de trabajo o la polivalencia funcional, momentos en que estos mismos actos generan espacios para el ejercer autonomía o heteronomía frente al pluriempleo y condiciones de precariedad laboral.

Otra característica que atraviesa la profesión es la variable de género. En un primer momento, consideradas como semi profesiones destinadas, junto al magisterio y la enfermería, a la protección y a la asistencia se marca también que aquello “femenino” se inscribe como algo incompleto. Esta “vulnerabilidad” de la profesión se ve reflejada, por ejemplo, en cuestiones de tipo salarial y en las condiciones laborales. Sumado a ello, desde la representación social se considera que la tarea fundamental de los trabajadores sociales es “ayudar”, para lo cual se requiere un bajo nivel reflexivo y una respuesta inmediata, para paliar la situación material de los sujetos vulnerables, perjudicados por las políticas neoliberales, y una gran “voluntad”, que según estas representaciones, les es propia. Estos discursos son los que generalmente se hacen presentes en las comunidades, las instituciones y con otras profesiones con las que se trabaja articuladamente.

Si analizamos los últimos años en Argentina, en términos de límites y posibilidades de la intervención profesional, planteamos que, durante la década anterior al año 2016, el Trabajo Social se encontró frente a significativas transformaciones en el campo de la intervención social por modificarse progresivamente el proceso de distribución secundaria del ingreso, dada la incorporación de distintas franjas de la población al consumo, al crédito y a la institucionalidad vigente, cambiando las condiciones de reproducción de la población. Esto sucedió, ante un impulso redistributivo en grandes grupos poblacionales, generando modificaciones en los procesos de reproducción cotidiana y en las estrategias de vida de los sectores con los que interactúa el Trabajo Social.

Luego de ello, las medidas económicas adoptadas por la coalición de gobierno Cambiemos, durante el período abordado en este trabajo, llevaron a sucesivas crisis que no sólo acarrearón la degradación de las condiciones materiales de existencia de amplias franjas de la población, sino que se tradujeron también en la fragilización de los lazos sociales. Es en un escenario de deterioro de las instituciones, de las redes de contención, de las familiares y comunitarias, que los profesionales del Trabajo Social intervinieron para poder modificar las situaciones planteadas por las familias y las comunidades como demandas emergentes.

En palabras de Seoane (2018) existe ante la ofensiva neoliberal conservadora un tratamiento punitivo de la

desigualdad y un tratamiento policial de la “cuestión social”. En este aspecto se requiere de profesionales del Trabajo Social que no actúen como un dispositivo institucionalizado sino como practica instituyente ante una sociedad civil que expresa la radicalización de la desigualdad social. La misma asume en la actualidad rasgo de racionalización de la polarización social junto con la clasificación de las desigualdades, lo que opera en una violentización del lazo social.

Legitimidad profesional

Coincidiendo con Cazzaniga, se entiende por legítimo *“Aquello conforme a la ley y, por lo tanto, permitido asociándose entonces a lo genuino o auténtico; de allí que legitimar bien podría significar también habilitar”* (Cazzaniga, 2012:1). Son los cambios en la estructura económica y social los que producen la necesidad de una nueva legitimidad de la profesión, basada en los principios de igualdad y libertad. Esto significa que los nuevos contextos la legitimidad implican la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas son necesarias para la sociedad. Para hacer referencia al Trabajo Social, se cita nuevamente a Montaña quien plantea que, de acuerdo con las perspectivas existentes sobre la génesis de la profesión, habrá diversas formas de entender la legitimación frente a la sociedad y el Estado.

Así, desde la perspectiva endogenista, la legitimidad radica en la “especificidad” de la profesión. Lo específico, expone, sería la prestación de servicios dirigidos a los sectores empobrecidos y carentes de la población. También sería específico un tipo de investigación que solamente sea orientada a la acción. Según esta mirada, los sujetos específicos serían “los pobres”, o los asistidos por las políticas sociales.

Montaña, en desacuerdo con la postura expresada en el párrafo precedente, desde la perspectiva histórico-crítica, explica que el Trabajo Social es legitimado por el papel que cumple “en y para” el Estado capitalista. Su legitimación, así, tendrá que ver con su función como ejecutor de las políticas sociales. Expresa que los profesionales a su vez, en los orígenes de la profesión han trabajado desde una postura moralizadora y disciplinadora.

Ahora bien, manifiesta que lo que legitimó a la profesión fue la atención a las demandas dispuestas dentro de la división social del trabajo, el haber dado respuestas a determinadas demandas sociales. También lo legitima la existencia de instituciones con interés y capacidad para contratar a estos profesionales. Desde esta línea distingue dos tipos de legitimidad: la “funcional” y la “social”. La primera muestra una relación asistente social / empleador. Esta legitimidad es la condición del agente y el significado social de su acción, es la existencia de un campo de trabajo que es demandado por las problemáticas sociales. Por legitimidad social, comprende una relación asistente social / usuario, la cual expresa la demanda por los servicios lo que torna al profesional aceptado y solicitado por la población.

Se deberá tener presente que la profesión emerge, según Netto, en un contexto donde el capitalismo -ya monopólico- transforma las atribuciones del Estado, el cual deberá garantizar la continuidad de esa sociedad capitalista, como se expresó previamente. Esto, sostiene, tiene que ver con la preservación y el control continuo de la fuerza de trabajo ocupada y excedente. Para ello debe legitimarse (ganarse la lealtad de las masas, al decir de Offe) en lo socio político mediante la generalización y la institucionalización de derechos, garantías civiles y sociales, como consenso permanente.

De todos modos, se evidencia una tensión constante debido a que el Estado se vuelve permeable a las reivindicaciones de los trabajadores, siendo expresiones de la “cuestión social”, dándole respuestas desde el Estado. La legitimación del Trabajo Social, entonces, estará existiendo de manera paralela con la legitimación del Estado y su acción específica será parte de las funciones de éste para garantizar la reproducción del capital a partir de las políticas sociales.

Por estos análisis es que los profesionales, ante lo dispuesto y condicionado, no “resuelven” ni actúan desde su “voluntad de ayudar y su amor”, -como se instaló en el imaginario histórico reciente-, sino que trabajan de forma crítica para un Estado cuyo sentido actual es el de auto des responsabilizarse, a través de la implementación de políticas sociales en donde se genera cierta transformación que no va en el sentido de la igualdad, sino en el fondo, tiende a hacer perdurar las desigualdades.

Estos elementos permiten que se pongan en tensión los conceptos de igualdad, desigualdad y consumidor-usuario ante los debates y retrocesos en los alcances de las políticas sociales evidenciando en el período abordado un aumento de la deuda externa exponencial - con una gran capacidad de la cúpula del gobierno para eliminar el mercado interno-. Una clara consecuencia de esta capacidad de destrucción se ve reflejada en su impacto en el tejido social, con un marcado aumento de la pobreza y del desempleo juvenil¹⁸.

Desde estos argumentos es un capitalismo que absorbe cajas públicas, reduciendo la demanda y achicando la economía. Despliega conflictos en cuanto a lo que remite al endeudamiento asociado al ajuste fiscal, el control del gasto público, el retroceso de los derechos de los trabajadores y jubilados, y el recrudecimiento de la violencia por falta de oportunidades y la xenofobia. Para el autor, estas son las formas en que las finanzas materializan su violencia expresiva y condiciones de reproducción. La orientación hacia la primarización y desindustrialización, sumada al endeudamiento progresivo que se evidencia y las reformas en el sistema previsional, laboral (flexibilización), los tarifazos y el recorte discrecional en el gasto hacia las provincias como la de Santa Cruz, generan que el capitalismo competitivo en Argentina no cumpla con sus propios objetivos macroeconómicos. Los mismos son los que se proponen en el marco de la apuesta hacia una bicicleta financiera de especulación permanente sin inversión productiva y mucho menos para el abordaje de lo social.

En el contexto abordado, las medidas del gobierno no apuntaron hacia la promoción del desarrollo local, mientras la producción eligió apostar hacia la -inexistente- inversión extranjera y la financierización de la economía, siendo todas estas cuestiones intrínsecas al neoliberalismo. Esto estuvo direccionado por una neoliberalización del Estado sostenido por una neo asistencialización ante las expresiones que las manifestaciones de la “cuestión social” evidencian.

Ante un Estado con intervención en retracción, omitiendo responsabilidades, es que se apuesta a un discurso sobre la ética institucional y la judicialización de la política frente al aumento de la conflictividad interna por reclamos en cuanto a restitución de derechos adquiridos y ahora avasallados. Así, mientras se observa una criminalización de la protesta como mecanismo de control, sumado al desempleo como disciplinador social: pudiendo observar que bastos grupos poblacionales se ven obligados a emigrar desde sus lugares de pertenencia en busca de un mejor (posible o

no) porvenir. También recae en la judicialización de las problemáticas intrafamiliares, o de sus devenires, mostrando mecanismos de control y poder que se traducen la mayoría de las veces sobre las clases populares o subalternas.

Dentro de estos espacios se dan fronteras disputables donde el profesional debe tensionar las dimensiones tangibles e intangibles para actuar, interpretando así las diferentes tramas institucionales y las intenciones del sistema que los enmarcan. Dentro del período estudiado, se promulgó la resolución 598/2019 de Ministerio de Seguridad de la Nación para la creación del Servicio Voluntario a cargo de Gendarmería Nacional. En el campo profesional, generó repudio y preocupación, ya que la intervención en el campo de las políticas públicas y sociales se orienta a priorizar los Derechos de NNyA considerando que la militarización de sus proyectos de vida no es el camino adecuado para su transformación dado que el Estado debe garantizar sus derechos desde un enfoque integral tal como lo establece la CIDN y la ley 26.061 de las cuales se adhiere desde la provincia de Santa Cruz mediante la Ley provincial N°3.062. Queda a los colectivos profesionales exigir políticas públicas superadoras que construyan y aporten al Interés superior del niño sin recaer en mecanismos ni figuras que estructuren sus conductas ni restrinjan sus libertades.

Transformaciones contemporáneas e intervención profesional hoy ¿de qué lado de la mecha te encontrás?: los desafíos

“La crítica no es un fin en sí mismo, sino un medio: la indignación es su modo esencial de sentimiento, y la denuncia su principal tarea”

Marx, 1884

Partiendo de una pregunta que nos interpela, que busca hacer ruido desde la provocación se toman los aportes de Netto (2003), quien postula que siempre que los trabajadores sociales, como sujetos, desarrollen una práctica social específica buscarán imprimirla a ésta una dirección que concretiza uno de los proyectos societales en juego, en confrontación con los otros proyectos. A su vez, distintos trabajadores sociales adscribirán a diferentes proyectos societales y, por lo tanto, *no hay una única direccionalidad de la acción profesional ni un único proyecto profesional*, pudiendo hacer una lectura de las diversas propuestas de intervención con la niñez y las familias en el desarrollo de la presente Tesis. Se pone en palabras el hecho de que los efectos objetivos del ejercicio profesional no dependerán sólo de la opción de los trabajadores sociales, sino también de las relaciones de fuerzas e intereses en puja presentes en la institución que, como atravesamientos, condicionará en mayor o menor medida el control de dicha

¹⁸ La informalidad laboral en el país afecta a casi 1 millón de jóvenes. Los que alcanzan una tasa de empleo no registrado del 58,3%, el doble de la que registran los adultos (28,9%). Asimismo, los jóvenes son el 25% de los asalariados no registrados totales. # Casi 1 millón de jóvenes no estudia, ni trabaja, ni busca trabajo, lo que representa el 16% de los jóvenes totales. Es decir, que casi el 42% de la población de entre 16 y 24 años presenta problemas de inserción socio-laboral. # El 90% de las personas ocupadas de entre 16 y 24 años son asalariadas. # Los jóvenes en situación de pobreza ascienden al 43,5%, considerando tanto la pobreza por ingresos como por necesidades básicas insatisfechas.

Por otro lado, se observa una mayor incidencia de la problemática “ni-ni” entre los jóvenes pobres que entre los no pobres. Del mismo modo, las tasas de desempleo y empleo no registrado son más elevadas entre los jóvenes de hogares pobres, especialmente en aquellos que se encuentran en situación de pobreza crónica. Fuente: (DGlyEL - SSPEyEL (MTEySS), en base a datos de la EPH – INDEC).

direccionalidad. Entonces, se hará necesario desplegar acciones, considerando esas relaciones de fuerza que, combinadas, intentarán alcanzar los objetivos y finalidades puestos a esa intervención.

Ante un capitalismo con reproducción sistémica destructiva, las políticas deben acompañarse, según Álvaro García Linera (2016), de un análisis de las correlaciones de fuerzas, para comprender la dinámica de las multiformes y multi espaciales luchas sociales ante las que interviene el Trabajo Social, entendiendo cómo actúa la contra ofensiva imperial en América Latina. En el recorte analizado, 2016 a 2019, se observa un asedio ideológico - cultural contra los gobiernos y las fuerzas revolucionarias - progresistas. Mediante un discurso liberal y moralizante, se instala un debilitamiento cultural, una lucha por los significantes, pidiendo a su vez a los profesionales del Trabajo Social el desarrollar prácticas acotadas, donde otros creen tener prioridad de opinión sobre tales intervenciones. Para Ricardo Forster :

"La estrategia neoliberal, su enorme capacidad para impregnar con su visión del mundo el sentido común dominante, logra apropiarse, cuando lo que necesita, de memorias y gramáticas pertenecientes a sus antiguos adversarios, pero lo hace vaciándolos de contenidos y reduciéndolos a los espectáculos especialmente armados para conciencias sensibles" (Forster, 2016:90).

Esta estrategia también marca su impronta en el diseño de las políticas sociales modificando tanto los contenidos como el quehacer profesional de los trabajadores sociales. A partir de ello tendrán un gran desafío por delante como parte de la sociedad, como parte de su contexto, debiendo comprometerse con profundizar su bagaje teórico, dilucidando sus espacios de acción -o inacción-, y enriqueciendo su matriz epistemológica de modo de no escindir la teoría de la práctica.

Podemos aseverar que se ha reconfigurado la intervención profesional debido, entre otros aspectos, a la "evaluación social" en parámetros de "eficiencia" por parte de los empleadores en función de las respuestas que puedan brindar –materiales o simbólicas-, reduciendo así la profesión a una función de gestión y de distribución de recursos, lo cual contribuye a consolidar esta idea en las comunidades, acotando los márgenes de intervención y acción. En dicho contexto, la tarea del Trabajo Social tiene que poder complejizar las múltiples determinaciones de la realidad cambiante, trabajando en la investigación, en la elaboración de categorías y proyectos, rompiendo lo naturalizado como pilar de lucha, realizando así acciones, a través de tácticas y estrategias, que acompañen un ejercicio de problematización con horizontes emancipadores. Tal intervención profesional será comprometida, sin neutralidades ni miradas acriticas persiguiendo como eje y horizonte los derechos humanos en general y sociales en lo particular.

Para ello, es necesario tener noción de que se actuará según sea el campo discursivo en el cual se desempeñan los profesionales, y en la perspectiva epistemológica en la cual éstos se inscriban, teniendo diferencias tanto del habla cotidiana, del habla disciplinar, así como del uso de los conceptos, como la historia de las categorías y el uso de esas mismas nociones. Por último, es importante destacar que tanto el saber, la utilidad y la "eficacia" de la

intervención otorgarán legitimidad o no ante los resultados debiendo evaluar posteriormente utilidad y eficacia ¿para quién?. De esta manera el quehacer cotidiano de quienes ejercen el Trabajo Social se encuentra atravesado por demandas superpuestas y heterogéneas orientadas hacia respuestas instrumentales (Guerra, 1997) sin plantearse el para qué siendo éste definido de manera acrítica y externa al/la profesional.

Ahora bien, la “utilidad” no tiene que ser interpretada como una cuestión instrumentalista, sino que coincidiendo con Gulmer, dentro del capitalismo la utilidad de las profesiones se origina en que éstas deben “servir para algo”. El Trabajo Social como todas las profesiones permanentemente tiene que construir legitimidad, ya que la que se crea no es eterna, si bien es una profesión que está históricamente legitimada y así reducida a ella desde su función asistencial¹⁹. Por ello se debe intervenir pensando desde la matriz de la historia, pensando tanto en la identidad atribuida por funcionarios y muchas veces por el propio Trabajador Social -ampliando o limitando su relativa autonomía-, como así también en la legitimidad de cada contexto y en la que los diversos actores la otorgan en un marco normativo regulatorio.

Explica que la imposibilidad en Trabajo Social implica entender que la intervención nunca se podrá completar, aunque se persista en su intento. Enumera que en la actualidad se evidencia un aumento de las urgencias, de lo imprevisto y lo inmediato, enfrentando las demandas de sujetos que no continúan siendo los “sujetos homogéneos” tradicionales, los esperados. Hoy en día puede verse en el trabajo del profesional que también se le requiere de programas o proyectos sociales donde se le impone un tiempo para las presentaciones en cuanto a los organismos de financiamiento, un tiempo para su implementación y un tiempo para la rendición presupuestaria, tiempos para las actividades administrativas siendo un perfil requerido más de gestión y de evaluación de resultados que de abordaje e intervención como derecho sin plazos definidos a priori.

Por último, el cumplimiento de metas para poder brindar “eficacia” y “eficiencia” hace que aparezcan indicadores de tipo cuantificable a fin de medir el “rendimiento” del ejercicio profesional coincidente con el modelo de ajuste desde otras órbitas impuesto en países como Argentina. En Trabajo Social, el campo de intervención se ubica en el espacio complejo y contradictorio que se construye entre las instituciones que brindan servicios y las necesidades, demandas y reclamos sociales generales. Además de no conseguir siempre resultados palpables en las intervenciones también se entra en tensión entre los dispositivos instituidos e instituyentes.

En el marco de la consolidación del neoliberalismo, en torno a la intervención del trabajador social, se pretende desde las instituciones el dar respuesta a demandas que van desde otorgar certificados de pobreza hasta el control del uso “eficiente” de los recursos otorgados. Además, el objetivo profesional, en sus palabras, se reduce a analizar que sujetos merecen o no recibir ciertos servicios, prestaciones y subsidios siendo pretensiones de las instituciones tales labores como solían remitirse al atender u extender los certificados de pobreza.

A pesar de ello, el/la profesional no se halla aislado sino que cuenta con un colectivo profesional para tomar alternativas que no reproduzcan irreflexivamente las demandas institucionales, sino que adopten decisiones basadas en sólidas y congruentes posturas profesionales.

¹⁹ Cuestión que se abordará desde los aportes de Andrea Oliva

Pensar en proyectos profesionales será analizar posibilidades concretas de responder a la realidad social, reflexionando y debatiendo acerca de la intervención en sí. Implica, sostienen, un desafío para clarificar posiciones al interior del colectivo profesional, entendiendo a la profesión como algo no homogéneo. Tal debate permitirá otorgar competencias técnicas y operativas necesarias para alcanzar este fin reafirmando el compromiso con el derecho de los sujetos para alcanzar una realidad con actos de justicia y libertad. Luego de lo analizado, es necesario remarcar el primer planteo donde la cuestión de la legitimidad estaría relacionada muchas veces a partir de parámetros de resultado o eficacia; no debiendo perder de vista la diferencia fundamental entre las prácticas profesionales y la acción voluntaria que busca resultados en términos de índole más tangibles. En líneas generales las intervenciones profesionales no siempre dan cuenta de elementos evidenciables que arrojen tales intervenciones y no está mal que así suceda.

A su vez, y como se ha expuesto, actualmente se evidencian condiciones de precarización y flexibilización laboral de los trabajadores sociales que, en palabras de Cazzaniga, logran un efecto disciplinador. Sin embargo, a pesar de estas condiciones laborales, el profesional del Trabajo Social tiene ciertos márgenes de autonomía relativa en relación a los aspectos operativos de la intervención profesional. Desde la dimensión operativo instrumental del Trabajo Social, en las actividades que realiza puede participar, gestionar, modificar programas o proyectos en las instituciones. Esto asociado, entonces, a ganar solvencia, pensamiento crítico y autónomo desde un abordaje situado temporo- espacialmente.

A partir de lo recuperado en el presente capítulo acerca de la concepción histórica del Trabajo Social, su significado social y su profesionalización se ha podido analizar en sus orígenes una identidad atribuida vinculada a lógicas de control social, de moralización y disciplinamiento, respondiendo a perfiles gestores, instrumentalistas y de individualismo pragmático que se le asignaron, siempre estando subordinada a otras profesiones. En sentido contrario, para romper con tales lógicas, varios autores aquí recuperados persiguen la búsqueda de la emancipación, a partir de la autonomía profesional relativa y la visibilización de las múltiples determinaciones de la realidad que rompa con el sentido común en sus aseveraciones y nominaciones. Tal postura permitiría así, como se abordará en el capítulo próximo, reflexionar sobre cómo se trabaja desde la categoría de vida cotidiana para comprender a los sujetos de derechos desde el Trabajo Social con niños, organizaciones familiares, expulsados y migrantes, entre otros.

CAPÍTULO III: Les niños y las familias, sujetos de la intervención profesional

“Parte del motivo por el que el capitalismo parece tener éxito es que siempre ha contado con mucha mano de obra esclava, la mitad de la población. Lo que las mujeres hacen -fuera del mundo laboral- no cuenta para nada”

Noam Chomsky

Aquel niño esperado, aquella familia “normal”

Según Eroles (2005), la niñez como categoría social es una construcción de la modernidad que debió superar la invisibilidad que le asignaron las distintas culturas a través del tiempo, invistiéndola y despojándola de sentidos, vinculados a los procesos históricos que cada sociedad constituye y la producción social de aquellos actores que la conforman. Por su parte, Sokolovsky define a la niñez como *“Construcciones sociales y culturales que se han ido modificando a lo largo de la historia. La idea de “niño o “niña (o más amplia aun) de “niñez”, responden a un criterio particular de cada momento histórico asociado a la cultura de que se trate”* (Sokolovsky, 2006:34).

Retomando la concepción de la infancia, la misma es considerada por UNICEF como mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, explica que se refiere al estado y la condición de la vida de un niño: a la calidad de vida de esos años. Considera que esa calidad de vida cambia de manera radical dentro de una misma vivienda, entre dos casas de la misma calle, entre las regiones y entre los países industrializados y “en desarrollo”²⁰. A pesar de esta concepción, actualmente existen diversas expresiones en donde la situación no es tan idílica como se la plantea desde los textos donde se las define, influenciados por datos y evaluaciones internacionales.

Sokolovsky J. y Fernández Campos V.(2006) consideran que la infancia en el imaginario social fue concebida como una etapa de cariño, protección, respeto y dulzura. Es en ese planteo idílico es que se ve al niño como una promesa de futuro. Durante el siglo XX, agregan, se reforzó esta idea por medio del disciplinamiento y la formación a través de la educación y la socialización como herramientas que permitirían que el niño se introduzca en la sociedad. El niño entonces, es visto desde una mirada de la caridad cristiana, que emergerá y dirigirá el mundo. Esta conquista idealizada, supone un único concepto de infancia y de familia. Para Philippe Aries (1987) *“La infancia es una construcción histórica que termina de ser elaborada en la modernidad; no es natural ni dada, es una elaboración cultural e idealizada”* (citado en Sokolovsky, 2006:69).

²⁰ Se menciona la categoría sostenida por UNICEF, sin coincidir con la misma ya que se refiere al término en un intento de justificación de los grupos y sectores dominantes para acentuar la dependencia de los países subdesarrollados y periféricos cuya posición en la división internacional del trabajo en hechos les es funcional a sus propios intereses.

Previamente, a lo largo del siglo XVIII, se comienza a concebir al niño como diferente del adulto, con distintas características. Según Carli S. (1999) con la modernidad surge un nuevo paradigma de la infancia: como una construcción social en donde se reconoce que el niño es dependiente del cuidado del adulto y no es un par pero más pequeño, sino que necesita ser formado y educado siendo una tabla rasa en la que se deberán escribir las cosas necesarias para que se desarrolle como futuro adulto. Desde occidente, el imaginario social considera que la infancia “es universal y absoluta”, pero se remarca que la infancia es diferente según sea el momento histórico y cultural tanto como el lugar geográfico y la territorialidad en donde éste se desarrolle.

Se destaca que hay una historia particular de cada niño, irrepetible; la niñez, entonces, no es igual para todos ya que las variables sociales, culturales, económicas, históricas, religiosas, políticas, familiares, espaciales y las trayectorias de vida darán forma al entorno donde cada sujeto crezca. Por ende, se puede afirmar que no hay una sola infancia, tomándola desde una concepción de modelo ejemplar, sino que existen infancias. Esto refiere a la existencia de múltiples formas de transitarla cada vez más afectados por las desigualdades y procesos que atraviesan. Destacan los autores que *“Los niños fueron imaginados, concebidos, tratados, tutelados, dispuestos, internados, institucionalizados, acompañados cobijados, contenidos, educados, y ahora protegidos integralmente en sus derechos de modos muy diferentes según el momento histórico, por lo que hubo y hay muchas infancias”* (Sokolovsky, 2006:73). Las infancias, entonces, se viven en diversos escenarios, plurales, según sea su contexto.

A lo largo de la historia hubo diversas concepciones de la niñez, según han sido las características propias de cada época. La palabra niñez refiere al período de la vida entre el nacimiento y la adolescencia, transmitida de generación en generación fusionada en el imaginario social con la idea de pureza, de ingenuidad e inocencia. Estos valores han ido marcando el sentimiento de los adultos para con éstos por lo que se ha cristalizado a la niñez en esa imagen (Giberti, 1997).

Esta manera de concebir a la niñez no existió siempre, sino que ha ido modificándose radicalmente: a partir de la edad moderna comienza a considerarse a la infancia diferenciándola del patrón adulto. A su vez, la incipiente industrialización, el capitalismo y el Estado moderno hicieron emerger el concepto de infancia como legitimador de una etapa de la vida (Bouzas, 2004). Esta autora describe que durante los siglos XVII y XVIII las actitudes hacia la crianza de los niños comenzaron a cambiar ya que los religiosos sostenían que eran “criaturas delicadas de Dios” a quienes había que proteger del comportamiento “salvaje” de los adultos. Una forma por la cual se pretendía este objetivo era enviar a los jóvenes a la escuela.

En ese entonces, el fin de la escolaridad era impartir una correcta educación moral y religiosa, en la cual luego apareció como subsidiaria la enseñanza de la lectura y la escritura (Shaffer, 2000). Así, la masificación de la escolaridad obligatoria que se produce a finales del siglo XX hace resurgir el concepto de “infancia”, en tanto diferencia y especificidad (Bouzas, 2004). En Argentina, la etapa fundacional de la educación fue acompañada de una concepción de infancia en la cual el niño es subordinado a sus padres y a sus docentes, sin tener así derechos propios (Carli, 1992). Asimismo, Ciafardo (1992) plantea que entre 1890 y 1910 los niños de Buenos Aires se diferencian de los adultos y se dividen en tres grupos diferentes: los pobres, los de los sectores medios y los de la élite. A partir de

esta clasificación, se comienzan a delimitar las particularidades y destinar las políticas para cada grupo. Para el primer grupo, las prácticas implementadas fueron la persecución, la detención e internación por ser niños vagabundos, “transgresores” o niñas que ejercían la prostitución, mientras que a los otros dos grupos se los orientaba con la enseñanza escolar y la normativización moral en las escuelas. Cabe resaltar que ese contexto era de poblaciones migrantes que se habían instalado recientemente en el país.

Entre 1919 y 1930 junto a los diversos cambios en el Estado, explicitados en el Capítulo I, surge el discurso de la minoridad y la institucionalización del menor no escolarizado. La atención a la infancia “abandonada” dio lugar a una Primera Conferencia Nacional en 1933 que elaboró proyectos para dicha atención. Luego, con el avance del peronismo, se resignificó la infancia pasando a concebir a los niños como “los únicos privilegiados”. Con el pasar de los años se ha modificado esta concepción llegando actualmente a producirse frecuentes debates, impulsados por ciertos sectores, acerca de la reglamentación para la ley penal juvenil cuya intención es la de imponer una baja en la edad de imputabilidad de los aún considerados “menores”.

Simultáneamente, como se hizo referencia en párrafos precedentes, se produjo un giro copernicano por medio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (en adelante CIDN) de 1990, a partir de la cual se considera al niño ya no como un sujeto pasivo, sino que pasa a tener participación activa como sujeto de derechos, los que son indivisibles, inalienables, irrenunciables e universales.

Para abordar la categoría de niñez cabe considerar que, si bien se ha concretado la sanción de una legislación nacional en 2006 que deja sin vigencia la antigua Ley de Patronato, las prácticas de la mayoría de los organismos estatales están signadas por la influencia del paradigma de la situación irregular. Las instituciones operan entonces desde preconceptos, entendiendo al sujeto como un menor no punible, incapaz y por esto necesitado de tutela, en todas aquellas situaciones que la/el niño se encuentre en “peligro moral o material”, esto respondía a un régimen tutelar que disponía las intervenciones ante problemas sociales varios.

La Doctrina de Protección Integral instalada con fuerza de Ley en nuestra Constitución en la Reforma de 1994, ha signado una serie de modificaciones, que comprende ya no a “un menor” sino a un sujeto pleno de derechos, activo y capaz de transformar su realidad. Este debate se inscribe actualmente en un momento de crisis y transición de las instituciones, una vez modificadas muchas de las leyes del paradigma anterior, con un alto grado de complejidad para su plena implementación por las propias dinámicas y las posibles resistencias institucionales. Gutiérrez plantea que:

“La doctrina de la situación irregular –tributaria del positivismo criminológico-, establece la pena como una respuesta científica a una “anormalidad” del “niño-delincuente” y el procedimiento es una investigación de dicha “anormalidad” tendiente a producir una respuesta adecuada por el que el pronóstico del niño anormal -en “riesgo social”, abandonado, etc.- que se equipara con la “peligrosidad” y con todo lo que le es inherente desde la perspectiva de la defensa social. En la doctrina de la protección integral emanada de la Convención, en cambio, el niño “es una persona humana a la cual le corresponden todos los derechos y las garantías básicos que tanto la constitución de un Estado como las convenciones internacionales confieren a cualquier persona, sin distinción de edades, al considerarla digna.” (Gutiérrez, 2010:157).

La niñez a lo largo del tiempo

Eroles, Fazzio y Scandizzo (2001) marcan las diversas formas en que se categorizó históricamente la niñez en torno a diversos paradigmas:

-Un paradigma del menor en peligro material o moral: Para García Méndez fue un paradigma al que lo llamó “el paradigma de la compasión-represión”. Allí el juez dispone del menor asumiendo el ejercicio de la patria potestad. Considera el riesgo social en la infancia como responsabilidad de la familia y las estigmatiza. Desde esta óptica, el peligro es el menor para la sociedad y no ésta para “el menor”. A modo de ejemplo, como se considera que el peligro es “para” la sociedad, el encierro es una especie de solución ante los chicos “de” la calle que, desde esta óptica, “ya nacen delincuentes”- como parámetros biologicistas- (considerados irrecuperables).

Se concibe de este modo que el delito surge de la pobreza, siendo dos formas de esta “desviación social”. El juez, mientras tanto, tiene libertad para resolver (según su conciencia) sin dar intervención a un defensor, a un profesional ni a los padres del sujeto. Menor, es la designación que se le da a ese sujeto considerado como pasivo en la intervención. Desde esta concepción, la Ley Agote (10.903) reglamenta el accionar del Estado, la justicia, las instituciones y la comunidad, quitándole al niño la dignidad, la libertad, con un futuro incierto. Este paradigma estigmatizante adquiere una mirada normalizadora desde el Estado así como también reguladora de los vínculos familiares. La tutela y el patronato, entonces, se les brindan por ser considerados seres inferiores. Son sometidos éstos a un disciplinamiento y control social además de procesos de normalización.

De este modo, la Ley Agote del Patronato de Menores consolidó un nuevo paradigma jurídico, cultural y social en donde la figura del “menor” era objeto pasible de ser tutelado, dispuesto, protegido, encerrado y vigilado. Se consideraba niños “abandonados” a aquellos que no tenían hogar conocido, quienes pedían limosna, los vendedores ambulantes, canillitas, es decir, quienes podrían ser peligrosos (desde su óptica) por una asignada “falta de moralidad”. Se institucionalizó el encierro masivo de niños por causas sociales, por abandono, peligro moral o material. El Estado de este modo tenía la potestad de reeducar y resocializar a estos niños pobres, en su mayoría modelados según los parámetros de clases hegemónicas. Este paradigma se acompañó del asistencialismo filantrópico, la sociedad de beneficencia y diversos agentes de caridad.

-El menor en situación irregular: Resulta difícil caracterizar la diferencia entre este paradigma y el previo en aspectos puntuales, siendo en cierto modo complementarios. Este paradigma supone la existencia de una situación de normalidad, de regularidad. También, entonces, estigmatiza a los menores, quienes carecen de derecho y libertad como en el caso anterior. El juez tiene impronta paternalista - asistencialista, y considera la internación como la principal herramienta de protección para éstos. Además, manipula en criterios de imputabilidad o inimputabilidad de un menor. El tratamiento legal de la minoridad se caracterizó de este modo por ser tutelar, proteccional y de asistencia. Se lo “protege” penándolo, dejándolo privado de su libertad como niño.

-El menor en situación de riesgo: esta caracterización es más social que jurídica, permitiendo describir una situación problemática que afecta a un niño sin hacer juicios morales ni asignarle responsabilidades individuales. Definen el riesgo como *“Un conjunto de factores que determinan la posibilidad de que se produzca un daño o una vulneración. El concepto tiene la labilidad suficiente como para permitir caracterizar determinadas poblaciones, barrios, ocupaciones, grupos etarios, etc. como “de alto o bajo riesgo”* (Eroles, 2005: 63). Algunas instituciones utilizan el enfoque de riesgo como adecuado para caracterizar situaciones propicias para la vulneración de las personas, las familias y los grupos sociales. Otras han utilizado categorías similares como las que propone UNICEF: “menores en circunstancias especialmente difíciles”, “menores en estrategias de supervivencia”, y otras como “adolescentes en conflicto con la ley”, “madres en conflicto”, “chicos en situación de calle”. De este modo, se toma alguna condición como indicador de riesgo social, permitiendo la descripción de las diversas situaciones problemáticas que afectan a los niños y adolescentes.

Este enfoque, para los autores, ha permitido profundizar el diagnóstico contextualizado de la realidad social que afecta a los niños y adolescentes en las áreas urbanas. Facilitó el diseño de programas y respuestas operativas a la problemática del niño y el adolescente enfrentando dificultades o conflictos, además de haber permitido conocer los peligros que podría afrontar, para quien ser sospechado y reprimido no es poco. Este enfoque evita responsabilizar a la familia de la falta de cuidado para no revictimizarlo nuevamente.

-Niño como sujeto de derechos. La promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes: Carlos Eroles (2005) agrega que el 20 de noviembre de 1989 se dio un cambio fundamental en la concepción de ciudadanía y en el concepto de derechos humanos a partir de la Convención Internacional de los Derechos del niño (CIDN). Constituye un cambio de paradigma por considerar al niño como sujeto pleno de derechos. Deja atrás una concepción retrógrada en donde el juez era considerado un buen padre de familia, capaz de decidir por el niño. Este nuevo paradigma, además, remarca la exigibilidad al Estado por el cumplimiento de los derechos del sujeto.

Representa un giro copernicano en la concepción de los niños, al decir de García Méndez (2004), la CIDN, es una verdadera divisoria de aguas por transformar las necesidades en derechos. El enfoque pasa a ver al niño como sujeto, suponiendo la articulación de la acción estatal y comunitaria desde los ejes de prevención y promoción. Describe que las políticas públicas de protección de los niños en el marco de la Convención se distribuyen en cuatro niveles: estas se presentan en forma de pirámide estando en la base las políticas sociales básicas como la educación y la salud, la siguen las políticas de ayuda social (siendo medidas de protección), las políticas correccionales y luego las políticas institucionales que tienen que ver con la organización administrativa y judicial.

Asimismo, desde la nueva ley se define como interés superior del niño/a la máxima satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, logrando el desarrollo integral de su personalidad y sus potencialidades. Para establecer el interés superior del niño/a en una situación concreta se debe

considerar primero su condición como sujeto de derecho, su opinión en todo momento, incluso durante todo el proceso judicial, y la prioridad de sus derechos e intereses frente a otros derechos igualmente legítimos. Desde este marco es que tanto en la Ley Nacional 26.061 como en la Ley 3.062 de la provincia de Santa Cruz, la concepción de Niño se modifica. De ahora en más, el NNA²¹ deja de ser objeto de tutela, para pasar a ser sujeto pleno de derechos, considerando también así en sus necesidades. Además, se hace referencia al interés superior del Niño, lo que significa que las decisiones públicas se tomarán atendiéndolo de forma integral como prioridad. Se hacen explícitas las corresponsabilidades y obligaciones del Estado y la sociedad, además de los padres, tutores u otras personas responsables en asegurar al NNA la protección y el cuidado integral necesarios para su bienestar, destacando que la ley tiene interesantes postulados y propósitos a alcanzar.

A su vez, la ley dispone la creación de la figura del Defensor del Niño, un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional cuya misión es la defensa, promoción y protección de los derechos del niño, frente a hechos, actos u omisiones de la Administración Pública provincial, municipal o de cualquier integrante del Sistema, sin embargo en el país hasta la actualidad no se han designado suficientes Defensores del Niño, tal como es el caso de la provincia de Santa Cruz, donde no se cuenta con tal figura. En el caso de los niños y adolescentes institucionalizados, la desjudicialización de las causas asistenciales se transformó en otro proceso, el de la desinstitucionalización compulsiva.

Sokolovsky y Fazzio destacan que el reemplazo del Patronato por la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes ha permitido poner igualdad jurídica entre ellos, reconociendo su calidad de sujetos (ya no más objetos de tutela), activos y habilitados para ejercer su ciudadanía. Es un sistema de protección integral donde la garantía estatal debe darse para el pleno acceso a las políticas necesarias para el desarrollo de ese niño. Sin embargo, aunque la ley actual tiene este enfoque, se infiere que el paradigma de la Ley del Patronato continúa aun presente en algunas prácticas y concepciones.

Entre las resistencias a terminar con la lógica del Patronato, hay quienes critican este cambio, diciendo que los niños -y hasta los adolescentes- no son víctimas de un contexto socioeconómico desfavorable, sino que por el contrario, están siendo agentes perturbadores que deben ser enfrentados para proteger a la sociedad. Sin embargo, son opiniones aisladas influenciadas tanto por la estigmatización como por el rotulamiento cotidiano que cristalizan al formar opinión los medios de comunicación masiva sobre tales grupos etarios.

La realidad es que los niños que se encuentran en los institutos de menores, atraviesan situaciones que dejan huellas en su identidad mientras se los institucionaliza y "normaliza", necesitando seguir siendo tutelados. Estos niños quedan entrampados en dispositivos institucionales que piensan, sienten, hablan y actúan por ellos bajo el pretexto de protegerlos además de realizar un control social por sobre sus necesidades.

A partir de lo expuesto se considera que la categoría de niñez ha sido construida en referencia a los parámetros de normalidad / anormalidad propios de cada contexto temporal, siendo orientados por el imaginario social.

²¹ NNA: refiere a Niñas, niños y adolescentes y aparecerá con dicha denominación en adelante.

Este proceso atraviesa tanto las categorías de niñez y adolescencia como las de juventud. A pesar de las modificaciones en las categorías usadas para concebir la situación del niño, actualmente coexisten varias de ellas contrapuestas, sobre las que se basa la intervención institucional.

Los NNyA, por mandato social, comienzan –o es la intención- su trayectoria educativa en la familia siendo la escuela la que la complementa. Por lo tanto, la familia y la escuela serían dos contextos próximos en la experiencia diaria de éstos.

Así como los paradigmas que definen a la niñez se modifican, también lo hacen las representaciones relacionadas a la obediencia a la autoridad de los padres, los ideales a cumplir por esos niños y al tipo de lazo que establecen con el otro. Actualmente existe una fragilidad en la aplicación de las normas y en la autoridad de las instituciones, en los ambientes micro y macrosociales. Para Diker (2009) ciertas conceptualizaciones llevan a considerar elementos del contexto como identidad de los sujetos, tomándolos como carácter de atributo: por ello asevera, se esencializa a los sujetos conllevando además etiquetamientos que funcionarían como operación de asignación identitaria -categoría de a autora-.

Según Giberti (1997), los niños desarrollan una legalidad transgresiva relacionada con que el mundo cultural los estimula visual y auditivamente de manera permanente, obstaculizando las construcciones simbólicas a partir de la invasión de las publicidades, la televisión o internet lo que los convierte en consumidores permanentes. Se suma a esta afirmación el uso de las redes sociales, en todos sus formatos, categoría que no ha sido incluida en la descripción de la autora ya que por esos años aún no existían de forma tan masiva ni cotidiana como sucede en nuestros días.

Es por ello que estos niños no dependen ya de pautas brindadas exclusivamente por la escuela, los clubes, la familia o la iglesia, sino que se someten a las indicaciones que ofrecen la televisión y las redes como medios preponderantes. Surgen así nuevos modos de ser niños influenciados por estos medios, potenciado por las redes sociales e internet y por la creciente mercantilización de los bienes y de las relaciones sociales para este grupo, lo cual debilita los espacios públicos de encuentro en lo barrial, formando nuevas identidades en y desde la virtualización.

Son identidades infantiles que sufren un doble proceso: por un lado, son homogeneizadas por la uniformación de la cultura infantil en el proceso de globalización vigente y, por otro, se da una heterogeneización sociocultural ante un niño que vive en un country o barrio privado y aquellos que lo hacen en situación de calle, en asentamientos o barrios populares produciendo así subjetividades diferentes. De todos modos dentro de las relaciones sociales barriales, en palabras de Merklen (2005) sigue siendo el barrio un lugar privilegiado para la organización de solidaridades y cooperaciones, como una fuente de identificación así como también la base de la acción colectiva.

Eva Giberti, por su parte, también plantea que hoy en día hay padres que demuestran no poder hacerse cargo de la crianza de sus hijos, poniéndolo de manifiesto. Estudia la entrega de los niños por no poder criarlos, madres o padres adolescentes, también padres en edad adulta que quieren asumir la crianza de sus hijos, pero no pueden hacerlo debido a la inexistencia de mínimas condiciones materiales de subsistencia. De este modo, la pérdida de calidad de vida evidenciada en el contexto reciente produjo impactos negativos, en especial en los niños y adolescentes, por las condiciones de mayor vulnerabilidad propias de esta etapa del desarrollo, siendo este un proceso

con cambios cualitativos y profundos para el sujeto.

En una definición más general y reciente sobre les niñes y adolescentes, Saintout (2006) centra su análisis en tiempos de desconcierto y ruptura. Destaca que, en líneas generales, éstos presentan un amplio espectro de incertidumbre con respecto a la proyección de futuro. En el marco de la crisis de las instituciones, el aumento de los procesos de individualización, el vaciamiento del sentido de lo público, el desmantelamiento del Estado y una amplia desintegración social es que estos actores no ven claro su horizonte futuro ni canales con oportunidades en su favor.

Se relaciona con ello la denominación utilizada por Eva Giberti al referirse por ejemplo a las “familias empíricas”, es decir, las familias verdaderas, cotidianas, aquellas a las que las instituciones y la sociedad en su conjunto no ven sino sólo a través de un formato apriorístico que designa el cómo “deben ser”. Estas prenociones hacen que se omita analizar las características propias de los jóvenes en las familias y no según los ideales impuestos por los patrones dominantes. Tal como afirma el filósofo Dario Sztajnszrajber (2019) siempre existe un ordenador, un modelo que se impone como universal, por ello propone pensar la familia no en relación con la residencia y el espacio compartido; sino pensarla más allá del parentesco.

La realidad de las familias...ha variado

El ciclo neoliberal, para Antunes (2013) no solo produjo nuevas formas de organización social sino que ha generado modificaciones sustanciales a la clase que vive de su trabajo en tanto su materialidad como en su subjetividad. Esas dimensiones y sus modificaciones constituyen respuestas por parte de sujetos sociales que se traducen en su movimiento cotidiano.

Cazzaniga advierte que en las prácticas profesionales las concepciones sobre la vida familiar “*Suelen constituirse en obstáculos que provienen tanto de los propios prejuicios del trabajador social, como de ciertos “mitos” contruidos desde la cultura disciplinar, que pasan a convertirse en categorías de análisis que suelen no ser revisados en su uso cotidiano*” (Cazzaniga, 2005:96). Por ello, se vuelve conveniente recuperar la historicidad de las familias entendiendo las transformaciones sociales que las enmarcan.

Desde el ejercicio profesional se torna necesario revisar categorías para “*Aprender el movimiento de la familia en cuanto movimiento, históricamente situado, de una totalidad determinada por totalidades de mayor complejidad (la clase, la nación) y determinante de totalidades de menor complejidad (el individuo), en un proceso que, estructural y temporalmente, los términos de las determinaciones se intercambian*” (Netto, 1993:93). Quinteros Velásquez categoriza las diversas formas de ser familia en el concepto de diversidad familiar:

“Variedad de organizaciones familiares y de relaciones de convivencia reconocidas legal o legítimamente en el contexto social, con derechos y deberes a partir de las interacciones que se establecen entre quienes las conforman y el medio, lo que posibilita no hablar de un tipo de familia, sino de una pluralidad de familias. Aumenta en la actualidad, como producto de los movimientos sociales, las condiciones de género, las transiciones de paradigma, la posibilidad que ofrecen las leyes en cuanto al divorcio, la separación y la unión libre, y la presencia de situaciones como el

desplazamiento forzado, las migraciones, el secuestro, las desapariciones forzadas y la posibilidad de asumir una opción sexual diferente a la heterosexualidad. Conlleva la regulación de políticas que contemplen varias alternativas: familias basadas en parejas del mismo sexo, simultáneas, monoparentales sin convivencia en pareja (adopción, procreación asistida) y tener otras alternativas personales en la búsqueda de conformaciones familiares" (Quinteros Velásquez, 2007:47).

Estas nuevas formas que adquieren las familias se oponen tangencialmente a la familia nuclear burguesa disciplinada; ésta formaba parte del primer paso en la producción de ciudadanos, es decir, de normalidades subjetivas. El Estado moderno otorgaba a la institución familia la función de la inscripción temprana en los sujetos de horarios, rutinas, determinación de roles, produciendo para Quinteros Velásquez (2007) un encierro normalizador. La función de la madre era el disciplinamiento, una función "higiénica" y política en constituir la interioridad del hogar como núcleo de pertenencia mientras el padre lo era por delegación estatal, con obligaciones y derechos a él atribuidos.

Jelin (1990) explica las transformaciones que se produjeron en la familia a partir de la revolución industrial. Toma ese momento histórico para demostrar que es a partir de entonces cuando la familia y el trabajo se separan, las mujeres se hacen cargo de las tareas del hogar y los hombres salen a ocuparse de las tareas de producción, fuera del hogar. El hombre es quien participa en el ámbito público desarrollándose con exclusividad en éste mientras que las mujeres "dóviles" y abocadas a la reproducción y el cuidado de los niños, lo hacen en el ámbito privado (el hogar).

Otra separación que demarca la autora tiene que ver con la individuación de los hijos de sus padres, además, la sexualidad también se divide de la procreación, regulando así la fecundidad. Todas estas separaciones, para la autora, implican pérdidas de las funciones de la institución familiar pero no suponen la desaparición de dichas funciones aunque sí su satisfacción exclusiva dentro del seno de ella para hacerse en "espacios alternativos de sociabilidad".

Las investigaciones acerca del pasado de las familias y su constitución marcan una demolición en la creencia de que los hogares han tendido a ser nucleares en los últimos dos siglos. Destacan que, por el contrario, las familias pasan por diversas etapas a lo largo de su historia y que como un acordeón (o como el cauce de un río que se adapta a lo que se le presenta) se agrandan y achican según traspasen las circunstancias que les ocurriesen, pudiendo pasar de ser nucleares, a extensas, ampliadas y nuevamente a nucleares a lo largo de sus vidas.

La socióloga Rosa Geldestein (2011), sostiene un punto central al abordar las cuestiones de familia, esto respecta a que no importa de qué tipo de grupo familiar se trate mientras ejerza las funciones de maternaje y de paternaje. En este mismo sentido, es que el concepto de hogar, en palabras de Jelin y Pereira (1990) debe comprenderse como traductor de domesticidad, describiendo el mantenimiento de lo cotidiano como parte de una organización familiar. A partir de estos postulados se piensa que la misma no es un conjunto indiferenciado de individuos, sino que es una organización social de negociaciones, un microcosmos de relaciones de producción, de distribución, con una estructura de poder y organización que ayudan a su persistencia y reproducción, pero donde también hay bases estructurales de conflicto y lucha.

Los principios básicos de la organización familiar interna se rigen según diferenciaciones de edad, sexo y parentesco. En el contexto ideológico del capitalismo patriarcal les hijos se deben subordinar a sus padres, a quienes les obedecen con obligación de colaborar, manteniendo y marcando así la autoridad paterna.

Existe a su vez en las mujeres una tendencia a convertirse en madres a temprana edad, lo cual implica una mayor vulnerabilidad de ellas y sus hijos. Los proyectos educativos personales tienden a interrumpirse teniendo estas mujeres más probabilidades de tener una fecundidad más alta, de ser jefas de hogar a cargo de sus hijos y de encontrarse en situaciones de precariedad e incertidumbre.

Elizabeth Jelin (1990) señala ciertos indicadores, además, de la transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad y la precariedad: las mujeres que inician su maternidad a edades tempranas a menudo provienen de familias donde ésta ha sido una práctica preexistente.

Por otro lado, en contextos de crisis, la cuestión habitacional se complejiza, en donde el hábitat urbano se considera caro por falta/ falla en políticas sociales de vivienda, las nuevas parejas tienden a demorar su formación y comparten la vivienda con sus padres. Así se expresa una posible tendencia (sólo en este aspecto) a la nuclearización del hogar, por el hecho de compartir terrenos con unidades de vivienda independientes, pero con una cotidianeidad compartida. Asimismo además del caso de las madres solas, hay un aumento de las separaciones, divorcios y de intervenciones judiciales por denuncias de violencia de género con exclusión del hogar, volcándose las mujeres a la crianza monoparental. La familia nuclear²², para Jelin (1990), idealizada como modelo normativo por las instituciones y la sociedad en su conjunto, denota una fuerte ideología familiarista donde la consanguineidad y el parentesco son criterios básicos para las responsabilidades y las obligaciones hacia los otros. Al ser una institución formadora de futuras generaciones, la familia es en este sentido una instancia mediadora entre la estructura social en un momento histórico dado y el futuro de dicha estructura. El ambiente familiar puede actuar en ambas direcciones según sea el caso, cuando se transmiten privilegios, cuando se transmiten cuidados y responsabilidades o cuando lo que se transmite es maltrato y vulnerabilidad.

La familia es un espacio paradójico, en palabras de la autora, debido a que es el lugar del afecto y la intimidad, pero también puede ser lugar de agresiones, des tratos y violencia mantenidos en silencio. Para el bienestar físico, psicológico y social, el sujeto requiere participar en redes sociales comunitarias que lo contengan, canalicen la afectividad, en las que vuelque la capacidad de la solidaridad y responsabilidad hacia el otro; redes que confieran identidad y sentido al sujeto ante un panorama de políticas regresivas con fragilidad y limitación en los vínculos familiares. Considerando las diversas formas de familia, Giberti plantea:

²² En las definiciones tradicionales, las familias son formadas por variables de verticalidad (lazos consanguíneos) y horizontalidad (vínculos afectivos). Aparecen la familia de origen, la ensamblada y la extensa. Las familias como emergentes de factores socio económicos, y dejando profundas huellas en las personas. La desintegración de la familia, por otro lado, se da ante una tendencia al imaginario social de familia ideal (instituido), siguiendo los valores hegemónicos de lo “normal” del modelo eurocéntrico. Hay distintas formas de ser familia, se deben interpretar sus trayectos, viendo los referentes que sean significativos para el niño más allá de intentar cubrir cupo materno y paterno, cuando no necesariamente se refleje en estas figuras el desenvolvimiento de dichas funciones. Las políticas públicas, asimismo, mantienen un modelo hegemónico, estereotipado y tradicional de familia.

"A este registro de lo diferente asistimos actualmente advirtiéndolo que más allá de defenderlo o denigrarlo ya no resulta sencillo referirse a la familia como si todos pudiésemos entender lo mismo. Parecería prudente empezar a hablar de "lo familia" como una alternativa que permita neutralizar el mensaje monádico, unitario, hegemónico que prescribe el artículo la (indicativo de un modo inajenable, cristalizado, inamovible, e intolerante)" (Giberti, 1994:140).

La vida familiar está expuesta a las influencias de un contexto social cambiante (A. Harven 1978) y la familia, como todo grupo humano, es un sistema en el cual las personas interactúan de manera solidaria motivadas por el bien común pero también orientadas por intereses y necesidades personales que pueden entrar en conflicto, agrega Jelin que *"La realidad de la dinámica familiar registra, entonces, diferencias, interrupciones o cambios de dirección respecto de aquella trayectoria esperada"* (Giberti, 1994: 77).

Wainerman (1994) expone que hay diversas imágenes históricas, distintos ejemplos de familias que atravesaron diferentes problemáticas, sin dejar de lado su sentido de seguridad y núcleo primigenio. Para UNICEF:

"La familia es el entorno donde, por excelencia, se debe dar el desarrollo integral de las personas, especialmente el de las niñas y niños. Las políticas y programas que apoya Unicef en los países de la región deben, cada vez más, hacer explícito el propósito de trabajar con la familia y para la familia, para apoyarla y fortalecerla en su papel de protectora del niño y de la niña, así como en el ámbito para que logren su desarrollo pleno" (UNICEF 1993).

A pesar de estos postulados las realidades de las familias se hallan inmersas en posiciones desiguales ante un mundo de profundas desigualdades, crecientes marginaciones y permanentes violencias de todo tipo. UNICEF también plantea que:

"Las familias representan mucho más que cuidado y apoyo mutuo. Para muchos de nosotros constituyen el espacio en el que realizamos nuestras más profundas experiencias humanas. Intimidad y pasión, identidad e individualidad, conexión con el pasado y la creencia sobre el futuro, todo deriva de ese pequeño pasado y la creencia sobre el futuro, todo deriva de ese pequeño nexo. Porque los más profundos sentimientos humanos tienen su fuente en la familia, lo mejor (amor, compasión, crecimiento) y lo peor (destrucción intencionada, violencia, incesto, etc.) tienen lugar en ella" (UNICEF 1993 b).

Esto último es una realidad no tan idílica -proveniente del amor romántico-, ya que en ese interior también se pueden reproducir las desigualdades de género, relaciones de poder, el maltrato en sus diversas expresiones, el sometimiento, la subestimación, el autoritarismo, el abuso en distintas modalidades y prácticas que no preservan el cuidado integral, a diferencia del planteo de Unicef que generaliza el acompañamiento y el cuidado, ante todo.

Como se viene haciendo referencia, a comienzos del siglo XXI se vivió una crisis institucional que se manifestó en un gran descreimiento de las instituciones en general. Actualmente los interrogantes que se dan en los estudios sociales se preguntan si la familia está en crisis, si la familia desaparece o si la familia se transforma y cuál

será el futuro de esta. A su vez, pensar la reproducción social de la familia es fundamental para comprender la reproducción de la fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva las prácticas de los sujetos estarán condicionadas por la situación estructural que los rodea y configuradas de un modo singular según sea el universo particular de sus significaciones; desde el accionar cotidiano las familias en su interior recrean: relaciones de género y de autoridad entre estos, elementos culturales y afectivos.

La circulación y magnificación de lo que se dice acerca de cómo “debe ser” una familia incorpora los comentarios personales sustentados por experiencias y deseos, compaginando un campo discursivo con un tinte subjetivo. Entonces aparecen modelos que se “desvían de la norma” pudiendo utilizarse diversas categorías como ser: hija/o de sangre, verdadero nieto/a, medio hermano/a, matrimonios ensamblados, parejas solas, mamá postiza, entre otros. Así la familia es concebida como un fenómeno natural, insustituible y ordenado de acuerdo con “leyes naturales” es decir a partir de la concepción biológica, pero la familia contemporánea debería ser adaptada a las nuevas configuraciones emergentes. Las familias no tradicionales no son necesariamente inestables o “disfuncionales” por apartarse del modelo nuclear tradicional preestablecido. El ejercicio de las funciones de maternaje o paternaje, entonces, sería lo que necesita el sujeto para desarrollarse óptimamente durante su socialización, sea del tipo y composición de familia que sea.

En su planteo, Wainerman y Geldestein (1994) proponen ampliar las formas de pensar la familia o las familias a fin de hacer en la imaginación colectiva el espacio que ocupan en la realidad actual. En cuanto a los niños y adolescentes, las formas de vivir en familia difieren marcadamente entre los diferentes estratos de la población. La población de menores ingresos es la que organiza su vida cotidiana “en familia” mientras que, por el contrario, la de mayor ingreso se inclina hacia la individuación.

Según Gianna y Mallardi (2016) en las sociedades capitalistas, en el marco de las responsabilidades depositadas a las familias para la reproducción social, le corresponde a éstas garantizar el proceso de construcción de la identidad, de subjetividad, como espacio de sociabilización primaria (Barg, 2003). Por ello, como afirma De Jong (2001), cada familia en sus prácticas cotidianas vehiculiza normas, valores y sistemas sociales de representación, desde donde construye su mundo, sus modos de interacción, que le dan sentido y un modo de entender el cotidiano. La transmisión del saber cotidiano, entonces, se torna importante para la reproducción social, existiendo en cada sociedad portadores y responsables del mismo. Sobre este aspecto Torrado afirma que,

“Puesto que de esta institución depende la reproducción biológica, la preservación y perpetuación del orden social, cultural y económico, así como la gestión de la reproducción de la fuerza de trabajo, muchos y potentes mecanismos sociales y políticos se ponen en marcha en cada situación concreta para asegurar dicho control”
(Torrado, 2003:127).

En consecuencia, Gianna y Mallardi expresan que la familia no puede ser pensada, en su espacio cotidiano, aislada de las necesidades de la reproducción social. Los alcances del saber cotidiano se dan a partir de la ubicación

del sujeto en la estructura social, con las particularidades de las sociedades en la que se inserte, apropiándose de diversos conocimientos para configurar el saber cotidiano. Para Heller (1977) en las sociedades complejas surgió la necesidad de elaborar líneas directrices fundamentales para que sean interiorizadas y aplicadas en las distintas esferas de la vida cotidiana ante necesidades materiales y simbólicas -las cuales son sociales teniendo relación directa con un momento contextual e histórico particular- en un modelo de producción determinado. Para Gianna y Mallardi es mediante la moral ²³, entonces, que las motivaciones particulares se someten a las exigencias de tipo social. En este marco, las relaciones familiares constituyen el espacio propicio para la reproducción de valores y estereotipos vinculados a la dominación patriarcal, atravesando las relaciones cotidianas en general y las de poder en particular.

Como se ha mencionado, en el modo de producción capitalista, la vida de los sujetos se vincula fundamentalmente a su carácter de ser o no poseedor de la fuerza de trabajo, por lo que las otras dimensiones de la vida cotidiana adquieren un significado social e histórico particular en torno a esa determinación. Así, el sujeto es sujeto trabajador y todas las demás dimensiones de su ser quedan negadas o reducidas a la mínima expresión. El acceso, o no, a una determinada prestación o a un servicio social particular se asocia, generalmente, a la posibilidad o imposibilidad de acceder al mismo mediante la lógica mercantil. Quien no logra hacerlo, debe afrontar procedimientos institucionales y profesionales de control, fiscalización y disciplinamiento. Para De Martino (2001) existe una tendencia a la familiarización de los problemas sociales, es decir, una transferencia de responsabilidades hacia las familias haciendo de éstas una unidad económica y política, socia del Estado, para el control de la vida cotidiana.

En este sentido, controlar la vida cotidiana de las organizaciones familiares implica poder clasificarlas, describirlas y caracterizarlas según categorías o marcos clasificatorios estandarizados. Para los autores,

“Fiscalizar la pobreza, para la lógica burguesa imperante, es demostrar que el sujeto que requiere de la intervención profesional no puede afrontar determinadas situaciones por sus propios medios, que se ha esforzado por hacerlo mediante la inserción en el mundo del trabajo y que, de no poder hacerlo, el esfuerzo realizado justifica el accionar profesional y/o institucional. Fiscalizar la pobreza, para un Trabajo Social conservador y disciplinador, implica aproximarse a la vida cotidiana de las unidades familiares procurando identificar las fallas o disfuncionalidades individuales o familiares que explican la situación problemática atendida” (Gianna y Mallardi, 2016:97).

Retomando a De Jong se debe comprender el mundo material de la familia y el mundo subjetivo constituido por representaciones y además por pensamiento formando parte de una realidad en movimiento, en sus palabras:

²³ Barroco afirma que: “La moral se origina del desarrollo de la sociabilidad; responde a la necesidad práctica del establecimiento de determinadas normas y deberes, tomando en cuenta la socialización y la convivencia social. Forma parte del proceso de socialización de los individuos, reproduciéndose a través del hábito y expresando valores y principios socioculturales dominantes en una determinada época histórica” (Barroco, 2004: 59).

“Cambia la familia, cambia el contexto, cambian las representaciones, por lo tanto la identidad subjetiva individual y la identidad familiar no son inmutables; esto no quiere decir que no esté condicionada por modelos socio-culturales hegemónicos respecto al deber ser familiar en la sociedad, modelos que no son estáticos pero se imponen socialmente desde las exigencias materiales y desde los constructos sociales simbólicos (...) las representaciones de la familia como parte del pensamiento no existen sin la materialidad familiar y ésta no existe sin sus representaciones” (De Jong y otros, 2010:17).

Es preciso entender el cotidiano de las unidades familiares, sus trayectorias, con determinantes sociales, económicos, políticos e ideológicos, visibilizar las estrategias familiares de vida, con sus lógicas y fundamentos, ante la necesidad ética y política de desnaturalizar el impacto de las desigualdades en la vida cotidiana de amplios sectores de la sociedad.

Los comportamientos de la expulsión²⁴

“No hay historia muda”
Eduardo Galeano

Según Touraine (1999) a principios de los '80 se produce una modificación en el funcionamiento de las sociedades occidentales ya que anteriormente las diferencias sociales se basaban en una oposición vertical, en términos de clase, mientras que actualmente la estructura es horizontal: siendo los incluidos en el mercado laboral, que se sitúan en el centro del sistema, y los excluidos del mundo laboral quienes están en la periferia. A diferencia del concepto de pobreza, la exclusión social se genera como la consecuencia de un retroceso de una situación anterior, ese retroceso es provocado por mecanismos estructurales que dificultan al sujeto su plena participación en los procesos sociales. Ante estos argumentos, se evidencian distintas posturas teóricas -que coinciden en señalar el origen estructural de la exclusión- por ser no un efecto sino una condición necesaria para el funcionamiento del neoliberalismo, por lo cual la naturalización de su existencia les resulta en cierto modo constitutiva.

A partir de esta explicación es que se elige el concepto de expulsión (Duschatzky y Corea, 2002)-, para comprender que hay todo un sistema orientado por fines que no son puestos en discusión ni mucho menos hechos manifiesto. La expulsión se expresa y se refuerza por medio de la segregación en el espacio territorial otorgándole a los sujetos una existencia al margen del conjunto de la sociedad. Existen o no, y ello no afecta al resto de la reproducción del todo, siendo que se los considera como que “están de más”, como se ha hecho mención. Muchos niños crecen en medios familiares donde hay ciertas configuraciones sociales en donde domina la angustia, la inestabilidad, el miedo y la ausencia de porvenir por toda esta incertidumbre.

²⁴ Para Alías y Sánchez (2013), la exclusión es un proceso generado como resultado de una cadena de acontecimientos dados por desigualdades sociales y económicas, una acumulación multifactorial (factores de riesgo económicos, laborales, relacionales, socio sanitarios, de participación y ciudadanía) o déficits que se interrelacionan y retroalimentan. Para no sobrecargar al sujeto de su condición material en la estructura, se considera que es una condición de expulsión la que atraviesa. TSGlobal. Revista de Investigaciones en Intervención Social. Vol. 3, nº4. junio 2013, 133-156, Universidad de Granada.

Escudero, plantea que estos sujetos son parte de un sistema de privaciones, pudiendo estar así empujados por su materialidad a hacer cosas que si tuvieran la opción no las harían. Esto forma parte de un análisis holístico en cuanto a los sujetos sociales y su medio visto como totalidad (aunque sectores conservadores podrán sostener posturas desde la lógica positivista y biologicista para las cuales, los pobres tienen “algo innato” (que los llevaría a cometer delitos) retornando a pensamientos lineales y deterministas de los antiguos paradigmas previamente descriptos. Para Duschatzky y Corea entonces:

“Mujeres y niños comparten, en el lazo burgués el mismo lugar: el de excluidos del lazo. Sin embargo, esa exclusión es radicalmente distinta del mecanismo de expulsión actual. La exclusión de mujeres y niños es una exclusión representada: las mujeres son madres guardianas del hogar, los niños son los hombres del mañana. La mujer y el niño están excluidos pero instituidos como tales. Es decir, la subjetividad niño o la subjetividad mujer en el mundo burgués es un término del universo discursivo, respecto del cual hay trabajo de significación, producción discursiva y práctica” (Duschatzky y Corea, 2002:59).

Es a partir de esta mirada que se enuncia un agotamiento de la figura paterna, de la relación paternofilial como función de nominación e inscripción simbólica de los sujetos, de la figura de poder detentado en torno a la autoridad, el saber y la ley.

Asistimos a un agotamiento de la potencia instituyente del Estado-nación, como se ha hecho referencia, con una incapacidad estatal para producir instancias legítimas de enunciación y ejercicio de la ley, siendo que no hay legalidad estatal jurídica que produzca una autoridad simbólica donde se construyan semejantes.

La institución del semejante requiere operaciones discursivas para construirlo, siendo producto de una educación moral que se oriente a la coacción. Es la ley la que, a partir de instituir un principio de legalidad basado en la formulación de la igualdad, habilita la construcción de un semejante. Sin ser este una construcción espontánea que nace de un vínculo, cuando la ley simbólica en tanto límite y posibilidad no opera, el semejante no se configura.

El semejante era crear un sujeto educado, mientras que los que no lo eran (vago, indigente, vicioso, inculto) eran encerrados o reeducados. La educación pretendía crear la categoría del semejante como utopía universalizadora siendo el Estado-nación mediante instituciones, como familia y escuela, los principales agentes como dispositivos fundantes de la moralidad del sujeto tal como se explicitó ut supra.

En palabras de Duschatzky y Corea la exclusión pone el acento en un estado, que significa estar por fuera del orden social, pero no supone referirse a las condiciones productoras de ello. Afirman:

“La exclusión nos habla de un estado en el que se encuentra el sujeto. La idea de expulsión social, en cambio, refiere la relación entre ese estado de exclusión y lo que lo hizo posible. Mientras el excluido es meramente un producto, un dato, un resultado de la “imposibilidad” de integración, es el expulsado resultado de una operación social, una producción tiene un carácter móvil” (...) la expulsión, considerada como una serie de operaciones, nos da la oportunidad de ver un funcionamiento, la producción en la situación del expulsado. La expulsión social, entonces, más

que denominar un estado cristalizado por fuera, nombra un modo de constitución de lo social. Un nuevo orden mundial necesita de los integrados y de los expulsados. Estos ya no serían una disfunción de la globalización, una falla, sino un modo constitutivo de lo social” (Duschatzky y Corea, 2002:18).

Sumado a este argumento, sostienen que el expulsado pierde visibilidad, pierde nombre siendo un “nuda vida”, entrando en un universo de indiferencia. Este concepto de Walter Benjamín y recuperado por Giorgio Agamben, consiste en que *“Un ser nuda vida es un ser al que se le han consumido sus potencias, sus posibilidades, Nuda vida es un ser absolutamente determinado, privado de realizar formas múltiples”* (citado en Agamben, 2002:19).

Esta categoría destaca las condiciones sociales productoras de la expulsión como indicadores: falta de trabajo, estrategias de supervivencia que podrían rozar la ilegalidad, la violencia, la escolaridad precarizada, una disolución de vínculos familiares, la prostitución en corta edad, un consumo problemático de sustancias, entre otros. Estas serían determinaciones, actos y hechos que no hablan de los sujetos, pero hablan de los modos de significación de las relaciones sociales y las valoraciones construidas.

El Estado social, que se describió anteriormente, ante estas y otras circunstancias tiende a ser reemplazado por el Estado penal, frente a conductas que no respetan las normas, conductas que *“Traducen rebeldía, desesperación o impotencia”* (Duschatzky y Corea, 2002:21). De este modo, las intervenciones desarrolladas por el Estado no responden adecuadamente a ellas, siendo muchas veces las propias instituciones las que generan violencia discursiva. Esto ocurre debido a que la misma violencia a la que responden las instituciones genera actitudes y comportamientos violentos de manera directa y con hábitos agresivos. En este sentido se produce un círculo vicioso frente al cual se cree que se lo contrarresta empleando medidas punitivas, represivas y de control acompañados de violencias en el tinte discursivo.

Las formas de expulsión y de precarización laboral, la sensación de inestabilidad, la falta de apoyo, la falta de diálogo, el caos permanente, el trabajo infantil, la falta de inclusión en el sistema educativo, la falta de servicios, la falta de acceso a condiciones de vivienda dignas, el desempleo prolongado, la segregación de sectores de la sociedad, las carencias, la recepción del rechazo constante ante una solicitud aportan a generar personalidades con comportamientos de vulnerabilidad: generan impotencia, enfermedades, incertidumbre y una *“destrucción de las defensas psicológicas”* asociada con la desorganización de la conducta y de la subjetividad.

También es fundamental poder comprender que quien vivencia el proceso de expulsión adopta -y se le son adjudicados por el mismo sistema- sentimientos de culpa por su situación problemática además de perplejidad plena. Es ésta una culpa constante sobre su realidad, sirviendo a su vez como instrumento de dominación, y formando parte de un complejo disciplinamiento social para naturalizar y neutralizar su situación sin generar ningún tipo de cuestionamiento hacia ella, favoreciendo así las condiciones para la reproducción del capital. Asimismo, cuando el sujeto se empobrece, también sucede que las redes vinculares se desgastan (siendo que éstas se mantienen por la materialidad que las sustenta) y que sus problemas lo fragmentan en su condición como ser social en territorio. Se considera además, la conceptualización que realiza Merklen (2010) sobre la inscripción territorial, la cual supone una

estrategia frente a aquellos procesos que los expulsa, o por los cuales resultan fragmentados y vulnerados sus derechos. El territorio, siendo más que una cuestión geográfica o espacial, se constituye como espacio multidimensional de lucha, tensión y conflicto, por lo cual será éste clave en la redefinición de políticas públicas ante una reproducción incesante del capital.

Para Kessler (1995), las causas estructurales del desempleo son económicas, sociales, políticas y culturales, el desamparo proviene del sistema neoliberal, el cual produce un brusco aumento del desempleo generando a la vez procesos de auto estigmatización en ese sujeto desocupado, es decir, un sentimiento de auto culpabilización. Minujin y Kessler (1995) sostienen que las nuevas familias empobrecidas enfrentan los siguientes riesgos en la salud: el aumento de la anemia, el consumo de drogas ilegales, el insomnio, el uso del cigarrillo y el alcohol, la auto medicación, el auto diagnóstico convirtiéndose en sujetos usuarios de múltiples políticas sociales, servicios y prestaciones.

Según Torres (2007) desde el aspecto educacional, la educación que necesitan las personas en situación de pobreza debe ser una mejor educación en vez de una educación mejorada, en donde el problema no sea resuelto con políticas compensatorias ni de “equidad” sino estructurales, con un Estado garante que tenga intervención directa en el asunto planteado. La “culpa” de la repitencia y de la deserción escolar se aclara, no es del sujeto, existiendo allí otros elementos más complejos y multi dimensionales atendiendo a la influencia de las condiciones del medio inmediato; las condiciones de accesibilidad y por sobre todo de permanencia en dicho espacio.

Cabe repensar la noción de deserción o abandono del sistema educativo cuando pareciera ser una “elección” de los alumnos y no se reconsidera si es el mismo sistema educativo con sus instituciones -afianzándose en los mecanismos instituidos-, el que lo expulsan del sistema.

Desde este ámbito Sileoni (2005) afirma que la pobreza y su influencia se acompañan de dificultades o limitaciones en la inserción y la permanencia de los niños y jóvenes en el espacio educativo. Primero porque pueden no ir los más chicos de la casa a la institución porque sus padres trabajan haciendo changas o tareas de subsistencia (falta de escolaridad), debiéndose hacerse cargo de los hermanos más chicos (infantes “adultos”), no asistiendo tampoco por no tener las mínimas condiciones materiales (desde las nutricionales hasta la falta de útiles o calzado); además de una posible incorporación a temprana edad al mercado laboral así como por la falta de curiosidad y motivación llamada “anorexia intelectual”.

Describe que en referencia a los cambios en el sistema escolar *“La masificación y el cambio en la morfología social de los alumnos han producido una especie de terremoto en las prácticas escolares, en las identidades y subjetividades de los protagonistas (docentes alumnos y demás) y en el sentido de la misma experiencia escolar”* (Sileoni, 2005:81). Frente a profundas transformaciones sociales el sistema escolar cuenta con otra población, con otras motivaciones, necesidades, intereses, expectativas, experiencias e historias de vida. La escuela ha tenido una imagen típica del alumno ideal, el esperado, quien ingresaba a la escuela a los 6 años de edad, incorporándose con interés, sin preocupaciones “de adultos”, motivados por aprender acompañado, a su vez, por el propio incentivo de sus padres y con sus necesidades básicas satisfechas.

Este alumno/a, niño, debía mantener un comportamiento correcto, ser puntual, tener contención afectiva,

buena alimentación en su casa (pensada de material sólido y con servicios públicos esenciales), aseo personal, cumplir con sus deberes (que se presuponían serían realizadas en sus hogares, éstos conformados por un modelo de familia tradicional: padres, hermanos, perro y automóvil), cumpliendo horarios típicos, completando todas las comidas, accediendo a la institución con los medios “adecuados” y demás. La institución escolar, entonces, atribuía a la familia el cumplimiento de esos requisitos y a su vez las familias eran conscientes de cuál era su responsabilidad moral específica en esta división del trabajo: mantener y consolidar un modelo social y normativo pautado para sí.

Actualmente la situación ha cambiado: hay una fragmentación de la oferta escolar, la composición de las aulas es otra, el alumnado esperado es otro (pudiendo haber prejuicios de parte de los docentes), los contenidos, aspectos, ideas, aspiraciones, intereses, realidades y necesidades son otros. Tanto el alumnado como los docentes y el mismo ámbito escolar se han ido modificando a la par de las mutaciones económico sociales sufridas en los últimos 40 años, modificándose las trayectorias escolares y las experiencias de vida, las condiciones de sobrecarga horaria, la precariedad laboral en los docentes muchas veces reflejadas en el pluriempleo. Estas situaciones descriptas son algunas formas donde se configura la lógica de expulsión en sus diversos panoramas.

Ser migrante en la Patagonia: al sur del sur

Un rasgo característico que se observa en las familias que componen la región patagónica, y principalmente en la provincia de Santa Cruz tiene que ver con la migración permanente -como último recurso - para mejorar las condiciones materiales de existencia. A lo largo de su análisis, Rincón Gamba (2011) sostiene que existe una clasificación no sólo en Santa Cruz sino en todas las provincias patagónicas, donde se utiliza la noción de “nyc”²⁵ (nacidos y criados) con un sentido de reivindicación de una identidad sostenida por el nacimiento en el territorio, para marcar diferencias con las personas de otras provincias o países que llegan a vivir a provincias del sur argentino, lo que deriva en la creencia de mantener derechos diferenciados.

Así es como las diversas colectividades de inmigrantes han arribado a zonas despobladas y con fuerte intervención por parte del Estado. Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, tal como marca Rincón Gamba, la idea de los “venidos” estaba presente con los chilenos que iban a Santa Cruz para la zafra, y regresaban a sus tierras; luego eso va mutando ante los hijos de inmigrantes ya nacidos en territorio santacruceño.

Los procesos contemporáneos, entonces, son resignificados en función de un nuevo contexto y de nuevas necesidades, como territorio de pertenencia que se englobaría bajo cierta calificación. Para la autora quienes se incorporan a la Patagonia como lugar de pertenencia asumen las grandes distancias, el aislamiento, el clima (viento y frío), la soledad, la escasez de servicios recreativos y de esparcimiento, entre otros, como elementos característicos de éste territorio inhóspito. Desde su análisis, esto tiende a resaltarse como una condición de sufrimiento y esfuerzo.

²⁵ Un dato para destacar es que se observan grupos en redes sociales titulados “yo soy patagónico y nyc”, esgrimiendo tener mayores “atributos” por sobre otros habitantes del interior patagónico.

El Estado en esta línea, es el que construye identidad territorial a partir de discursos y políticas que tienden a desarrollar un sentimiento de pertenencia a una comunidad política. La ubicación de los sujetos en uno de esos ámbitos para definir el territorio de pertenencia de los 'nacidos y criados' no implica necesariamente la negación de los otros territorios, pero sí la reivindicación y visibilización de ciertos actores y procesos: el "del norte", "el que llega", es un enemigo en cuanto competencia laboral, visto como soberbio y hasta responsable de delitos, "que se vuelvan a su provincia si no les gusta" como parte de prejuiciosas adjetivaciones colectivas.

Asimismo, los límites en el espacio físico que definen el territorio de pertenencia de los "nacidos y criados", son dinámicos y relativos. Estos van variando ya que los trabajos esporádicos y las changas informales hacen que se instalen muchas personas en busca de modificar su situación económica- laboral previa, sin importar en qué condiciones habitacionales se lo haga. Valdemarín (2005) expresa en un estudio sobre las posiciones migrantes en la localidad de Puerto San Julián y se pregunta alrededor del uso político y la utilidad que tiene para los gobernantes construir estas divisiones entre la población a partir de la condición de nyc o no nyc. Traduce ello en conveniencia política (electoral- partidaria), en construir límites y convertir el espacio geográfico en territorios de administración política.

Cabe destacar que, los pobladores que llegaron a comienzos de siglo pasado a la provincia era un poblamiento "blanco" y de migraciones internas. La Patagonia argentina en 1920 era:

"Una tierra argentina trabajada por peones chilenos y explotada por un grupo de latifundistas y comerciantes (...). Los chilotes son esa gente oscura, sin nombre; rotos que nacieron para agachar el lomo, para no tener nunca un peso. Trabajan para poder comprar alcohol y algún regalito para sus mujeres. Ésa es toda su aspiración en la vida. Son la antítesis de los que han venido a la Patagonia a jugarse el todo por el todo con un fin: enriquecerse, "progresar". Ésa es la diferencia: unos han mamado la resignación o indiferencia desde chicos. Los otros son dominados por una única pasión, también natural en aquellos medios inhóspitos: la ambición"(Bayer Osvaldo, 2007: 11-12).

Desde el recorrido histórico se analiza que para los migrantes extranjeros e internos que llegaron después del poblamiento inicial asentándose en Santa Cruz, no han gozado el mismo estatus que los "pioneros". La reflexión de las investigadoras apunta a que cuando llegaron el territorio ya estaba habitado por sus antecesores. En nominaciones históricas, dicha invisibilización, y en ciertos casos deslegitimación, de múltiples sujetos autónomos que han ido contribuyendo al proceso de construcción territorial de Santa Cruz, refleja que la identidad territorial localizada de los nativos busca reivindicar -explícita e implícitamente- la condición de inmigrantes europeos con capital (o es al menos como pretende destacarlos).

Lo que sucede con los pobladores que quieren asentarse es que existe una continua tensión por el acceso a los recursos en el territorio. Esto muestra una apertura de Santa Cruz y a la vez una conflictividad propia de los procesos de configuración territorial, lo que no niega la existencia de un arraigo histórico-cultural de los nativos de esta provincia. El hecho del nacimiento en Santa Cruz, la permanencia física en el territorio y la red de parentescos que

tienen en la provincia, son condiciones que implican una identificación territorial, generando afectos, lazos y conocimientos profundos del lugar. Por su parte, quienes se encuentren recién llegados no siempre construyen necesariamente un sentido de pertenencia.

Se puede evidenciar una invisibilización de otros procesos que ocurren de manera simultánea y articulada en cuanto a las discriminaciones por los lugares de origen. Tal invisibilización desconoce el carácter heterogéneo, multitemporal, abierto, dinámico de los movimientos poblacionales. Además, la apropiación de territorios y sus usos también generan espacios de intercambio y conflicto en las comunidades, según sean las estrategias de lucha de estos actores sociales que actúan en el territorio.

Además del aspecto migratorio y la lucha por - y para - el territorio, hay un punto por analizar en referencia al espacio que ocupan las organizaciones familiares que no responden a criterios de normalidad, fijados y consolidados desde los parámetros del “sentido común”. Estas familias que no se “amoldan” ni “adaptan” a los cánones convencionales en sus modos de “ser familia” no son pensadas como parte de un todo, de un espacio en común por lo que son segregadas y destinadas a ser contenidas desde un sistema diferencial: el sistema penal. Siguiendo estas líneas, Wacquant (2012) explica la regulación de la pobreza en el neoliberalismo, pone énfasis en la idea de territorialidad en las transformaciones familiares actuales, como las que se fueron mencionado.

En contexto neoliberal, la policía, los tribunales y las penitenciarías, son un refuerzo del Estado penal dando respuesta a la “inseguridad social”, asociando la mano invisible del mercado a dicho Estado.

Actualmente no se puede entender la política penal sin tener en cuenta la política social y viceversa, entendiendo que las tendencias delictivas deben ser analizadas a la luz de los cambios en las asistencias gubernamentales, el cambio de modelo de Estado, la vivienda pública, el desempleo, la intervención social y los programas estatales, la desatención a la población migrante en situación de irregularidad, que establece un universo posible de opciones de la población más expuesta al delito, ya sea como responsables o como víctimas. Asimismo, las políticas de empleo y las penales forman parte configurativa de un Estado neoliberal.

Argumenta el autor que Estado y mercado son descriptos como entidades antagónicas, pero el dominio del mercado necesita de sólidos dispositivos institucionales que lo sostengan u apoyen siendo el aparato penitenciario uno de ellos. De este modo Wacquant sostiene que *“La criminalización de la pobreza fragmenta a la ciudadanía a lo largo de las diversas estructuras de clase, mina la confianza cívica de las capas más bajas y anticipa la degradación de los principios republicanos”*(Wacquant, 2012:7), para el autor, el neoliberalismo es corrosivo de la democracia.

En el próximo apartado, se tratan las categorías de vida cotidiana y vulnerabilidad, como centrales en el ejercicio profesional del Trabajo Social que trabaja con organizaciones familiares, sujetos sociales, colectivos y comunidades.

Vida cotidiana y vulnerabilidad: categorías para comprender a los sujetos desde el Trabajo Social

“De la crítica de la realidad en nombre del progreso, del futuro, de las posibilidades reprimidas, el pensamiento burgués se transforma en una justificación teórica de lo existente”

Coutinho, 1972

El trabajo cotidiano de los profesionales del Trabajo Social abarca problemáticas complejas con múltiples determinaciones, considerando oportuna esta investigación como aporte al ejercicio profesional y al abordaje de problemáticas sociales desde, puntualmente, el ámbito socio-jurídico.

Estamos determinados por la historia, por el modo de producción y las relaciones sociales en un contexto general y particular. Las necesidades, así, tienen que ver con un momento y un contexto determinado cuyo gran marco es la historia, no siendo universales sino que han de ser necesidades particulares. El hombre es un sujeto de necesidades, las cuales solo se satisfacen socialmente -aunque el capitalismo promete que con el dinero no se necesita de un “otro”-. El hombre transforma la realidad como productor y se transforma a sí mismo siendo producido a su vez por su vida cotidiana, por un contexto particular que lo enmarca.

La vida cotidiana, siguiendo este argumento, es fermento de la historia. Agnes Heller (1977), expresa que la vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción del hombre particular, como sujeto protagonista, que está en relación con otros y construye relaciones sociales. Se deben comprender sus condiciones concretas ya que la vida cotidiana es mediadora entre la naturabilidad y la sociabilidad de tales sujetos. Es su mundo, como ambiente inmediato, en el que construye las formas de desarrollarse frente a las condiciones particulares en las que se presenta ese ambiente, constituyéndose en su inmediato según el lugar que ocupe en la división social del trabajo.

Ana Quiroga (1986) explica que la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y por ello tiene el significado subjetivo de un mundo coherente para sí, mientras que en la conciencia aparecen diversos objetos como constitutivos de esta realidad, evitando así que se naturalice lo social, se universalice lo particular y se atemporalice lo histórico.

Para Lefevre (1972), la vida cotidiana mantiene un espacio (espacio de la vida) como construcción social, un tiempo (tiempo social), una pluralidad de sentidos (polifonía de voces), una significación simbólica y las prácticas sociales como praxis (práctica creadora).

Lukács (1966) caracteriza la vida cotidiana como insuprimible, sin poder ser eliminada, sin escindirse de lo histórico por ser uno de sus niveles constitutivos. Dentro de sus determinaciones fundamentales se encuentra su heterogeneidad, su inmediatez y la superficialidad extensiva donde los sujetos no consideran las relaciones que

vinculan sus acciones, por ende, estas determinaciones hacen que los individuos sí se perciban cómo seres singulares (Netto, 2012). Plantea Mallardi que *“En la vida cotidiana como espacio de condensación de vectores múltiples y dinámicos cómo dice Barroco, la vida cotidiana es el campo privilegiado de la reproducción de la alienación tomando en cuenta la repetición acrítica de los valores la asimilación rígida de los preceptos y modos de comportamiento el pensamiento repetitivo y la ultra generalización”*(Mallardi, 2014:70).

La vida cotidiana, entonces, forma parte de esa cosmovisión, ese espacio de constitución de los sujetos, mirada clave para el posicionamiento desde el Trabajo Social, si consideramos que allí ocurren los procesos que los situarán como sujetos en estado de vulnerabilidad.

Este último concepto ha tenido varias acepciones y es cuestionado, siendo que Rodríguez lo concibe con una definición amplia y flexible, *“Se trata de un conjunto de características no idiosincráticas que generan debilidad, desventaja o problemas para el desempeño y la movilidad social de los actores (sean estos personas, hogares o comunidades) y que actúan como frenos u obstáculos para la adaptación de los actores a los cambiantes escenarios sociales.”* (Rodríguez, 2000:37).

Chambers por su parte, define a la vulnerabilidad social como *“La exposición a contingencias y tensión, y la dificultad para afrontarlas. La vulnerabilidad tiene por tanto dos partes: una parte externa, de los riesgos, convulsiones y presión a la cual está sujeto un individuo o familia; y una parte interna, que es la indefensión, esto es, una falta de medios para afrontar la situación sin pérdidas perjudiciales.”* (Chambers,1989: 1).

Siguiendo el proceso de avances del término vulnerabilidad que plantea el documento de la CEPAL (2001), se afirma que se ha ido superando la delimitación inicial de la noción de vulnerabilidad, donde se la ha empleado para indicar el grado de desventajas sociales y demográficas que desprenden de la “modernidad tardía” (Rodríguez, 2000), como el rasgo negativo más relevante del modelo de desarrollo basado en la liberalización económica y la apertura comercial (CEPAL, 2000, Pizarro, 1999); como la carencia de poder que experimentan grupos específicos, pero cuantiosos, de la humanidad (Bustamante, 2000); como reflejo de la gran cantidad de movimientos de entrada y salida a la condición de pobreza (CEPAL, 2000).

Surge así un discurso que pretende vincular la situación micro social (activos con los que cuenta la persona o grupos de personas) con la macrosocial (la estructura de oportunidades disponibles). En este sentido, entonces, la vulnerabilidad social consistiría según esta mirada en la insuficiencia o déficit de los activos entre los que poseen las personas o grupos de personas y las oportunidades existentes para ellos (Katzman, 2000, CEPAL).

Galo Labrunée analiza la categoría de vulnerabilidad a partir de dos características fundamentales que hacen a su esencia y la diferencian de otras categorías analíticas. La primer característica que señala es el carácter dinámico y multidimensional del problema y lo contrapone con otros conceptos más estáticos como el de pobreza y exclusión. En tanto que la pobreza se refiere de manera homogénea a los colectivos sociales heterogéneos categorizados por la ausencia de bienestar material en función de los ingresos o necesidades básicas insatisfechas sin indagar en los procesos causales de tal condición. En tanto la exclusión se refiere al debilitamiento de los vínculos de los sujetos o grupos con el resto de la sociedad, imposibilitando el intercambio material o simbólico (Busso, 2001). En cambio, *“La*

vulnerabilidad social remite a las circunstancias que potencian la probabilidad que tienen ciertos actores de sufrir un deterioro en sus condiciones de vidas, enfatizando el aspecto dinámico de proceso” (Galo Labrunée, 2003:120).

La segunda característica a la que hace referencia Labrunée y que se relaciona con lo expuesto refiere a que *“La vulnerabilidad social es entendida como el resultado de una relación dialéctica entre las condiciones externas y el conjunto de activos que disponen los actores sociales junto con las posibilidades de implementar estrategias para su utilización” (Galo Labrunée, 2003:124).* Esta relación entre los activos de los sujetos o grupos con las oportunidades del entorno lleva a reflexionar sobre los riesgos del aspecto discursivo sobre vulnerabilidad social como relación entre recursos y oportunidades (“activos”), como una forma sutil de responsabilizar a los sujetos o grupos desfavorecidos socialmente por su situación, individualizando nuevamente problemas que son de carácter social y del sistema.

Asimismo, se coincide con estos autores, quienes consideran la vulnerabilidad como categoría analítica superadora de otras (pobreza y exclusión) por su carácter dinámico y multidimensional, que permite conocer con mayor nivel de detalle las formas en que se concretizan las tendencias expulsivas del sistema.

Durante el presente capítulo se han abordado las concepciones de la niñez y las familias a lo largo del tiempo, visibilizando las familias empíricas y nuevas organizaciones familiares desde la cosmovisión de la vida cotidiana a partir de varios autores. Se ha destacado la centralidad que mantienen las instituciones moralizadoras en la instauración de mandatos culturales y sociales, los modos de ser familia y de nominarlas generando así una pre configuración que respondiera a la familia nuclear burguesa disciplinada. Esto se da en el marco de la división sexual, social y técnica del trabajo en el contexto ideológico del capitalismo patriarcal, con sus permanentes segregaciones de distinto tipo, lo que concretiza las vulnerabilidades ante lo expulsivo que resulta el modo de acumulación actual.

En el próximo capítulo, se realiza una caracterización general del ámbito socio jurídico y del ejercicio profesional en la Provincia de Santa Cruz que trabaja atendiendo vulnerabilidades, se abordará el concepto de judicialización de la vida familiar, dando cuenta críticamente del “rol” profesional esperado por las instituciones, a partir de las tres entrevistas que se exponen en los anexos, pudiendo desarrollar luego algunas conclusiones que permiten repensar las estrategias de intervención profesional en este ámbito, en localidades pequeñas del interior del país en tiempos de restauración conservadora.

CAPÍTULO IV: *La intervención profesional del Trabajo Social en el ámbito socio-jurídico*

Repensando el ejercicio profesional en Santa Cruz

“El derecho es una disciplina androcéntrica, cuya fidelidad a las políticas patriarcales sintetiza una concepción arcaica del género Mujer. Uno de los mayores riesgos de tal concepción reside en haber aportado argumentos que propiciaron la invisibilización de las violencias contra el género”

Eva Giberti

Desde una configuración histórica conservadora del Trabajo Social, a les profesionales usualmente se les asignan y exigen prácticas regresivas como intervenciones de tinte moralizador, adoptando tendencias burocratizadas desde las instituciones y organizaciones con preceptos inmediatistas.

Muchas intervenciones se ven interrumpidas por el cese de Programas y Planes además de por una fuerte carencia de recursos que garanticen un ejercicio profesional acorde a la complejidad de las situaciones abordadas. Este escenario impacta en la calidad de atención hacia amplios sectores de la población, mientras que tareas de la profesión pueden verse ejercidas por empleados administrativos sin preparación, por organizaciones filantrópicas y ONGs o por graduados no incluidos en la matriculación establecida por la Ley Federal de Trabajo Social N° 27.072.

Frente a estos procesos de precarización laboral les profesionales desarrollan estrategias en defensa de sus derechos laborales históricamente conquistados por el colectivo profesional. En el caso específico del Trabajo Social en Santa Cruz, referentes del Consejo Profesional remarcan²⁶ que dentro de la provincia existen escasos registros sobre la profesión que ayuden a contextualizarla; la falta de información documentada de la profesión es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica. Gustavo Parra, explican, intentó superar visiones y perspectivas de análisis cronológicos, descubriendo las relaciones en que se dio el surgimiento y desarrollo de la profesión en Argentina, pero al igual que los textos de Alayón, solo se ha podido argumentar el contexto nacional y no puntualizar en la provincia de Santa Cruz.

Por su parte, más allá de la recuperación del devenir histórico de la profesión en instancias provinciales, lo que se ha denunciado desde el Consejo Profesional ha sido que *“Por falta de recursos humanos cualquier persona que ocupa un cargo directivo o alguna dirección en los establecimientos públicos tiene el poder de relevar ciertos datos de la vida de las personas y nombrar a eso como si fuera un Informe Social”*²⁷.

²⁶ y ²⁷ Entrevista publicada el 23/11/2018 en diario Tiempo sur de la ciudad de Río Gallegos.

En este sentido explicó que *“El informe social es una competencia exclusiva de los trabajadores sociales y el profesional no recaba datos así porque sí y volcarlos en un instrumento para que quede como un comentario más, sino que hay todo un análisis metodológico que se debe desarrollar”*. Afirmó que *“Los Trabajadores Sociales, desde el Consejo entonces, solicitan a la comunidad y autoridades que se respeten los marcos éticos-jurídicos del Trabajo Social”*.

Además de las condiciones laborales en los espacio socio ocupacionales de los profesionales, también describe que *“Hoy está muy mal la situación del trabajador en la provincia, tenemos en zona norte profesionales despedidas solamente porque simplemente un intendente entendió de que se había atendido a una persona que no era de afinidades políticas y en otras localidades los profesionales están siendo monotributistas con lo que se realiza una falta de respeto impresionante a la profesión y al conocimiento que se ejerce. En realidad, el trabajador social se le termina llamando cuando no se sabe llegar a una solución de un determinado problema y tampoco se tiene determinado cuál es la función de los profesionales”*. Acotó que *“Estamos sufriendo persecuciones y hostigamientos. La profesión está muy mal paga algunos profesionales están dentro de la ley otros, para nada”*.²⁸

Afirmamos que, más allá de la falta de profesionales en las localidades pequeñas, lo cual “habilita” en cierto sentido la polivalencia profesional o, siendo más concretos, el desarrollo de múltiples funciones dentro de un mismo marco laboral en cierta medida también se termina siendo, en algunos ámbitos, una profesión que es “hablada” por las hegemónicas, o aún peor configurada por instituciones disciplinadoras.

Las condiciones laborales constriñen el desempeño de los Trabajadores Sociales de la provincia, reflejando la crisis económica que atraviesa esta, sumada a la burocratización de las instituciones y las insuficientes políticas públicas proyectadas para responder a la “cuestión social”.

Coincidiendo con Svampa M. y Antonelli M. en que *“El neoliberalismo, como proyecto de solución de una crisis que tocaba todos los ámbitos de las relaciones capitalistas, llegó acompañado de su propia manera de apropiarse los territorios y refuncionalizar el espacio”* (Svampa y Antonelli, 2009:110) agregaría, por qué no, de apropiarse del devenir y la reconfiguración de las profesiones que abordan la “cuestión social” en pequeños territorios, como las localidades del interior del país.

Particularidades de la intervención profesional en el ámbito socio-jurídico: “Cuestión Social” como cuestión judicial

“La penalidad perfecta controla todos los instantes de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, homogeneiza, excluye. En una palabra, normaliza”

Michael Foucault

²⁸ Fragmentos de entrevista realizada por el Diario Tiempo Sur con la presidenta del Consejo profesional de TS Santa Cruz.

La realidad, presenta heterogeneidades y movimientos constantes que permiten dilucidar diversas problemáticas sociales, ante las cuales diferentes espacios sociales e institucionales trabajan de manera fragmentada. La convergencia de múltiples profesiones, los ámbitos que regulan los conflictos y las dinámicas sociales pueden verse reflejadas en el ámbito judicial.

En los análisis de Sartori (2010) sobre la obra de Lukács, se observa el “lugar” del derecho en la praxis social, marcando que hay una función relacionada a la reproducción social siendo el mismo parte de la regulación de los conflictos sociales. Argumenta que, desde las expresiones cotidianas, es que el asistente social actúa en esa área trabajando para revertir la tendencia reproductora de la dominación, de la culpabilización de los individuos y de la vigilancia de sus comportamientos. Lo hace así evidenciando una lectura sobre los conflictos de clases y las manifestaciones que esta contradicción arroja.

Senatore y Capello enuncian que estos procesos se identifican como mecanismos de *judicialización de la vida cotidiana*, *criminalización de la pobreza* y *criminalización de la protesta social*, asociando la primer categoría al concepto de peligrosidad, la segunda correspondería a una noción disciplinaria de “integrar a los desadaptados”, mientras que la tercera busca mantener el status quo – al igual que las dos previas- pero de un modo más explícito. Así plantean:

“Entendemos por cuestión penal al entramado de prácticas, discursos, leyes y argumentaciones que abordan los problemas derivados de las contradicciones del desarrollo del sistema capitalista en clave penal, mediante estrategias complementarias de penalización de la pobreza, criminalización de la protesta y judicialización de la vida cotidiana de los sectores más vulnerables de la clase trabajadora” (Capello,2011:107).

Las autoras destacan la importancia de poder realizar las lecturas de la realidad como construcciones histórico concretas con determinadas relaciones sociales, inherentes al modo de producción capitalista²⁹. En este sentido, afirmamos que la teoría criminológica, en la configuración del sistema capitalista busca institucionalizar el orden, legitimando un arsenal punitivo; en palabras de Di Giorgi (2005), es en el proceso de redefinición de actores y problemas donde la “cuestión social se convierte en cuestión criminal, y la justicia social en justicia penal.

Se realiza un tratamiento jurídico de los problemas que se expresan entre los segmentos más desposeídos y vulnerabilizados de la clase trabajadora, en palabras de Baratta se inicia *“Habida cuenta de una distribución desigual de los recursos y de los beneficios, en correspondencia con una estratificación en cuyo fondo la sociedad capitalista desarrolla zonas consistentes de subdesarrollo, y de marginación”* (Baratta,2011:179). El autor analiza críticamente la concepción teórico ideológica de las teorías de la reinserción y la resocialización, propias de 1870.

Sumado a ello, para castigar en modo desigual, se actúa sobre diferentes segmentos de la sociedad en pos de intensificar acciones punitivas puntualmente sobre unos sectores determinados (Zaffaroni, 2003). Es más, la selección de un sector social como potencialmente peligroso es una condición dada históricamente desde discursos hegemónicos, tales como los que se han presentado durante el recorrido analítico sobre los modelos de Estado y las configuraciones socio históricas sobre la niñez y sus alcances. Allí también se lograron cristalizar estereotipos sociales

los que se vuelven actos discriminatorios al ponerlos en acción. Es necesario remarcar que esta “amenaza” deviene de las desigualdades de clase reforzadas por el mismo sistema que las genera.

Para Baratta *“Es importante subrayar que la concepción de ideología es utilizada –desde la criminología crítica- como falsa conciencia que legitima instituciones ideales atribuyéndoles funciones ideales diversas de las que realmente ejercen”* (Baratta, 2002:35). Para dicho autor, en la sociedad capitalista rige un “ethos” burgués, en donde se da una “gramática de la defensa social” (Baratta, 2004) como traducción de una doctrina penal, donde se despliega la coercitividad y la coacción sobre quien trasgrede normas.

Zaffaroni (2005) elabora una recuperación histórica acerca de las asociaciones de trabajadores, las que han sido precursoras por ser un proletariado al que se lo asociaba con un potencial criminal. Para él, así se da origen a las primeras formas de criminalización de clase, reforzadas por correlatos entre criminalidad y pobreza, haciendo énfasis en las trasgresiones vinculadas a la clase trabajadora, omitiendo a su vez las relacionadas a sectores hegemónicos. Así explica que por la constante fluctuación de las leyes del mercado vastos sectores se colocan en una eterna precariedad derivando el procesos de pauperización. Argumenta que, una vez construida una caracterización propia del criminal, la mirada recaería sobre la familia supuesta productora de la trasgresión a la norma -vía herencia o por transmisión de costumbres- asociadas a “vicios e infracciones”. Coincidiendo con esta postura que explica el autor, se le asigna una responsabilidad a la familia en la producción criminal tanto como en la producción y reproducción de la fuerza de trabajo.

En este mismo sentido, Senatore afirma que *“Así la familia trabajadora comienza a constituirse en objeto de minuciosa observación, evaluación, normativización y consecuentemente intervención”* (Senatore, 2014: 222). Es por ello que el confinamiento de la pobreza al ámbito jurídico se relaciona con la vieja ley de pobres: asociada al concepto de peligrosidad por lo que requería de tratamiento de encierro - terapéutico para internalizar las normas de los nuevos modos de producción -con acciones de beneficencia y filantropía- siendo un proceso por el cual se le atribuye a la clase trabajadora ser la “clase peligrosa”³⁰. Según la autora, los procesos de judicialización por tener sanciones ya no optan por rotulaciones sino que son inscripciones burocratizadas que certifican que no se alcanzaron estándares mínimos esperables para cumplir roles asignados socialmente en la dinámica familiar, lo que genera un estigma y culpa ya que no se adapta a la norma. Así, consecuentemente Baratta expresa:

²⁹ Cabe señalar que la judicialización de las expresiones de la “cuestión social” se vincula al actual control judicial de las políticas públicas, a la judicialización de causas asistenciales y la judicialización de las violencias; siendo una tendencia que refiere a las iniciativas de la sociedad civil organizada para reclamar que el Poder Ejecutivo cumpla con su deber de implementar acciones previstas en las legislaciones y ejecute las partidas presupuestarias para políticas sociales universales de protección a la niñez y adolescencia, personas con discapacidad, tercera edad, contra la violencia de género y doméstica, entre muchas otras.

³⁰ Donzelot J. plasma una crítica al rol profesional en su libro *“La Policía de las familias”* sosteniendo que *“El informe social se parece más a un proceso verbal de investigación de gendarmería que a esa sutil puesta en escena de la historia y de los problemas de una familia que puede elaborar una asistente social moderna”* (Donzelot Jacques, 1990:119).

“Reconociendo el carácter que la familia adquiere como sustrato material de producción y reproducción de la fuerza de trabajo y la relevancia del sistema de parentesco en la regulación de la propiedad privada las normas atraviesan y constituyen la realidad familiar. No obstante, este atravesamiento no cae en todas las familias con igual rigor ni con idénticas consecuencias. Cuando hacemos referencia a la judicialización de la vida cotidiana hacemos mención a un tipo particular de procesos que se verifican cada vez con mayor intensidad y frecuencia; hablamos del tratamiento jurídico de problemas que se expresan en lo cotidiano de las familias particularmente de aquellas familias que conforman los segmentos más desposeídos y vulnerabilizados de la clase trabajadora”. (Baratta, 2011 :179).

Siguiendo con este análisis, para Wacquant hay *“Dos poblaciones que en gran medida se superponen y se completan: las mujeres e hijos del (sub)proletariado en lo que se refiere al welfare, y sus maridos, padres, hermanos e hijos varones en lo que concierne al sistema penal”* (Wacquant, 2004:52).

Durante este recorrido es que reflexionamos, a partir de los autores, que la profesión del Trabajo Social al desempeñarse en ámbitos socio jurídicos debe asumirse dentro de una profesión históricamente situada, configurada en una sociedad industrial donde las familias de la clase trabajadora por un lado, se convierten en población usuaria de la política social, pero también en población blanco del sistema judicial y penal.

Borgianni (2013) propone que, en vez de “campo socio jurídico” o “jurídico-social”, se adopte la terminología *área socio jurídica* ya que el concepto de campo desde Bourdieu remite a un campo de disputa, y el trabajador social no está disputando (corporativamente) con magistrados, fiscales o abogados. Es preciso ver a tales operadores o especialistas del derecho como trabajadores que, tal como los trabajadores sociales, psicólogos, educadores etc., están subordinados a la misma lógica del asalaramiento de sus actividades pero con diferencias marcadas en el ejercicio del poder.

Lo socio jurídico expresa la denominación desde la profesión de un espacio socio-ocupacional donde se asientan demandas que tienen una especificidad histórica en relación a otras áreas. En esta óptica, la “cuestión social” sería la expresión de la lucha de clases, de la alienación del trabajo, de la necesidad que el capital tiene de mantener la propiedad privada. Por tal motivo, lo “social” como expresión condensada de la “cuestión social”, propiciará la intervención de juristas, especialistas del derecho, así como de trabajadores sociales que actúan buscando defender tanto el proyecto ético- político de la profesión -con la finalidad de transformar la sociedad- a la vez que sus derechos como trabajadores. Bajo esta mirada se necesita construir un proyecto ético político profesional ante las inflexiones existentes sobre la profesión a pesar de la amplia diversidad de condiciones y determinantes objetivos que estas actividades en diversos ámbitos presentan: pudiendo ser desde el tener estabilidad laboral como derechos sociales de la seguridad social cubiertos o condiciones de precariedad, trabajo informal, pluriempleo, “voluntarismo” hasta la polivalencia funcional.

Plantea Borgioanni que es necesario poder investigar sobre la génesis y reproducción del Servicio Social en los espacios socio ocupacionales que forman el universo socio-jurídico, desde el sistema penitenciario, el ministerio público, las defensorías, el sistema socioeducativo, los tribunales de justicia, y demás.

Las cuestiones, expresa, que se le presentan a los profesionales que actúan en el interior de las instituciones del espacio socio jurídico -por configurarse como la esfera de resolución de los conflictos por la imposición del Estado- parten de cuestiones del orden ético y político que surgen en ese universo, las que necesitan ser enfrentadas con coherencia. Ante la creciente criminalización de la pobreza y la judicialización de las expresiones de la “cuestión social” que se imponen hoy en el cotidiano profesional en las cárceles, alcaldías, los tribunales, en las unidades de internación de adolescentes se tiende a consolidar expresiones objetivadas en todo un nuevo marco legal de corte conservador. Esto parte de ser fruto de articulaciones de parte de la sociedad civil que ve en el encarcelamiento, en el recrudecimiento de las penas y en la reducción de la edad punible formas reificadas y fetichizadas de reparación de las víctimas de la creciente y agravada violencia urbana.

En sus conclusiones, lo que el Poder Judicial resuelve no son los problemas de las personas o de la sociedad en general, sino problemas y cuestiones jurídicas. Donde la llamada “tutela jurídica” protege bienes jurídicos, que son mediaciones creadas socialmente y representan lo que tal sociedad definió que debe ser protegido por la ley y por la coercitividad del Estado. Cabe remarcar que se ha dado una modificación de paradigma legal con la incorporación del Código Unificado³¹, año 2015, a través del cual ya no se hace énfasis en responsabilidades subjetivas sino que se modifican figuras legales para mayor apertura ante el abordaje y tratamiento tanto de las realidades familiares como de las sociales y comunitarias.

En la identificación de elementos que componen la legitimidad social del profesional del Trabajo Social en el ámbito socio-jurídico, Senatore (2014) plantea que muchas veces se somete a demandas administrativas, con escaso reconocimiento de sus competencias, a los profesionales desde la institución. Esto puede verse reflejado en los proveídos de los oficios judiciales, en donde se le detalla casi en forma de listado, qué elementos “verificar” más que la solicitud de una evaluación situacional con los criterios del profesional. Esto no significa que jueces y secretarios/as quieran conocer sobre un aspecto específico o ampliar algún elemento y lo pidan explícitamente, sin embargo, profesiones psi son convocados a realizar una evaluación psicológica, haciendo énfasis en aspectos de índole interpretativo, mientras que, al Trabajador Social, se lo convocaría a “espíar / ser ojos del juez” elementos objetivos, más de índole estructural, sin considerar que la mirada social será abordada desde la perspectiva e interpretación del profesional. En este punto se exponen ciertas construcciones imaginarias en las que se ha escuchado decir que *“todos podrían opinar de lo que hace el Trabajo Social”*.

Retomando el eje de la desigualdad, los problemas derivados del sistema serán interpretados de forma fragmentada. Azcacibar, Chillemi, Novillo y Utrera explican que en general la “cuestión social” es tratada desde una reconstrucción fragmentada de los problemas sociales, con enfoques de psicologización y moralización, que inciden

³¹ Con el cambio de paradigma evidenciado se modifican figuras como régimen de visitas éste pasa a ser régimen comunicacional, la patria potestad pasa a ser responsabilidad parental, en matrimonios se admite el de tipo igualitario, se reconocen las uniones convivenciales, tenencia por cuidado personal, las incapacidades por apoyos y salvaguardas, la filiación puede decretarse por naturaleza, por reproducción asistida o por adopción, los hijos pueden demandar a sus padres en tanto la obligación de aportar alimentos, desde los 16 años se podrá decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo, las internaciones de menores de edad pasan a ser intervenciones de justicia por ser involuntarias, entre varias otras ampliaciones que el nuevo código respalda.

sobre *“El disciplinamiento de la familia obrera en la producción de subjetividades funcionales al orden social”* (Azcacibar, Chillemi, Novillo y Utrera, 2016:22). Desde una perspectiva similar, Senatore y Capello (2011) plantean que la cohesión y la coerción en el enfrentamiento de la “cuestión social” están articuladas y en tensión, siendo que la coerción es mantenida a partir de los mecanismos de moralización desde un control social de índole informal. A la vez, la “desviación” en la conflictividad social podría ser leída desde perspectivas psicologizantes y patologizantes como problemas individuales sin considerar las problemáticas que se configuren ante la falta de incorporación de vastos sectores poblacionales al sistema productivo traducidos en fuerza de trabajo. Estos grupos, distinguen las autoras, se conforman heterogéneamente direccionando mecanismos de internamiento asistencial e internamiento correccional en un accionar de punir la pobreza: *“Las nuevas relaciones sociales de propiedad determinan que se recompensan actividades útiles y se condenan las dañosas sobre aceptación apriorística de una desigual distribución de la riqueza, definitiva e inmutable”* (Senatore y Capello, 2011:109).

Senatore plantea que desde una intervención profesional crítica: *“Las disciplinas pondrán en movimiento un arsenal tecnológico no con el fin de integrar a sus miembros desadaptados sino con el propósito de actuar como mecanismo de preservación, control y producción de la vida; no de cualquier vida, de la vida adecuada a la familia de la clase trabajadora”* (Senatore, 2014: 227).

Haciendo foco en el ejercicio profesional dentro del ámbito judicial, Nicolini (2011) sostiene que es este ámbito el encargado de dirimir conflictos familiares, interpelando la idea de un poder de disciplinamiento y de autoridad implicado ya desde el nombre “Poder” judicial. Argumenta, también, que el poder no se encuentra solo en la figura del Juez, quien requiere auxilio de otros saberes y se reserva la toma de decisiones. Es decir, que existen diversas disciplinas que confluyen dentro de este ámbito para dirimir conflictos familiares plasmándose específicamente dentro de expedientes. Así, «la familia» es tratada desde concepciones basadas en el control, la función social y rutinas burocráticas. En su exposición, plantea cómo es el expediente, aquel documento que corporiza una práctica, a partir de nociones que implican un abordaje desde parámetros de vigilancia. En relación a los expedientes afirma:

“Aunque los profesionales que los confeccionan hayan tenido distintas intervenciones respecto de los sujetos sobre los que versa el informe, lo que se vuelca en este tiene central relevancia por el peso de lo escrito; peso que se potencia en un ámbito de la administración de justicia que sigue un proceso no oralizado” (Nicolini, 2011:35).

Los informes técnicos conforman elementos probatorios en el proceso siendo que se constituye a los informes técnicos como enunciados que producen una “verdad jurídica”. En su descripción acerca de la estructura administrativa de los Juzgados de primera instancia, explica Nicolini, que es jerárquica y según sea la impronta de cada Juez se observan diferencias de mayor o menor accesibilidad a éste y/o al secretario de parte de los agentes. Este grado de accesibilidad influirá en la mecánica de trabajo, que repercutirá en la construcción del asunto justiciable, pudiéndose conformar una intervención a partir de una discusión común con intercambio de saberes para pensar soluciones acordes y viables. Claro está que, a causa de la coparticipación de los trabajadores sociales con los abogados en

ciertos momentos del proceso de intervención, lo social siempre se halle restringido por el encuadre legal y por las posturas de otros actores del espacio judicial (Defensor/a de menores e incapaces o Curador/a oficial).

Cita a Donzelot, para quien la inclusión del Trabajo Social en el aparato judicial guarda puntos de contacto con la inserción asociada a una función educativo preventiva. En este sentido Andrea Oliva, señala que desde la década de 1930 los organismos vinculados a la acción del Poder Judicial incorporaron asistentes sociales asumiendo los profesionales *"Funciones controladoras asociadas a la llamada protección, sustentadas en mecanismos burocratizados de clasificación y derivación"* (Oliva, 2007:120). Así el Juez se apoyaba en la psiquiatría y la psicología quedando la función educativa y terapéutica como lugar de registro y control para el Trabajo Social.

Por tal motivo, *"La vigilancia del saber psi introduce no sólo al juez sino también al trabajador social como brazo extensivo del juez más cercano a la familia. Esto puede visualizarse cuando en algunos informes psicológicos o psiquiátricos se explicita la sugerencia de que el trabajador social realice un seguimiento del cumplimiento del tratamiento psicológico o psiquiátrico sugerido"* (Nicolini, 2011:70).

Según la autora, la inserción del trabajador social en juzgados tendrá que ver con funciones evaluativas tanto como con funciones de seguimiento. Desde sus palabras, *"A la disciplina social el requerimiento de caracterización de la situación planteada se le formula a veces en forma explícita y otras tácitamente; en general esto último ocurre cuando la evaluación es realizada por el trabajador social de planta del juzgado quien interviene sin solicitud explícita en el expediente"* (Nicolini, 2011:122).

Para Nicolini *"En el Trabajo Social el término de seguimiento alude a la secuencia de intervenciones que luego de formular un diagnóstico y una propuesta inicial de intervención se va desplegando a lo largo del tiempo y tiene por finalidad continuar introduciendo propuestas interventivas, conociendo la evolución de la situación inicial y evaluando cambios y persistencias"* (Nicolini, 2011:144). Por tal motivo es que en los informes técnicos se distinguen aspectos descriptivos (momento descriptivo), se incluyen también en un tramo final del informe conclusiones (momento interpretativo) que podrían contener aproximaciones diagnósticas y recomendaciones (momento de sugerencias) respecto de la forma de abordar la situación que se problematiza.

Serán los profesionales del Trabajo Social, quienes en sus aproximaciones diagnósticas según Nicolini, realizarían una caracterización de la situación sobre un sujeto, destacando alguna particularidad de este y pudiendo incluir una caracterización de su red familiar y de otros aspectos que atraviesan la situación problemática, relevantes desde el criterio -autónomo- de los profesionales. A pesar de que la demanda llega planteada en forma de problema ya acontecido a sede judicial, para que medie dictaminando cierta "solución" desde el sistema judicial, la demanda, según Cazzaniga *"Se encuentra conformada por la propia percepción de los problemas y necesidades de los sujetos que la plantean además de estar atravesada por "la construcción imaginaria de la profesión"* (Cazzaniga, 2009; s/d). A ello se agrega un cierto imaginario de los sujetos de lo que cada institución puede o no ofrecerle" (Nicolini, 2011:73). Así es que el amplio espectro de situaciones que arriban al sistema judicial buscan respuestas sobre lo conocido, sobre una lectura fundada en base al imaginario social construido. En esto la autora remarca que:

"Al recurrir a la institución paradigmáticamente ligada al control social se evidencia que las instituciones asistenciales, educativas o técnicas -asociadas a la asistencia también- que responden al control social, pues como señala Pavarini (1994) terminan por apoyarse a veces sólo mediante la amenaza, otras veces en la efectiva aplicación en intervenciones ligadas al control disciplinario" (Nicolini, 2011:75).

Explica Nicolini que a través de la sentencia se postulará un punto de vista que trasciende las perspectivas particulares siendo la *visión soberana* del Estado ya que *"La sentencia del juez pertenece así a la clase de actos de nominación o de instauración, representa la palabra autorizada pública oficial que se enuncia frente a todos y en nombre de todos"* (Bourdieu, 2000:197). Las sentencias entonces actúan con cierta eficacia simbólica del campo jurídico en tanto nombran y construyen realidades:

"En síntesis la sentencia queda enunciada como una acción legítima neutral trascendiendo así lo particular de la situación y haciendo posible nombrar y construir realidades incuestionables entanto emanadas de un espacio que representa la voz oficial del Estado. Esta atribución del juzgado de ser la voz oficial del Estado en determinados asuntos se reconoce en el hecho de que instancias oficiales exijan como única vía para dar curso al trámite, junto a la acreditación de sentencias o resoluciones judiciales"(Nicolini, 2011: 89).

Ahora bien, se debe considerar que, al actuar con familias y conflictos desde el ámbito socio jurídico, las percepciones remitirán al modelo dominante y socialmente construido desde la norma jurídica. Tal centramiento en los aspectos familiares supondrá tendencias focalizadas hacia el sujeto y otras en la familia; suponiendo una normalidad y la necesidad de intervenir para eliminar de estas todo aquello considerado del orden de "lo patológico". Por ello, dentro del centramiento en lo individual la apelación a la familia se realiza para aplicar a la conducta del individuo por considerar a esta potencial colaboradora en el proceso de mejorar dicha conducta (De Jong, 2001) o incluso para responsabilizarla de cuidados a brindar al individuo (Grassi, 1998).

Se destaca además que el reconocimiento del centramiento en lo individual o familiar es importante porque si bien se trata de que desde los ámbitos jurídicos se suela:

"Intervenir en conflictos considerados asuntos de familia se encuentra también una franja significativa de intervenciones que focalizan en un sujeto, este si bien integrante de una familia pasa a ocupar el centro de la escena, su nombre figura en la carátula del expediente será sobre quién los profesionales y especialistas deberán expedirse dar cuenta de su estado de salud y ésta de su capacidad jurídica"(Nicolini, 2011:119).

Con base en una visión socio-antropológica del poder judicial, se pueden pensar entonces de modo articulado, en las formas de sociabilidad sobre la idea de "normalidad" que el sistema judicial instaure con relación a los valores sociales en torno a las configuraciones familiares. Visto que la normalidad es idílica, es un concepto que subyace a una mirada funcionalista, acompañada de adjetivaciones tales como: buenas, malas, positivas y negativas; biologicistas como sanas, enfermas, patológicas, estructuradas, anómicas, disfuncionales, desorganizadas, entre

otras. En este sentido, se criminaliza la familia como parte de una aproximación fenoménica, acompañada del mensaje que instauran los medios de comunicación masiva y las publicidades quienes imparten una visión de familia sumado también al mensaje que transmiten las iglesias y el Estado, éste con la implementación de sus políticas sociales.

Poder terminar con la moral dominante alienante, pensando en prácticas pre figurativas que se anticipen en los procesos judiciales, consiste en pensar las prácticas que generen un quiebre con el sentido común dominante. Esta ruptura consiste en entender que el trabajo profesional se basa en ser un trabajo sobre los derechos del sujeto, y no sobre dádivas ni bondades, implica romper con la naturalización del cuidado como una obligación femenina. El problematizar también implica poder evidenciar cómo se entiende la salud familiar, en donde habitualmente la enfermedad aparece como un estado y no como un proceso. De este modo, el estado de salud de les entrevistades debe apartarse de los discursos que validan una hegemonía médica, sin tener en cuenta sus condiciones materiales de existencia, el contexto en el cual se inscriben y sus espacios concretos de reproducción. Esta mirada se fundamenta en que el proceso de salud enfermedad es un proceso social, -salud como bio psico social- en el que las personas se enferman y mueren según sea la clase social a la que pertenecen, ya que presentan diferentes obstáculos, dificultades de acceso y de permanencia en el sistema de salud ante la misma condición clínica (Laurell, 1993).

Siguiendo esta misma línea, se debe poder avanzar en la disputa de categorías para no naturalizar los patrones de familia, plasmados por ejemplo en informes donde figuren términos y adjetivos como “familia disfuncional”. Frente a ello se debe instalar la pregunta sobre la normalidad, sobre cómo determinadas formas hegemónicas deben ser disputadas, interpelando discursos para que cualquier visita domiciliaria no sea un mero mecanismo de control ni un registro del listado de calamidades. Ante las miradas hegemónicas, la familia es una categoría en disputa, tal como se analizó durante el capítulo precedente, que atraviesa explicaciones desde el sentido común para reconsiderar un horizonte concreto de la búsqueda “normalidad”.

En suma, por todo lo expuesto previamente es que se considera que el Trabajo Social asume una práctica discursiva en la cual el poder está presente, debiendo reflexionar críticamente qué implica pensarlo desde esta perspectiva. Como plantea Faleiros “¿Sería una ilusión un Trabajo Social transformador de las condiciones de opresión / explotación, considerando que el mismo es un producto social de ese orden, insertándose en la división técnica y social de la producción y reproducción del orden dominante?” (Faleiros, 2011:120). Consideramos que es necesario dilucidar las prácticas discursivas en el marco de intentar romper con un engranaje institucional en el que muchas veces el profesional es hablado por la institución o por profesiones hegemónicas dentro del ámbito jurídico.

Dentro de los requerimientos institucionales, es el Informe Social un elemento central al momento de presentar, y hasta de dar cuenta, de una intervención específica. En el próximo apartado, se abordarán los elementos constitutivos del Informe Social, dando cuenta de las particularidades de este en el área socio-jurídica que instrumentaliza la pericia, respondiendo a una demanda inicial que es formulada por otros. Este Informe, como dictamen pericial tendrá dos partes; datos objetivos y la interpretación diagnóstica. Asimismo, se postula la necesidad de efectuar propuestas y sugerencias, aunque siempre estas estarán en el marco de los recursos existentes del

conocimiento de la profesión. El Informe será entonces importante pero no es decisorio, será una prueba más dentro de un procedimiento más amplio y no es vinculante para los jueces, aunque tendría una amplia consideración de sí.

Particularidades del Informe Social en el ámbito socio-jurídico

“Para cambiar el mundo es necesario cambiar las maneras de hacer el mundo, es decir, la visión del mundo y las operaciones prácticas por las cuales los grupos son producidos y reproducidos. El poder simbólico es un poder de hacer cosas con palabras. Sólo si es verdadera (es decir, adecuada a las cosas) la descripción hace las cosas. En este sentido, el poder simbólico es un poder de consagración o de revelación, un poder de consagrar o de revelar las cosas que ya existen. La lucha de las clasificaciones es una dimensión fundamental de la lucha de clases”

Pierre Bourdieu

Según los aportes de Daniela Gallego, los informes sociales recuperan las acciones que cobran significado a partir de,

“La conjunción de una serie de factores que determinan a las/los trabajadoras/es sociales en los procesos de intervención profesional, estos factores tienen que ver con el espacio socio- ocupacional, proyecto profesional societario, correlación de fuerzas existentes en cada ámbito. Estos factores actúan como condicionantes de las prácticas de intervención profesional a partir de lo cual el profesional establece un campo de mediaciones que le permite definir la particularidad de los informes sociales” (Gallego, 2008:154).

Por su parte, lo que particulariza al Informe de actuación es que *“No se detiene en la explicación de una situación específica, sino que recupera procesos de trabajo contruidos, caracterizándose por poseer una mayor complejidad, requiriendo la elección de fundamentos sólidos conceptualmente para legitimar su práctica profesional”* (Gallego, 2008:163). Centrándose en la dimensión política de la intervención y las estrategias que los profesionales desarrollan, Gallego explica que:

“La preocupación en torno a los informes sociales no se reduce a cómo hacer un informe sino que se enfoca en su carácter político, es decir, por las decisiones que se toman en torno a ellos y por las disputas que entran en juegos respectivamente (...) en los informes sociales, se materializan las distintas posiciones respecto a los criterios de accesibilidad de los recursos, las lógicas de control que tienden a reforzarse en la vida cotidiana, las formas en que se concibe la clase, las formas de entender las prestaciones, etc. En esas mediaciones aparece una variedad de interrogantes al momento de definir la intencionalidad del contenido de los informes sociales tales como qué es y qué no es conveniente informar cuáles serán los fundamentos teórico ideológicos para argumentar la posición del profesional, qué implicancias y consecuencias se presentarán en torno a dichas negociaciones, la transparencia

de lo que se plasme en los informes sociales va a depender del componente estratégico del proceso de intervención esto resulta particularmente significativo ya que predomina la tendencia a su reduccionismo: bajo la lógica formal abstracta los concibe como escritos aislados cuya fiabilidad depende de que tan creíble o fidedignos son en relación a la exposición de las situaciones singulares justificándose bajo el supuesto de cierto profesionalismo en la toma de decisiones” (Gallego, 2014:168).

La mediación será un elemento fundamental a la hora de sostener y ampliar los márgenes de autonomía en las actividades profesionales a partir de un posicionamiento ético político ante la ofensiva neoliberal contra el trabajo como parte de un proyecto societal contrahegemónico. Mallardi, reflexionando sobre la dimensión política de la intervención, para interpelar analíticamente la realidad, desde la relación que el profesional establece con el sujeto entrevistado y con el destinatario del informe, plantea que:

“Escribir un informe social implica participar de determinadas relaciones sociales donde qué y cómo se escribe remite necesariamente a relaciones de poder tanto entre el profesional y el usuario entre el profesional y el destinatario del informe; considerar el proceso de escritura mediatizado por relaciones de poder implica por un lado, que la situación social en la cual se inscribe el informe social es un elemento sustancial para comprender la finalidad y el contenido que en él se incluye mientras que por el otro y estrechamente vinculado es imposible obviar el carácter inherentemente ideológico que atraviesa la totalidad del texto que se elabora. (...) Mediante la palabra existe la capacidad de significar representar y reproducir algo que se encuentra fuera de ella y es en ese proceso que se produce simultáneamente la reproducción y refracción de la realidad, la reproducción hace referencia a la capacidad de reflejar la procesualidad social mediante la conciencia tanto ésta puede aprender la racionalidad y los procesos sociales articulando elementos fenoménicos y esenciales de los mismos. Por su parte la refracción remite a que toda aproximación a la realidad es inacabada pues en ella confluyen múltiples discursos y postulados existentes en la arena social en la cual se insertan, es decir, todo enunciado forma parte de las contradicciones sociales” (Mallardi, 2018:39).

A partir de estas preocupaciones, poder evitar como dice Sánchez Vázquez, una primacía de la práctica cargada de sentido común, allí donde la teoría es reemplazada por prejuicios y supersticiones esgrimiendo respuestas inmediatas para aplicar el pragmatismo y la “validez” si es que se responde de inmediato. Este dilema, planteado por Yolanda Guerra (2007), consiste en ser un falso dilema de la práctica ante la teoría, lo cual es un error ya que la negación de la formación dentro de la postura esconde un posicionamiento hegemónico que considera válido solo al conocimiento instrumental, siendo un proceso de disciplinamiento ante cualquier posibilidad de problematización. La autora explica:

“La 1ª falacia que nos parece oportuno mencionar es la que podríamos denominar como falacia objetivista y es aquella que plantea en el Informe Social ya sea en alguna de sus partes o en su totalidad debe primar una visión objetiva sobre la realidad que se pretende informar. El fundamento de esta falacia tiene un origen complejo siendo necesario

mentar dos aspectos fundamentales; primero el carácter subalterno de la profesión en su génesis y desarrollo constituyéndose en una profesión auxiliar de otras de una supuesta mayor tradición tales como la medicina y el derecho. Como profesión auxiliar de dichas disciplinas se esperaba y se espera que el profesional mediante el Informe Social se constituya en los ojos del juez del médico o de la respectiva autoridad, por ello en las tareas atribuidas al Trabajo Social en la división social del trabajo se espera que quienes ejercen la profesión puedan elaborar Informes Sociales que remitan a una descripción detallada de las condiciones objetivas de vida libre de valores y juicios personales en tanto que se sostiene esa valoración es competencia de quien luego leerá el informe y decidirá al respecto. El 2º aspecto por mencionar en el análisis de los fundamentos de la falacia objetivista está dado en la herencia del pensamiento positivista en el Trabajo Social este pensamiento en términos generales sostiene que las Ciencias Sociales deben estudiar la sociedad con un espíritu objetivo neutro, libre de juicios de valor y visión del mundo (Lowy 1982). Así los procesos sociales son aprehendidos en forma reificada en otras cosas donde se niega a precisamente su procesualidad social e histórica” (citada en Mallardi, 2018:25).

En la elaboración de los informes sociales se deberá mantener una ruptura y un distanciamiento de la vida cotidiana de los sujetos, usando categorías que problematicen analíticamente lo que se expone. En esta línea, no serían meros documentos descriptivos que simplifiquen la vida cotidiana con un reduccionismo de las problemáticas sociales, donde sin explicitarlo se aprobarían o desaprobarían conductas, donde se reproducen prácticas que fortalecen el neoliberalismo. En este sentido, Mallardi plantea poder superar la mera descripción del estado de situación de la unidad familiar, analizar distintos aspectos considerando las múltiples determinaciones de la realidad social que impactan sobre el cotidiano. Así, se evitarían visiones reduccionistas, que observen los elementos componentes de las problemáticas como causa - efecto con un objetivo de control,

“Controlar la vida cotidiana de las unidades familiares implica poder clasificarla, describirla y caracterizarla según categorías o marcos clasificatorios estandarizados. Conlleva, entonces, prácticas que articulan el control, la fiscalización y el disciplinamiento. Quien accede a un servicio social debe saber, según el mandato hegemónico, que está haciendo un uso indebido de recursos que no le pertenecen” (Mallardi, 2019:106).

Por ello y recuperando los planteos de Grassi (1989), quien analiza los mecanismos de control de la vida cotidiana, se debe abrir camino a un claro análisis sobre las implicancias de la división sexual del trabajo y las responsabilidades socialmente atribuidas a cada uno de los géneros, por ejemplo, mediante la organización de las tareas del cuidado y su implicancia en la organización de la vida cotidiana. Pensar desde las desigualdades sociales, las de género, las de clase, las de raza entre otras, es pensar desde una mirada de totalidad que complejice los discursos y prácticas donde se instauran valores de “lo bueno”, “lo malo”, “lo adecuado” y “lo inadecuado”, “lo esperado”, “lo inesperado”³² desde parámetros acriticos. Para esta línea, Mallardi (2014) propone reconstruir tradiciones, saberes y costumbres contra hegemónicos, para evitar hablar sobre familias “disfuncionales”, de “relaciones parentales patológicas” ni tampoco de anormalidad. Asimismo, considera que tampoco se debe convertir la intervención en una práctica terapéutica que apunte a un Trabajo Social clínico, lo que Netto llama como la

“semiologización de la realidad”, en cuanto los términos utilizados frecuentemente en dichas intervenciones, como resiliencia o meritocracia, no piensan ni transcriben las condiciones materiales de vida del sujeto con el que se interviene.

Por último, Mallardi destaca que dentro del informe social se debe tener calidad y exactitud, debiendo ser elaborado con relevancia y pertinencia, como reflejo del secreto profesional. La configuración de este deberá contar con una introducción, el desarrollo, una narrativa con descripción acompañado de argumentación y una conclusión del profesional. Explica, la última debe estar escrita bajo subtítulo remarcando que consiste ser la postura del profesional. En base a ello es que afirma:

“Desde la perspectiva analítica adoptada, se considera que la conclusión no es el espacio para analizar la información incluida en el desarrollo o para incluir las categorías analíticas que sirven para profundizar la explicación de la situación problemática tratada. Estos dos aspectos son transversales a la totalidad del informe social, con mayor preeminencia en el desarrollo, tal como se ha planteado, por lo cual expositivamente diferenciar entre descripción y narración en el desarrollo y explicación y análisis en la conclusión es reproducir una mirada positivista en el proceso de escritura. En contrapartida, se considera que la conclusión, o apartado final del informe social, es el espacio privilegiado para sintetizar la información anteriormente incluida, explicitando las principales relaciones entre los elementos tratados y, en relación a dicha síntesis explicitar una postura profesional en torno a la continuidad de la intervención, sea mediante la recomendación de cursos de acción (Giribuela y Nieto, 2010), la reafirmación de la finalidad del informe social (gestión de recursos, derivación, etc.) o la interpelación al destinatario sobre la necesaria intervención del mismo” (Mallardi, 2019:46).

Centrándonos ahora en la intervención del Trabajo Social en el ámbito socio jurídico, Claudio Robles (2004) considera que el poder judicial ha constituido históricamente un espacio de relevante trascendencia para la inserción ocupacional de los trabajadores sociales, que ha permitido instalar en el escenario jurídico la comprensión acerca de las posibilidades que la profesión ofrece para una lectura integradora de los conflictos. La práctica pericial exige entonces superar aproximaciones diagnósticas descriptivas que solo permanezcan en la apariencia del fenómeno, intentando aprehender la esencia de éstos desde su problematización, para su posterior comprensión y poder hacer lecturas desde las estrategias familiares y no desde las “carencias”. Abordando las particularidades de la intervención profesional en el ámbito socio jurídico, Robles reflexiona sobre los abordajes domiciliarios. En esta instancia es en donde se transforma la oralidad en textualidad, siendo ello parte configurativa de un proceso comunicativo, donde resulta un desafío la sistematización de la información obtenida, que implica a su vez, una dimensión ético política, donde los profesionales decidirán sobre su propia producción.

³² A partir de diversos mecanismos y discursos es que la sociedad, por ejemplo, no espera lo mismo para unos sectores sociales que para otros. Lo esperado para niños de sectores dominantes podría ser que aprendan inglés, que jueguen al rugby, que sus padres tengan vehículo propio y tiempo libre, mientras que para los niños de los sectores subalternos lo esperado podría ser que aprendan tareas de cocina, de jardinería, de carpintería, de albañilería además de prácticas relacionadas a la oferta de servicios. Las desigualdades que se reflejan en las familias son también fruto de un discurso que reproducen los medios de comunicación, la escuela y las iglesias diseñando la consolidación de tal pensamiento y acción.

Para el autor, la intervención amerita un resguardo de los sujetos:

“Refundar la pedagogía de la intervención implica analizarnos, animarnos a problematizar las formas para jurídicas del trabajo pericial, desnaturalizar la impronta que ha sido instituida únicamente desde un saber ajeno al campo del Trabajo Social; es dejar de preguntar para tomar datos bajo una operación de encasillamiento, comenzar a dar la palabra, a favorecer la expresión, a facilitar la reflexión y de la propia vida en fenómenos sociales, proponer líneas de abordaje para trabajar a la posibilidad de acercar los resortes de la política social, integrar una perspectiva más amplia y operar como nexo entre el mundo juvenil y el mundo judicial y entre éste y el mundo de lo social (...) Somos demasiado obedientes de una jerarquía que poco sabe de nosotros y salimos sin realizar ninguna pregunta a hacer el informe ambiental pero todo lo que no está prohibido está permitido, en el contexto judicial contamos con condiciones laborales que nos garantizan estabilidad y una seguridad que no existe en otros espacios laborales y contamos con cierta dosis de autonomía, aunque sea relativa, que nos permite dar pelea e intentar abrir el abanico de posibilidades de acción” (Robles, 2011:174).

En esta línea, Azcacibar (2014), acerca de las tácticas y técnicas utilizadas, propone generar nuevas estrategias y alternativas de intervención para evitar lógicas de control y punitivas. Así, cita a Oliva, quien define las funciones del Trabajo Social: de asistencia, socioeducativa y de gestión. Resalta la autora que, por ejemplo, sobre la visita domiciliaria:

“Históricamente se plantearon formas diversas de llevar a cabo una actividad denominada bajo el mismo nombre, pero con consecuencias prácticas muy diversas. También se pudo apreciar que la obtención de información sobre la vida cotidiana y la realización de registros, informes y estadísticas pueden servir a distintos fines. Pueden plasmarse como mecanismos de control, pueden ser parte de los formalismos institucionales, pueden evidenciar situaciones de injusticia y movilizar reclamos, etc.” (Oliva, 2007:63).

Desde estos aportes, Azcacibar sostiene que en el ámbito judicial los informes tienen el nombre de pericias, sin ser parte constitutiva de un proceso de asistencia. Plantea que serán parte de una indagación estratégica contextualizada, orientada para dar respuesta a una inquietud externa, en este sentido, agrega que la construcción de tal pericia consiste en ser la elaboración de un diagnóstico en el proceso judicial. Asimismo, la autora remarca que se pueden realizar informes sociales que configuren una cosmovisión de sujetos sociales en tanto particulares concretos.

Azcacibar, Chillemi, Novillo y Utrera señalan que las tareas profesionales en este ámbito no son ni de seguimiento ni de asistencia:

“La intervención en terreno es acotada a la realización de un dictamen o pericia social (que incluirá la realización de un informe social con su respectivo diagnóstico o evaluación diagnóstica) que además estará indefectiblemente orientado por una pregunta externa al profesional (realizada por un Juez, por ejemplo). La actividad profesional está orientada, y su resultado escrito a modo de una pericia, tiene como objetivo la de ser incluida en un expediente

judicial, y surge únicamente de la necesidad del Juzgador de tomar decisiones. Para afrontar adecuadamente esas decisiones, para dictar sentencia, o resolver situaciones particulares, el juez o el operador judicial, necesita conocimientos de muchas ciencias, prácticas, oficios, en fin, saberes que no posee, entre ellos del Trabajo Social (...) El accionar profesional se concreta en la forma de ese dictamen pericial, que debe reflejar un determinado estado de la cuestión social, en un caso particular, frente a historias singulares, pero sin por ello obviar la relación con el contexto de producción más amplio y siempre orientado a dar respuesta y asesorar sobre el interrogante que le dio origen” (Azcacibar, Chillemi, Novillo y Utrera, 2016:4).

Claro está que la producción elaborada tendrá que ver con la interpelación del mundo cotidiano de las organizaciones familiares, grupos, personas con los que se intervenga. De eso dependerán los distintos fines que tenga la obtención de información sobre la vida cotidiana de los sujetos, plasmado en registros, informes y estadísticas, que para Oliva (2007), pueden orientarse a ser mecanismos de control, siendo parte de los formalismos institucionales o bien pueden evidenciar situaciones de injusticia y propiciar reclamos. Por ello es por lo que sugiere construir pericias sociales que permitan “*particularizar lo universal*” desde la mediación para operacionalizar la acción, a modo de ejercicio crítico permanente (Pontes, 2004).

En este sentido Mallardi propone que “*Este proceso de reconstrucción analítica debe ser capaz de superar la inmediatez y superficialidad de los hechos en su apariencia primera para conocer las mediaciones y determinaciones que vinculan la situación problemática con la configuración socio- histórica de la cuestión social*” (Mallardi, 2014:97).

Se refiere a contextualizar todo proceso que se presente como individual, entendiéndolo como resultado de diversos acontecimientos y devenires externos al sujeto. Así poder conocer las estrategias familiares de vida, pudiendo superar las dicotomías, dando cuenta en los informes lo concerniente a la obtención de recursos, a la organización del cuidado -sobre todo en economías femeninas-, las condiciones de vida y de la vivienda, lo que atienda al proceso de salud enfermedad, los aspectos de la cotidianeidad y saberes en la socialización del aprendizaje, entre otros elementos de la totalidad a conocer.

Coincidiendo con la reflexión de Felicitas Elias, quien recupera a Agnes Heller, resulta fundamental no dimensionar las necesidades desde el patrón de las NBI sino hacerlo entendiéndolas como sociales para la comprensión de ese particular cotidiano, así también en cuanto a las nociones de familias éstas deberían atenderse separándolas del concepto de unidad doméstica y miradas biologicistas accediendo a sus realidades en las condiciones de residencia más allá de los parentescos que existiesen. La autora sostiene que las intervenciones profesionales no son neutras, por lo que al no existir prescripción de las intervenciones en ambos sujetos actorales, quedará en tal caso la intervención en la memoria e historicidad de esos sujetos. Parafraseando a Walter Benjamín, la memoria abre expedientes que el derecho y la historia dan por cancelados. En este punto remarca que el profesional no se hace cargo del discurso hegemónico del derecho, pero su incumbencia profesional siempre se remitirá al ámbito familiar y socio comunitario.

En síntesis, y retomando a las autoras mencionadas, se debe comprender la realidad como totalidad, donde “*No pretendemos ser neutrales (hemos renunciado hace mucho a esa apuesta), solo conocer objetivamente la realidad*

que transitamos" (Azcacibar y otros, 2014). Argumentan que las pericias sociales son construcciones conjuntas de intercambio entre los sujetos protagonistas y aquel profesional del Trabajo Social que intervenga, configurando elaboraciones situadas temporo espacialmente, y agregan que para Robles (2011) "*Describir hechos y significados puede resultar una tarea accesible al sentido común, pero interpretar la realidad solo es posible hacerlo desde un marco teórico que le de sustento*" (citado en Azcacibar y otros, 2014:64).

A partir del respeto a las historias de vida singulares se deben consolidar espacios de preservación de los derechos humanos en el ámbito socio jurídico, donde los trabajadores sociales tendrán mucho para decir y seguir, en sus palabras, fundando discursos, atendiendo a los significantes que surgiesen. Más allá de que quienes ejercen el Trabajo Social no dictaminan ni resolucionan, serán sí los responsables de crear conocimiento desalentante. Recuperando aportes de Azcacibar es necesario delinear propuestas para sí fortalecer el respeto por los derechos humanos. Cabe remarcar que más allá de una carátula como parte de una nominación en un expediente en forma de titular, se estará abordando la vida cotidiana de la familias, con identidades singulares, con sus particularidades además de historias de vida y situaciones diversas -no son meras unidades domésticas-, lo cual es reflejado por la profesional del Trabajo Social entrevistada al destacar la importancia de no caer en un trabajo de tipo mecanizado.

Particularidades de la intervención profesional en pequeñas localidades

A partir del análisis de las entrevistas³³ a integrantes del Poder Judicial de Puerto San Julián y de la recuperación teórica realizada a lo largo de la Tesis, presentamos ahora algunas dimensiones, solo escindibles analíticamente, que posibilitan la comprensión de las particularidades que adquiere la intervención profesional del Trabajo Social en el ámbito socio-jurídico en pequeñas localidades del interior patagónico. Las dimensiones analizadas son tres: las condiciones de trabajo en el espacio socio-ocupacional, las características y significado social de la actividad profesional y las concepciones sobre los niños, adolescentes y las familias.

Consideramos que los algunos resultados alcanzados, a partir de un proceso teórico- metodológico riguroso, pueden ser generalizados en grados diversos a otros ámbitos de intervención de la profesión y a otras áreas geográficas del país.

Condiciones de trabajo en el espacio socio ocupacional

Cuando analizamos las condiciones de trabajo en este espacio socio ocupacional en las localidades del interior patagónico, el rasgo sobresaliente es que los profesionales asumen tareas que exceden a las incumbencias profesionales en este ámbito, desarrollando a la vez funciones asistenciales en parte de sus intervenciones.

También podemos decir que, en los pueblos pequeños, un rasgo común de la actividad profesional es la polivalencia funcional³⁴, es decir, los trabajadores sociales son requeridos y deben responder a demandas de otras áreas o instituciones de aquella por la que son contratados. Por ejemplo, los profesionales del área de salud provincial son requeridos para cumplir tareas ad hoc a partir de un acuerdo interno entre estamentos de la provincia; lo mismo

ocurre en el área socio- jurídica.

En Puerto San Julián, con una población total de casi 20 mil habitantes una sola profesional responde dentro del Poder Judicial a los requerimientos de diversos fueros en simultáneo, no sólo al de Familia, dependencia a la que pertenece y donde se encuentra ubicada físicamente. Esta situación es naturalizada por integrantes de la institución, que además no perciben las dificultades y contradicciones que se desprenden de esta situación:

“No veo que tenga limitaciones (...) si veo que en personal no estamos completos (...) ella está a disposición de todas las requisitorias que podrían hacerse en las dependencias judiciales (...) En sí son como muy amplias sus funciones, no es solamente conmigo que trabaja, es así.... nosotros según la ley deberíamos tener un gabinete especializado solamente en familia, destinado acá...pero no pasa. Ni siquiera podría trabajar para el Juzgado Civil, estamos con Familia, Laboral y Civil todo junto en un gabinete especializado que sería sólo para trabajar en Familia, pero eso no lo tenemos aún” (Jueza)

En cambio, les profesionales problematizan las limitaciones que esta polivalencia funcional impone a las intervenciones y emplean estrategias para intentar superarlas:

“En las violencias debo escuchar a los dos, a la víctima y al victimario, entonces me da una mano el psicólogo y nos dividimos a qué rol escucha y entrevista cada uno” (Trabajadora Social)

Además, la relación de cercanía en los vínculos que existen en lugares pequeños, complejiza aún más las intervenciones:

“ (...) en la calle ando esquivando gente, pero si ellos tienen una conflictiva no es mi opción, es mi trabajo, sería por lo que representas no por lo que sos, es como que representas la ley vos, pero no sos la jueza. Si ante algún informe los abogados de partes te pueden impugnar tu informe, por inspección ocular, estando sola como profesional del área es complejo” (TS)

Esta relación de proximidad, por un lado condiciona la vida privada de les profesionales y por otro, les plantea la necesidad de poner límites a las demandas de los sujetos, así como resolver los dilemas éticos que estas demandas le plantean al/a profesional:

33 Ver Anexo

34 La polivalencia funcional refiere a la realización del trabajador de tareas o funciones propias de dos o más grupos profesionales quedando el mismo adscrito al grupo al que le corresponden las funciones que desempeña durante mayor tiempo. De este modo, con dicha acepción se explica cómo se realizan tareas o funciones que exceden las propias destinadas al puesto laboral. Referencia: Diccionario panhispánico del español jurídico- Real Academia Española.

“Siempre trato de dejarles en claro a las personas a las que entrevisto, y siempre las encuentro fuera del horario de trabajo, o se acercan a preguntarme cosas puntuales, que nosotros - los peritos- por reglamento, no tenemos permiso de asesorar, eso no lo puede hacer una persona diciendo hace esto o no hagas aquello. Les digo que se comuniquen con su abogado, que se asesoren y que presente las pruebas que se les pida. Igual acá es un pueblo sumamente chiquito, me los encuentro en la verdulería y me vienen a preguntar por su caso y así. Obvio que yo me limito, no puedo darles información del proceso, pero si tengo que darles información para que accedan a un trámite o alguna institución eso si lo hago (...) me pasa con las violencias, si hay una situación de riesgo y yo tengo un seguimiento quincenal, qué pasa en el medio de esos 15 días, si pasa algo la gente sabe que, la señora por ejemplo, puede ir a buscarme -a su casa (N de R)- si necesita que se informe la prohibición de acercamiento del violento, suponte, siempre le digo “hablalo con tu abogado”, pero también me pueden llamar a mí –al teléfono personal (N de R)- y yo lo informo antes al secretario del Juzgado”.
(TS)

La excesiva sobrecarga laboral producto de la polivalencia funcional y la sobre implicación que se deriva de la relación de cercanía con los sujetos, son problematizadas, así como la inexistencia de espacios de supervisión que permitan profundizar esta problematización, y propiciar la reflexión, el análisis, la evaluación y redireccionamiento de las estrategias de intervención:

“Me gustaría tener supervisiones (...) por momentos tenemos cosas que nos exceden, o que nos exigen cierta implicancia que no tenemos que caer en eso, mantener la objetividad es difícil estando siempre sola. Es lo que yo pienso, como yo lo pienso, no lo debato con nadie, no quiero actuar por mecánica ya (...) a veces terminamos haciendo cosas más administrativas o controles que podrían arbitrarse de distinto modo, ¡les facilitamos todo ahora que pienso!”.(TS)

La formación continua, en pos de buscar aumentar los niveles de competencia teórico- metodológica, ético-política y operativo-instrumental, se convierte también en un objetivo inalcanzable:

“Estoy un poco condicionada (...) si quisiera hacer capacitaciones, debates o charlas de dos días no me permitían” (TS)

Incluso otros derechos laborales como salidas y licencias se ven afectados, ya que hacer ejercicio de ellos, resiente los vínculos con otros colegas a los que se les exige la realización de las tareas que quedan pendientes:

“Lo que implica las salidas personales, cuando tengo motivos particulares, tengo que pedir que me cubran y cuando me enfermo afectan a colegas de la localidad, cuando me tomo receso invernal de feria también, eso implica un desgaste para mis colegas porque muchas veces, por ahí me lo han planteado ellas mismas. (...)me dice “nos bombardean con los presos” que si o si son informes que hay que hacer por los plazos de condena y por eso precisan de nuestra supervisión, y ella no tiene el tiempo, está tapada con su propio trabajo en el hospital y lo tiene que hacer porque se lo ordenan por tener función pública” (TS)

En estas ocasiones, además, no se cuenta con el expediente completo, ya que la Cámara Criminal en su primera o segunda circunscripción se encuentran ubicados geográficamente en las ciudades distantes de Caleta Olivia (340 km) o de Río Gallegos (360 km) por lo cual sobre esta intervención solo se le es notificada desde un oficio con la requisitoria.

Esta polivalencia funcional, dando respuesta a pedidos de otros fueros, es también expresión del carácter de subalternidad que la profesión tiene respecto a otras en el ámbito socio jurídico:

“Es una intervención ad honorem, cuando a los abogados que serían también ad hoc se les paga, al tiempo, pero se les paga. Eso está mal para mí, están obligadas por ser una carga pública en resumen, específicamente en cuanto al TS se pide como requisito traer un informe de tal tema, claro, ni siquiera ven la información que tiene adentro el expediente (...)el delito que cometió el sujeto lo sé por la caratula pero eso nada más, no tengo un expediente que me diga si le hicieron el psicológico, cómo les fue, solamente me dicen la pericia: alguien va a salir como tutor de fulano y entrevistar al señor tal, a fin de ratificar si es real la oferta laboral, si son acordes las condiciones de trabajo, qué horarios cumpliría y demás” (TS)

Observamos en lo relatado cómo, ante las intervenciones solicitadas -y exigidas- a profesionales de otras disciplinas se acentúa la diferencia directamente percibida en la venta de la fuerza de trabajo por mantener relación contractual, es decir, a otras profesiones se les reconoce su tarea solicitada con un pago específico mientras que se mantiene una concepción voluntarista para la profesión del Trabajo Social.

La polivalencia funcional, al contar con una sola profesional del Trabajo Social que pertenece al Poder Judicial y la sobrecarga laboral que esto implica, es reconocida también por otros actores judiciales:

“Dentro de estas localidades se trabaja con varias profesionales de instituciones que dependen de otro tipo de organismos, acá cualquier organismo del Estado se utiliza mediante solicitud y bueno ante ello deben cumplir bajo las normas del deber de incumplimiento de funcionario público. Son espacios públicos y tienen que acudir al llamado del Poder Judicial, ella no solo actúa para un estamento sino que

está en 5 o 6 dependencias, muchísimo trabajo aborda”. (Agente Fiscal)

“Tenemos escaso personal porque al ser una jurisdicción chica tenemos un psicólogo y una asistente social para 25 mil habitantes, por ende se debe articular con el hospital local. Sino solemos derivar los casos a donde se nuclea, puntualmente a Río Gallegos en este caso, donde están los profesionales que pertenecen al Poder Judicial provincial, siendo a 380 km de acá, todo un tema eso”. (A. F.)

Sin embargo, otros actores naturalizan la situación:

“Siempre fue la única asistente social, no había más de una profesional social”.(J)

Aclara que nunca hubo más de una profesional del Trabajo Social pero omite informar que en Puerto San Julián contaba, diez años atrás, con un tercio de la población total actual, por ende, con mucha menos demanda hacia su tarea por la cantidad de habitantes y por la menor visualización de las problemáticas sociales que actualmente son abordadas desde el Poder Judicial.

Más allá de los límites a la intervención profesional que imponen esta polivalencia funcional y la relación de cercanía, otras condiciones laborales dentro el Poder Judicial son favorables, lo que respecta a salario, carga horaria, recesos, licencia por maternidad, días de licencia, ascensos automáticos de categoría cada 4 años. Se cuenta con dos jefes zonales del Cuerpo Pericial de Trabajadores Sociales en toda la provincia, uno ubicado en Río Gallegos y uno en Caleta Olivia quienes están abocados a diversas ciudades según sea su incumbencia geográfica. Sus funciones serían las de supervisión profesional, acordando criterios de trabajo, estadísticas del ejercicio, además de conocer y atender las condiciones laborales de cada pequeña ciudad del interior de la provincia, lo cual no se desarrolla asiduamente. En realidad, la actividad profesional es “supervisada” por estos jefes zonales, circunscribiéndose al cumplimiento de los protocolos de actuación y procedimientos de índole administrativos, en sus alcances profesionales, dada la sobrecarga laboral que tienen por la cantidad de departamentos de cada zona.

Asimismo, explica la profesional entrevistada que no pueden constituirse estos cuerpos periciales en Puerto San Julián ni en la zona centro de la provincia por la cantidad de profesionales existentes y por las categorías “bajas” que tienen los peritos trabajadores sociales que allí se desempeñan, pero paradójicamente hasta el momento no se produce el nombramiento de nuevos profesionales:

“Le planteé a mi Jefe, a los dos jueza de Familia y el Juez de Instrucción que estaba sobrepasada de trabajo y que veía necesaria la posibilidad de ingresar a una colega o un colega. Los dos hicieron el pedido formal al Tribunal, pero hubo una respuesta del Tribunal diciendo que las estadísticas en ese momento no justificaban el ingreso de un nuevo profesional al área” (TS).

Otro aspecto no menos importante para el ejercicio profesional en pequeñas localidades es la falta de espacio físico, debiendo compartir con otros trabajadores las oficinas, lo que implica, por ejemplo, al hacer entrevistas en sede judicial tener que pedir la oficina a otros trabajadores para poder realizar esta tarea. En el caso analizado, al no contar con un espacio físico propio, la trabajadora social termina compartiendo oficina con otros agentes con tareas administrativas, mientras que los dos peritos psicólogos tienen un espacio reducido, en una cámara Gesell, dispuesto a su vez como gabinete.

Además, es importante resaltar la multiplicidad de tareas que implica la polivalencia funcional:

“Muchos casos de violencia de género, violencia familiar, los beneficios de semi libertad de internos, los tramites como alimentos, las salvaguardas, la opción a régimen de visitas, regímenes de comunicación o la visita para generar canales de comunicación y responsabilidad parental, información sumaria, abordajes de menores, protección de personas y también ayudas en casos de adicciones, consumos” (TS)

Tanto la Defensoría, como la Oficina de Asistencia Letrada, la Comisaría de la Mujer y la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad no cuentan con trabajador/a social. Habitualmente funciones profesionales del Trabajo Social son realizadas por personal administrativo de tales dependencias quienes, como se ha abordado durante el capítulo II, con cierto voluntarismo en relación a las problemáticas sociales “hacen de trabajador social”.

A su vez, como contracara de tal polivalencia se observa también que el gabinete psico social, por la sobrecarga laboral existente, muchas veces trabaja de forma compartimentada, lo que resulta en intervenciones desde miradas que fragmentan la situación problemática y al sujeto que la atraviesa. En concordancia con lo expuesto en el capítulo II gran parte de la exigencia al profesional se expresa en términos de medición del rendimiento, siendo el ejercicio profesional difícil de cuantificar, como sucede con las estadísticas oficiales nombradas previamente. Es importante retomar lo planteado durante el capítulo inherente al ejercicio profesional con respecto a tener presente que el campo de intervención del Trabajo Social se ubica en un espacio complejo y contradictorio entre las instituciones - con una tensión latente entre los dispositivos instituidos e instituyentes- que brindan servicios y las necesidades, demandas y reclamos de la población.

Recuperando lo reflexionado en el desarrollo, entonces, ante las condiciones laborales que se describen, es importante que tanto la profesional como todo el colectivo puedan trabajar en alternativas creativas de intervención que no reproduzcan irreflexivamente las demandas institucionales sino que adopten decisiones con solidez profesional. A partir de allí, se podrá responder a la realidad social clarificando posiciones ético-políticas y teórico-metodológicas al interior del colectivo profesional, debatiendo acerca de las decisiones táctico operativas, entendiendo a la profesión como algo no homogéneo así como tampoco lo son los testimonios desde cada espacio socio ocupacional.

Características y significado social de la actividad profesional

Se considera, a partir de las elaboraciones teóricas presentadas en esta tesis y de la investigación empírica realizada, que la actividad profesional del/la trabajador/a social o asistente social en el ámbito socio-jurídico - denominado perito social, se configura predominantemente como una función de control social, característica que se refuerza en las pequeñas localidades.

Vinculando el análisis realizado sobre las condiciones de trabajo de los profesionales del Trabajo Social en ámbitos socio jurídicos de pequeñas localidades de la Patagonia con las funciones asignadas, se destaca que parte de la sobrecarga laboral se debe, no solo a la realización de tareas que exceden las incumbencias profesionales en este ámbito, como las de asistencia y a las demandas desde otros fueros e instituciones estatales, sino también a la demanda al Trabajo Social de funciones que podrían ser desempeñadas por otros trabajadores:

“Es fundamental, trabajar lo local y que ese día mismo del hecho nos comuniquen a nosotros, ahí lo que tenemos que hacer es preparar la supervisión la cual consiste en dar un control de legalidad -se llama- sobre esta acción porque en verdad se está restringiendo la libertad de una persona - refiere a internaciones involuntarias ante intentos de suicidios en adolescentes (NdeR) -, entonces se intenta que esto sea el tiempo lo más corto posible, y evaluar cómo se replica esto en los menores de edad y sus internaciones” (Jueza)

Aquí se incorporan funciones de control de índole más administrativo, o también se le pide conocer sobre la asistencia de los sujetos a distintos espacios de atención o tratamiento, cuando bien podría hacerse mediante otro procedimiento:

“Bueno a veces puede ser que terminamos haciendo cosas más administrativas, o controles que podrían arbitrarse de distinto modo, les facilitamos todo ahora que pienso -se sonríe-” (TS).

Estas medidas evitarían parte de la sobrecarga laboral de la trabajadora social, pudiendo abocarse a un trabajo exhaustivo en sus entrevistas y realizar otros abordajes más integrales, sobre todo cuando ingresan casos de tratamiento urgente y de gravedad por guardia:

“Te cuento, nosotros empezamos a armar un dispositivo (...) si ellos -refiere al Área de Salud Mental del Hospital (NdeR)- establecen la terapia psicológica semanal, pero ellos no pueden controlar su cumplimiento entonces nosotros con el equipo de acá - refiere al gabinete psico social del Poder Judicial (NdeR)- no hacemos el tratamiento, pero sí lo controlamos o verificamos que se haga. Sería hacer un seguimiento, eh... que están yendo, cuales están siendo indicadores de riesgo, cómo poder

acompañar y eso lo hacemos con la Defensoría, en conjunto, porque tienen esos chicos un abogado defensor y así nos comunicamos. También tenes revisión de casos, en algunas ocasiones hemos citado a los padres para bueno, ver qué está pasando, por qué no prestan ayuda al niño, por qué no tienen presencia de padres, porque algunos te digo hasta tienen doble internación” (J).

Dicha mirada está asociada a una idea de seguimiento como control, más que de acompañamiento y diálogo, lo que sería una mejor opción a la hora de hacerse presente en las vidas singulares de los sujetos. Así, se continúa con demandas o prácticas que remiten a los orígenes de la profesión, sosteniendo lógicas de ser los “verificadores” que envía el funcionario para realizar tareas de averiguación in situ con los justiciables.

“Al principio me resultaba raro, me sentía autoritaria y era mi primer trabajo recién recibida, pero con el tiempo revalorice mi profesión. Por ejemplo, al hacer intervenciones aclarás “lo dispuso el Juez, es por orden del Juez”, yo solo tengo que informar y nada más, no me puedo hacer cargo del problema de todos, sino te enfermas” (TS)

Al recaer todas las pericias sociales sobre una sola profesional se obtura la mirada y se tiende a consolidar cierta modalidad instrumentalista del accionar profesional. También ocurre que fuera del encuadre de entrevistas recibe preguntas de diversos sujetos sobre las causas o sentencias a modo de cuestionamiento ya que su mirada y su informe incide sobre ciertas decisiones relativas a sus vidas. Por lo expuesto, la incorporación de profesionales del Trabajo Social constituye una necesidad imperiosa. Cabe resaltar que siempre se refieren a “la” profesional, en femenino, lo que remite a los orígenes y al, hasta hoy vigente, carácter feminizado de la profesión:

“Es una demanda que cubrir hace rato, se está solicitando la cobertura de mayores cargos para licenciadas en Trabajo Social hace unos siete años, pero por ahora no hubo avances desde el Tribunal (A. F.)”.

En relación al significado social de la actividad profesional, las lecturas y posicionamientos de les profesionales son diversos, expresando la heterogeneidad del colectivo profesional en cuanto a la asunción o cuestionamiento del carácter de vigilancia y moralización que, por ejemplo, la entrevista domiciliaria pueda tener:

“Hay que evitar lo rutinario, esto de viene la chusma de la trabajadora social, una vez escuché eso mientras entraba a un domicilio, pero bueno yo lo que debo hacer es informar todo, ahí poder prever un riesgo, así que, que me digan chusma por ir a las casas no me molesta ni un poco” (TS)

“(…) a mí la cuestión ambiental, la condición de la vivienda no me interesa, no pongo si está ordenado, si los muebles tal cosa, me parece que no hacen al tema en sí, pero la colega de X ³⁵³ ponele, les abre la heladera, cuenta las botellas de cerveza, de agua, se sirve leche para ver si está cortada, abre el arroz a ver si tiene gorgojos.... No soy obsesiva, pongo a lo sumo: se observa orden e higiene en los ambientes, mobiliario suficiente, punto” (TS)

Superando la función de control, los profesionales de Trabajo Social, son quienes pueden aportar desde un posicionamiento crítico, una mirada integral, ampliada, sobre el devenir del sujeto en su contexto inmediato, aspecto valorado por otros actores:

“(…) hace los domiciliarios con la psicóloga o el psicólogo, las internaciones, los apoyos y salvaguardas en casos de discapacidad o enfermedades crónicas como alcoholismo; y lo que yo le pido es que me vinculen la información que tienen, porque a veces en el caso de internaciones estamos agotando a la persona porque está con la operadora que le dará la medicación y yo voy a ver si tomó o no la medicación, entonces, lo que hacen es vincular la información del hospital con la información del seguimiento en su casa, vinculándola con las escuelas, ella – la trabajadora social (NdeR) - es la que me hace una mirada más globalizada dentro de ese equipo” (J).

“Sugerencias se aceptan sí, siempre (...) cuando nos interesa una determinada cuestión, directamente en el informe, aparte del informe habitual se le solicita que amplíe en tal o cual sentido; lo mismo a los peritos psicólogos, hay que destacar la especificidad de cada uno en su órbita y respetar sus formas de trabajo e indagación” (A.F)

“Exponen siempre cosas que no teníamos en cuenta, explican desde otro lugar, como si se pararan de ambas veredas”. (A F.)

La competencia profesional del Trabajo Social para abordar el amplio abanico de problemáticas sociales de las nuevas organizaciones familiares también es valorada:

³⁵ No se identifica por razones éticas.

“También trabajamos mucho con la asistente social en el tema de los niños, con causas de familias, ahí todas las causas que tengan que ver con menores interviene la trabajadora social entonces interviene en: todas las violencias, en todos los regímenes comunicacionales, en los cuidados personales, en todo lo que tenga que ver con menores; interviene en todas las cuestiones de género donde yo necesito saber cómo se van llevando las medidas, cómo se van cumpliendo los objetivos, básicamente en todas la intervenciones está”.(J)

Pese a cierta apertura de mirada sobre las incumbencias profesionales y competencias de los trabajadores sociales, se conservan estructuras rígidas hegemónicas donde se decide sin dar participación al profesional en los pasos previos a la toma de medidas judiciales. Se afianza así, la adjudicación al profesional de ser auxiliar del juez, una especie de vigilador con título universitario:

“Antes veíamos que le dábamos una participación a ella – la trabajadora social (NdeR) - antes de que yo tome intervención del caso y ahora lo que hacemos con el informe social es hacerlo después de esa parte de que se tomen medidas...sería como los ojos nuestros en la casa a partir de las medidas que tomamos” (J)

Asimismo resulta importante remarcar que la impronta que tenga cada Juez/a en su forma de trabajo permitirá la apertura y el diálogo permanente o no, en este caso, puede observarse cierta flexibilidad y apertura de la entrevistada al momento del intercambio de posturas profesionales. Como se expuso al citar a Nicolini (2011) el grado de accesibilidad a las autoridades judiciales, influirá en el intercambio de saberes para pensar en “soluciones” viables en cada caso singular. En este sentido, a pesar del rol tradicionalmente asignado al Trabajo Social, se plantea la posibilidad futura de incluir sugerencias de la profesional y que ella participe en reuniones para configurar estrategias conjuntas:

“Ahora empezamos -este año -a hacer reuniones que vamos a empezar a trabajar con los profesionales y el secretario; la idea es ahora incluir a la asistente social y los psicólogos para dinamizar en cuanto a la estrategia en cada caso y participar ellos en la cocina de las decisiones que vamos tomando nosotros en los casos de seguimiento, porque cada caso tiene particularidades diferentes” (J).

En otro sentido, existen situaciones en que las profesiones hegemónicas tienden a invisibilizar los alcances profesionales, entendiendo por ejemplo que, se podría tomar una foto del hogar sin reparo de requerir consideraciones o conclusiones de las propias problematizaciones que haga el/la profesional -relacionadas siempre con los objetivos

que tenga tal intervención-, como por ejemplo, en una charla informal de la investigadora con un perito psicólogo este afirmó que “los asistentes sociales no pueden sacar conclusiones” (P).

En estas afirmaciones, apoyadas en lógicas funcionalistas, los trabajadores sociales darían fe de lo que el Juez pide corroborar, de esta manera se subestima y subalterniza la profesión, eliminando todo margen de criticidad a la acción y a las finalidades profesionales en el conocimiento de la realidad de ese sujeto, obturando así la posibilidad de análisis, cuestionamiento, reflexión y mucho más aún de una intervención con horizonte emancipatorio. Desde esta lógica, en los proveídos de los expedientes, se piden pericias donde se suelen reducir la intervención a la observación de aspectos económicos y habitacionales – orden, limpieza e higiene- y comportamientos esperados:

“(…)Es muy diverso porque el principal sostén de una familia cuando tiene, por ejemplo, que alojar un detenido, como tutores se debe tener una salida económica medianamente adecuada (...) no tiene que haber registros de violencia dentro de ese núcleo familiar, además de diversas cuestiones, el tema de alcoholismo, la adicción y demás” (A.F)

Se reduce así el ejercicio profesional a una función de comprobación, y se espera de la pericia social información sobre ingresos de la familia y antecedentes judiciales, y no el acompañamiento, por ejemplo, de los privados de su libertad y que cumplen condena, que debería ser exhaustivo e integral desde un Patronado de Liberados, organismo con el que no cuenta la localidad. Entonces, la intervención es aislada y acotada a la comprobación de las salidas laborales y la existencia o no de conductas “indebidas” del sujeto condenado.

De todos modos, el entrevistado realiza una afirmación interesante que reflejaría apertura al sostener interés en adaptarse a los cambios en la sociedad pudiendo cambiar los criterios justiciables. Sin embargo, luego de varias expresiones reafirma cierta marcación a lo que la profesional deberá observar:

“No tanto como reuniones, pero sí se les hace indicaciones de los diferentes casos sobre lo que se necesita como pericia o como informe, para que sea más detallada alguna cuestión por sobre otra” (A. F).

Puede realizar sugerencias, dando su punto de vista profesional, debiendo afianzar ese marco de autonomía para la toma de decisiones:

“Siempre que este mencionado el salvo mejor criterio de su señoría, porque son observaciones y sugerencias que el profesional hace, pero quedan en consideración del Juez si la aplica o no”(TS)

Este margen de cierta criticidad lo reconoce ya que termina aseverando que quien resuelve es el Juez ya que desde el TS:

“Nosotros somos peritos y lo que hacemos es hacer una práctica forense de nuestra especialidad; informamos de una forma que pueda comprender y considere como una valorización para que mejore la situación de riesgo o la situación de la problemática que los afecta”(TS)

En este sentido, no se debe reducir la intervención a ser informante, ni ser un gran descriptor:

“A veces hay diferencias en cuanto, a veces suele pasar que por ahí que no consideran adecuado lo que vos estas sugiriendo, o por ahí, considera que si pero agrega algo más o por ahí simplemente si lo acepta y lo pone a consideración para resolver, la mayoría de las veces se incorpora lo que considera mi postura” (TS)

Desde este aporte sería interesante cuestionar qué se considera por adecuado y si esta mirada sobre qué sería adecuado desde la institución, o lo adecuado para sí mismos, sería ello un debate aparte.

Resulta complejo realizar una pericia de tipo diagnóstico con puntos periciales, una precisión inacabada de la situación del sujeto, descartando otros determinantes de su vida cotidiana, y su inherente movimiento, en el marco de un trabajo con la totalidad. Las providencias, así llamadas, con cierto perfil teocéntrico en la categoría, llaman a indagar ciertos aspectos que se enumeran o sobre “cualquier otro dato de su interés”, además de llamar al “Indicar sobre el desarrollo de las presentes medidas”; Según postula mientras dice adaptarse a los cambios:

“Estoy contenta con el trabajo, puedo proponer bastante y cada familia es un mundo, uno no puede corregir las cosas, suceden”.

En este romper con lo rutinario, romper con las ideas acerca de nuestro quehacer profesional se podrá atender a lo que se nos requiere, destacando el margen de acción y de poder ante lo que se le sea impuesto para poder “hablar de otras cosas”. Es en este punto que se hace central hincapié sobre la posibilidad de profundizar en la visibilización de aquellos derechos vulnerados del sujeto, así como de las condiciones de la vida cotidiana en cuanto su universo de significados, la trama vincular, la dinámica comunicacional, los lazos sociales, los referentes cercanos, actores de contención, familia extendida, grupos de pertenencia y ampliados, la organización familiar como aspecto de la cotidianeidad, aquellos canales informales de trabajo, las condiciones materiales de subsistencia o estrategias de supervivencia si las hubiere.

Permite observar esto que el orden o limpieza en una vivienda, si es lo que se espera leer en un Informe, no garantizaría por ejemplo, que se respeten y garanticen derechos plenos de los miembros del grupo familiar conviviente ni se preserve su bienestar y desarrollo en plenitud así como tampoco el acceso y la garantía de acceder a servicios

básicos universales.

Desde estas líneas la colega asevera que su trabajo es ser herramienta del Juez, exponiendo en tal sentido - aunque resulta debatible el termino de ser herramienta de- esto debe ir de la mano de la permanente vigilancia epistemológica para no asumir los problemas como propios, sino ir manteniendo una mirada objetiva, critica y reflexiva; donde la autonomía relativa prepondere más allá de lo que dispuso el Juez ante cierta cuestión de entrega:

“Sería como los ojos nuestros en la casa a partir de las medias que tomamos.” (J)

Ante ello no debería ubicar a la profesión en una posición de subalterna, siendo el profesional independiente pudiendo dar respuesta, atento al requerimiento encausado pero centrando el foco en que la decisión de aquello sobre lo que se dice -y aquello que se decide no decir- será del propio profesional en el marco del secreto profesional, la confidencialidad y el resguardo de aquellos a quienes se entrevista. Coincidiendo con Pilar Fuentes (2002) aquello que no está escrito nunca existió, esto remite a una elección, selección y decisión intencional.

En el Trabajo Social se arriba a realizar aproximaciones diagnósticas, diagnósticos situacionales, caracterizaciones, consideraciones profesionales, observaciones y acercamientos a la situación, como forma de conocimiento y develamiento de situaciones e injusticias invisibilizadas

“Considero que mediamos como para facilitar soluciones, pero sirve a la vez no pensarse en el centro de la escena sino ser mediador en el conflicto nada más...y bueno, ¡nada menos!”(TS).

Así la colega realiza sus observaciones profesionales y las enuncia en un apartado que llama “diagnóstico”, más allá de si son tomadas o no por los funcionarios ya que no son vinculantes en ningún caso. Remarca un interés en poder mantener supervisiones en el espacio profesional a fin de no caer en intervenciones “mecánicas” pudiendo ir modificando sus modos de intervención:

“Si, claro, vas viendo qué resulta mejor en la intervención, cuáles son las técnicas con las que mejor te moves” (TS)

“Mi trabajo es ser una herramienta del Juez, vos poder tener mucha objetividad pero mi subjetividad también pesa porque voy a estar mirando más tal cosa, escuchando mejor aquello, prestas distinta atención a lo otro, de hecho pasa eso.(...) con los cambios, ponele con el nuevo Código Civil, el régimen de visitas se llama régimen comunicacional, la tenencia pasa a ser cuidados parentales, con el cambio de agosto del otro año, entonces siempre sirve estar adaptándose”.

Para trabajar sobre lo instituido, lo que garantiza la producción material y la reproducción espiritual - simbólica³⁶- de una serie de valores que plantea el espacio socio ocupacional, es necesario ir generando autonomía y alianzas con lo instituyente, con aquello que tensiona y busca la transformación. Por tal motivo, resulta necesario revisar la construcción discursiva sobre las demandas a la profesión y sobre los argumentos de las impugnaciones de los letrados de parte, si las hubiere.

Como se abordó durante el capítulo II de la presente Tesis, desde Marilda Iamamoto, los profesionales del Trabajo Social no son profesionales absolutamente determinados, pueden elaborar estrategias, dentro de su autonomía relativa, para no continuar con los mandatos conservadores basados en el disciplinamiento - desde la tutela y el control- de las clases subalternas. Será importante entonces poder trabajar en la permanente revisión del ejercicio y la toma de decisiones para poder ampliar los márgenes de su relativa autonomía como profesional. Coincidiendo con Montañó (2000), si los profesionales se limitan solo a la atención de la demanda no verán las demandas emergentes ni permitirán el aprovechamiento de las políticas sociales como instrumento para favorecer la organización popular. En suma, la intervención profesional no debe reducirse a una “compulsión al hacer” ni un trabajo que responda a modelos ni protocolos de intervención, sino debe ser pensada críticamente y planificada con un horizonte de autodeterminación.

Concepciones sobre les niñes, adolescentes y las familias

Recuperando lo postulado en el capítulo III de esta Tesis, las organizaciones familiares adquieren nuevas formas de configuración, diferentes a la familia nuclear burguesa disciplinada. De todos modos, perdura una mirada conservadora y normalizadora sobre el cómo ser familia que se corresponde con la función de control asignada a la profesión por distintos actores judiciales, de ahí la importancia de intervenir posicionados en una perspectiva crítica.

Se debe tener muy presente entonces que desde los comienzos del Estado moderno se otorga a la institución familia la función de la inscripción temprana en los sujetos de horarios, rutinas, determinación de roles, configurándose para les niñes en un encierro normalizador, Quinteros Velázquez (2007). La función de la madre, según Jelín, era el disciplinamiento, una función “higiénica” y política, mientras el padre lo era por delegación estatal, con obligaciones y derechos a él atribuidos.

Sin embargo, entendemos que en el cotidiano las unidades familiares no se conforman estableciendo tales funciones esperadas sino que presentarán diversidad de trayectorias, configuraciones, necesidades, determinantes sociales, económicos, políticos e ideológicos y estrategias familiares de vida.

³⁶ En palabras de Bajtín “Cuanto mejor dominamos a los géneros discursivos, tanto más libremente los aprovechamos, tanto mayor es la plenitud y claridad de nuestra personalidad que se refleja en este uso (cuando es necesario), tanto más plástica y ágilmente reproducimos la irrepetible situación de la comunicación verbal; en una palabra, tanto mayor es la perfección con la cual realizamos nuestra libre intención discursiva” (Bajtín, 2008:267).

Tal como se expuso analíticamente los modos en que son abordados estos escenarios diversos y estrategias varias podrían pensarse desde Senatore y Capello como procesos que se identifican como mecanismos de judicialización de la vida cotidiana, criminalización de la pobreza y criminalización de la protesta social (asociando la primer categoría al concepto de peligrosidad, la segunda correspondería a una noción disciplinaria de “integrar a los desadaptados” y la mantención de un status quo. Por ende, se precisan realizar lecturas de la realidad como construcciones histórico concretas con determinadas relaciones sociales inherentes al modo de producción capitalista con todo lo que ello conlleva.

Como se ha analizado en el capítulo IV, en la configuración del sistema capitalista se busca institucionalizar el orden a través de la legitimación de un arsenal punitivo, para Senatore y Capello (2011) en el enfrentamiento de la “cuestión social” la coerción es mantenida a partir de los mecanismos de moralización desde un control social de índole informal. La “desviación” en la conflictividad social podría ser leída desde perspectivas psicologizantes y patologizantes como problemas individuales sin considerar las problemáticas relacionadas a la expulsión como fuerza de trabajo del sistema productivo. Estos grupos, se conforman heterogéneamente donde se direccionan mecanismos de internamiento asistencial e internamiento correccional en un accionar de punir la pobreza. Para Senatore (2014) las disciplinas actúan desde un “arsenal tecnológico” para la preservación, control y producción de la vida de la clase trabajadora, en especial, en la familia que compone esta clase.

El lugar central otorgado a la familia en la estructura del sistema judicial suele responder a este dispositivo por excelencia de disciplinamiento social vinculado a una “normalidad idílica” a la que subyace una mirada funcionalista preestablecida, considerada en el marco de la norma, y legitimada así como “lo normal” acompañado de adjetivaciones biologicistas. Desde una perspectiva profesional crítica, los trabajadores sociales buscarán conocer las condiciones de vida de los sujetos y las estrategias en la organización del cuidado de cada grupo familiar en su particularidad.

En contraposición a ello, se evidencian concepciones sobre la normalidad basadas en el ideal de familia monogámica blanca y burguesa. El preconceito que se mantiene se realza en la idea de que la presencia física de los padres -pareja de heterosexuales- en la vivienda para el caso de internaciones involuntarias por intentos de suicidio adolescente, garantizaría un acompañamiento y protección integral al mismo.

Nicolini (2011), como se desarrolló en el capítulo IV, plantea cómo es el expediente aquel documento que corporiza una práctica, a partir de nociones que implican un abordaje desde parámetros de control. Según una de las entrevistadas:

“También tenes revisión de casos, en algunas ocasiones hemos citado a los padres para bueno, ver qué está pasando en esa familia, porque no prestan ayuda al niño, por qué no tienen presencia de padres, porque algunos te digo hasta tienen doble internación así que bueno “(J)

En este punto es el sistema judicial llamado al resguardo del sujeto y sus derechos, acompañado de una mirada tutelar y disciplinadora que mantiene, al mismo tiempo, el status quo ante cualquier conflicto emergente.

El punto importante es considerar entonces la vida cotidiana como insuprimible, con vistas a la totalidad compleja en donde se encuentra inmerso el sujeto. La colega hace mención al uso del término familia disfuncional, refiriendo que es empleado más por el área psi sin detenerse en realizar una problematización del uso del mismo:

“Generalmente lo solemos usar más con los psicólogos, y no los trabajadores sociales por nosotros solos, o sea en los interdisciplinarios ellos pueden plantear eso”(TS).

Para evitar la lógica de culpabilización familiar individual ya referida por aquello que vivencia el sujeto, se debe cuestionar los proveídos judiciales de modo tal que no se indique la búsqueda de datos pensados en una enumeración de padecimientos, donde no se hace énfasis en conocer la complejidad que vivencian los sujetos sino que se enlistan aspectos a conocer, como una lista de carencias, que no siempre se condice con el objeto del expediente desde la apreciación profesional. Cabe remarcar que dicha consideración no se plantea de modo similar al plasmarse los pedidos al área psi.

Parte de este cuestionamiento está orientado por el planteo de Mallardi (2014) de poder superar la mera descripción del estado de situación de la unidad familiar para poder analizar las múltiples determinaciones de la realidad social que impactan sobre el cotidiano de cada unidad familiar. Así, se evitarían visiones reduccionistas, que observen los elementos componentes de las problemáticas como causa-efecto para evitar categorizar las vidas en marcos clasificatorios y calificadorios estandarizados.

Desde sus aportes, Azcacibar sostiene que en el ámbito judicial los informes tienen el nombre de pericias, siendo parte de una indagación estratégica contextualizada, orientada para dar respuesta a una inquietud externa. Azcacibar, Chillemi, Novillo y Utrera (2016) señalan que las tareas profesionales en este ámbito no son ni de seguimiento ni de asistencia siendo una intervención en terreno acotada, con un accionar profesional que se concreta en la forma del dictamen pericial -a partir de dar respuesta / asesorar frente a un interrogante que lo originó-.

La elaboración de las pericias implica de esta manera, la interpelación del mundo cotidiano de las familias, sus grupos cercanos y personas con los que se interviene. Como ya dijimos, los distintos fines que tenga la obtención de información sobre la vida cotidiana de los sujetos, plasmado en registros, informes y estadísticas, pueden orientarse a ser mecanismos de control, siendo parte de los formalismos institucionales o bien pueden evidenciar situaciones de injusticia y movilizar reclamos Oliva (2007), pudiendo construir pericias sociales que permitan “particularizar lo universal” (Pontes, 2004).

En el discurso, oral o escrito se expresa, desde el lenguaje profesional, los fundamentos de la intervención y las concepciones ideológicas que se sustentan sobre los sujetos y la sociedad:

“Siempre trato de no dejar de hablar como hablo en mi carrera y en todo caso si tengo que amoldarlo a la normativa jurídica me puedo amoldar a las denominaciones que se ajustan, pero en realidad siempre trato de usar las mías porque también las mías calculo que sirven y no dejan de ser lo mismo. Por ejemplo, en vez de decir menor puedo decir el niño o el joven, o la adolescente tal porque menor, ponele que es como la usan en la instrucción, y ahí ellos no te van a decir el niño”(TS).

Sabemos que la referencia a los niños y adolescentes como menores, expresa una concepción homogenizadora sosteniendo el paradigma tutelar del Patronato por el uso de determinado lenguaje como entiende la entrevistada.

Además, las expectativas de los sujetos se encuentran siempre presentes al acudir, por situaciones conflictivas o no, a las dependencias judiciales; muchas veces, tomándolo como última opción, en otras, como primera queriendo obtener una ayuda, un acompañamiento, una respuesta, una solución ante cierta hostilidad entre partes. Se debería evitar que, como sucede habitualmente, las respuestas tengan larga espera, las situaciones de conflicto se cristalicen en el tiempo, tornándose en una especie de tirones para ver quién “gana la pulseada” buscando canales alternativos, configurados la mayoría de las veces por dificultades en torno a las condiciones materiales de reproducción:

“Muchos padres en conflicto usan a los hijos como caballitos de batallas y en algunos casos son eternos, permanentemente se media y ahí es complicado porque dependen si o si del Juzgado para todo. No se pueden poner de acuerdo y hay estrategias que van pasando y después se vuelven a poner en conflicto, se torna tedioso a veces porque no llegan a nada viven inmersos en ese conflicto”.
(TS)

Se afirma desde los análisis articulados expuestos que en el sistema judicial y en sus áreas particulares de intervención existen miradas de la contingencia pesar de que subsisten concepciones conservadoras y normativas sobre los niños y las familias. A partir del análisis desarrollado, se han podido conocer las particularidades que adquiere la intervención profesional de los Trabajadores Sociales con niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad en el ámbito socio jurídico en pequeñas ciudades de la Patagonia austral, en el período 2016-2019, haciendo eje en las significaciones sociales sobre la profesión, en las concepciones sobre la niñez y las familias; y en las condiciones de trabajo allí concernientes.

El análisis de las particularidades del campo socio jurídico aquí expuesto permite identificar que el carácter conservador, inherente a la funcionalidad social y a la estructura jerárquica del sistema judicial, existente tanto en grandes ciudades como en pequeñas localidades donde se sostengan lógicas de control social sobre los sujetos. Esto se manifiesta en las demandas efectuadas hacia los profesionales del Trabajo Social, cuya autonomía relativa en este espacio socio-ocupacional en pequeñas localidades está constreñida por condiciones de trabajo caracterizadas por la polivalencia funcional, la sobrecarga de trabajo y por la relación de cercanía con los sujetos de la intervención

profesional, que los obligan a repensar constantemente su lugar para la toma de decisiones.

Las particularidades que adquirirá el accionar judicial y las respuestas a las situaciones problemáticas por las que atraviesan los niños, adolescentes y las familias judicializadas en estas pequeñas urbes dependerán de los pocos actores involucrados, centralmente juez/a, agente fiscal y peritos, obviamente con grados diversos en sus posibilidades de imprimir determinada direccionalidad social a este accionar. A su vez la direccionalidad social buscada tendrá como determinaciones importantes la trayectoria de vida, la experiencia laboral, y la formación profesional de estos actores. En este sentido, entonces, existirán pocas posibilidades de que las demandas hacia la profesión no reproduzcan la histórica funcionalidad de control social y normalización de los niños y las familias de las clases subalternas, y de no brindar respuestas profesionales que la concreten si no se adopta una mirada crítica sobre el propio devenir del accionar del Poder Judicial, sobre el cual hay actualmente nuevos aportes y debates; el significado social asignado a la profesión, para desarrollar estrategias que busquen dar respuestas a las legítimas necesidades e intereses de los niños, adolescentes y familias.

Por lo mencionado, las estrategias profesionales formarán parte de una decisión política, donde los elementos táctico-operativos en Trabajo social no serán dispuestos como técnicas, sino que serán configurados como momentos de la estrategia de intervención dentro de la dimensión operativo instrumental: tanto el Informe Social, como la entrevista y la visita domiciliaria. Estos elementos no serán un fin en sí mismo, sino que se enmarcarán dentro de una estrategia más amplia. En este sentido, en la función pericial -compartida con otras disciplinas ante una misma situación donde se los convoca a dar su parecer- es necesario comprender que existe una mercantilización de la fuerza de trabajo, vendida al Estado, donde se establecen los lineamientos para los procesos de intervención, por lo que se debe inferir que la institución no tendrá las mismas finalidades que el/la profesional del Trabajo Social en su ejercicio profesional fundado.

El perseguir constantemente la solidez en las argumentaciones y fundamentaciones a la hora de intervenir y exponer la postura profesional sin eclecticismos permitirá desarrollar un ejercicio profesional que no sea hablado por el sentido común, que conserve y afiance la mirada desde el Trabajo Social crítico y no se subordine a la mirada rígida y punitiva de un sistema de poder.

“Otros vientos empezarán a soplar respuestas...y esperanzas”

Subcomandante Marcos

EZLN, 1997

Consideraciones Finales

Poesía: Loa a la dialéctica

Con paso firme se pasea hoy la injusticia los opresores se disponen a dominar otros 10.000 años más. La violencia garantiza: “todo seguirá igual”, no se oye otra voz que la de los dominadores, y en el mercado grita la explotación: “ahora es cuando empiezo “y entre los oprimidos, muchos dicen ahora : “jamás se lograra lo que queremos “ , quien aún esté vivo no diga “jamás” los firme no es firme, todo no seguirá igual cuando hayan hablado los que dominan ,hablarán los dominados .

¿quién puede atreverse a decir jamás ¿de quién depende que siga la opresión ¿de nosotros? ¿de quién que se acabe ¿ni nosotros también que se Levante aquel que esta abatido ¡aquel que está perdido ,qué combata quién podrá contener al que conoce su condición!

¿pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana? ¡y el jamás se convierte en el hoy mismo! –

Bertolt Brecht

A partir de la pregunta inicial sobre “¿Cómo se caracteriza la intervención profesional de los trabajadores sociales que trabajan con niños y familias en situación de vulnerabilidad desde ámbitos judiciales en la provincia de Santa Cruz?” presentamos un recorrido temático, desde los aportes de diversos autores, explicitando las categorías de análisis que, adoptando una forma relacional entre sí, han permitido realizar esta aproximación teórica al objeto de estudio: el ejercicio profesional de los trabajadores sociales en el ámbito socio jurídico en pequeñas localidades de la Patagonia.

El análisis emprendido buscó dar respuesta a interrogantes iniciales, realizando para ello un recorte de la situación temporo-espacial, acotándose a un área específica donde interviene el profesional del Trabajo Social, a fin de poder realizar caracterizaciones y destacar particularidades. Cabe señalar, sin embargo, que no dan cuenta de la totalidad del colectivo profesional que trabaja en el área socio jurídica de la provincia. En este sentido, los recorridos presentados, ya sea sobre los modelos de Estado, los orígenes de la profesión, las concepciones de la niñez y familias y las respuestas del Estado para definir su “protección” traducen el devenir histórico y el carácter que adquirió la profesión del Trabajo Social en diversos momentos y hasta la actualidad, considerando que coexisten diversos designios profesionales que expresan distintos proyectos societales.

La caracterización que presentamos es parte de una problematización necesaria ante la complejidad que tiene las manifestaciones de la “cuestión social”. El Trabajo Social delimita su accionar construyendo su objeto de intervención en la propia práctica. En este escenario es donde se evidencian pujas de poder, luchas y diversos intereses entre actores, además de las propias características que asume cada espacio de intervención. Tal visibilización y comprensión coyuntural crítica permite evitar que los profesionales se configuren en agentes de control o meros gestores de políticas sociales.

Durante el capítulo I pudimos dar cuenta de que cómo el Estado ejerce funciones de control social y de asistencia a la vez, explicitado en el abordaje de las políticas sociales. Tal como describimos, las políticas sociales son producto de la historia, producto de una tensa relación entre clases dominantes – Estado y clase trabajadora-subalterna, cuyas funciones son, ser complemento salarial para los sectores desfavorecidos, paliando las desigualdades, garantizando el consumo y la reproducción ampliada del capital; pudiendo además otorgar legitimación del orden social a través de la descomprensión del conflicto y el consenso. Se identifica que existe un punto contradictorio en el ejercicio del Trabajo Social desde una perspectiva crítica, por ser una profesión que busca la emancipación de los hombres y, a su vez, constituye un brazo articulado del Estado - principal comprador de su fuerza de trabajo- para mantener el status quo a partir del control social de las clases subalternas como ejecutor de dichas políticas. Debe tenerse en claro que la formación político ideológica es constitutiva de la formación y del ejercicio del Trabajo Social.

Desde los orígenes de la profesión tal como profundizamos, les profesionales del Trabajo Social han sido mayoritariamente mujeres, relacionadas al rol del cuidado, aspectos que siguen estando vigentes en el imaginario social en nuestros días. Esto se vincula con una imagen de ayuda, asistencial, gestiva ¿y de derechos?. A partir de lo desarrollado a lo largo del capítulo I, consideramos que es el Estado el que refuerza estas lógicas, sumado a la consolidación de las desigualdades entre géneros desde las políticas sociales y sus contratos sociales.

En Santa Cruz, cabe destacar, lugar alejado de las grandes ciudades, se evidencia un fuerte sesgo doctrinario de la Iglesia y de las fuerzas armadas como instituciones que construyen y moldean subjetividades. La Patagonia sur registra un modelo neoextractivista, donde subyace una prevalencia de alianzas entre varones con una segregación territorial que revela la fragmentación racista, acompañada de injusticia ambiental capitalista. Este elemento se le suma al resto de las injusticias de clase, de raza, de género, injusticias de tipo económicas y sociales. La Patagonia, particularmente, se configura como un espacio diferencial, como una zona de sacrificio relacionado al fracking, a la minería a cielo abierto y subterránea, a las represas, donde hay una sobreexplotación de los recursos naturales en manos siempre del género masculino, con una particularidad de trabajo en modo golondrina que muchas veces hace uso del control de los cuerpos, del consumo de esos cuerpos, sin ser espacios de tránsito sino espacios concretos de consumo y explotación de las mujeres. En este sentido será una tarea imperante el dilucidar la interseccionalidad ante los niveles de opresión que se entrelazan y operan cada vez con mayor fuerza.

Asimismo, ante este escenario y en relación al ejercicio profesional que abordamos en el capítulo II, en el Trabajo Social existe una posición de subordinación relativa a partir de una fuerte tendencia a la rutinización de la práctica profesional, en la cual no se pueden dominar las condiciones de trabajo. Dentro de este marco es Iamamoto (2003) quien destaca la relativa autonomía que poseemos los profesionales, la cual permite definir los horizontes de intervención a partir de una dimensión ética y política de la profesión. Ante diversos requerimientos, poder dar respuesta en perspectiva emancipatoria con las competencias teórico metodológicas y operativo instrumentales adquiridas, con estrategias que se redefinan constantemente en tanto proyectos profesionales que no respondan a modelos hegemónicos.

Más allá de las dimensiones que constituyen a la profesión, como reflexión profesional, se debe tener presente que en las significaciones sociales persiste la idea de los trabajadores sociales como sujetos que asisten y ayudan a otros que están en desventaja con respecto a los demás, sin que la profesión ocupe lugares de prestigio o poder, lo que conlleva a inferir que es una profesión “devaluada” o subsidiaria frente a otras profesiones.

Puede asociarse esto a que, al ser una profesión mayormente desarrollada por el colectivo femenino, se la puede percibir como una profesión “inferior e incompleta” que se halla excluida de las esferas del poder -patriarcal- siendo considerada en un plano más bien accesorio ya que “lo social” puede ser abordado por cualquier persona -postulan- sin necesidad de ser convocado un/a profesional. Se han analizado las demandas y características que se le imponen a la profesión desde un modelo neoliberal donde se rigen los “resultados” en términos de eficacia, eficiencia y protocolización.

Al abordar la construcción social de la niñez, en el capítulo III, observamos cómo se ha considerado al niño en cada contexto histórico, que el abordaje de casi un siglo de los niños en situación de pobreza partió de una perspectiva basada en la “Ley de Patronato” (Ley N.º 10.903 del año 1919), que respondiendo al paradigma de la “situación irregular” ubicaba a este sector de la infancia en situación de “peligro moral y material”, lo que fundamentaba intervenciones “para proteger a los niños”, contemplando una doble exclusión.

En la actualidad, la legislación de nuestro país ha avanzado y superado las visiones de los enfoques tradicionales -y estigmatizantes- anteriormente mencionados, creando leyes que abordan las cuestiones de la niñez desde una perspectiva renovada y distinta. La Ley Nacional N.º 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la Ley Provincial N.º 3062 (Santa Cruz), tiene por objeto la Protección Integral de estos garantizando el ejercicio y pleno goce de sus derechos. Sin embargo en el contexto actual la mayor parte de los niños tienen sus derechos vulnerados y dificultades para poder acceder a sus derechos básicos.

También trabajamos el concepto de familias empíricas, como categoría que permitiría no juzgarlas a priori por “lo que deberían ser”, por mandatos socio culturales dominantes en cada momento dado ante la diversidad que expresan actualmente las organizaciones familiares. Por lo descripto durante dicho capítulo el abordarlas en términos de familia nuclear -como burguesa disciplinada -, forma parte de sostener la producción de determinado tipo de ciudadano y de sus normalidades subjetivas. La familia, en cambio, es vista como espacio paradójico entre aquel ideal esperado y lo real que transmite, pieza necesaria en el engranaje del modelo de producción existente.

Las nuevas formas denominadas por Giberti como “lo” familia, forman parte de una construcción y no son un tipo por seguir como ha sido tradicionalmente la categoría de “la” familia. De este modo, se permitiría a la sociedad, a las instituciones y a diversos efectores estatales adoptar una nueva mirada, tras asumir que las familias empíricas no son “desviadas”, “disfuncionales”, ni “anormales”, sino que se construyen de modos diversos a partir de los ritmos de cambio de la vida cotidiana y sus implicancias.

Es particular y concreta, producida por la sociedad y productora de relaciones sociales. A partir de su trayectoria vital familiar (acorde a los movimientos, sucesos, conformaciones, crisis y múltiples influencias que atraviese), en condiciones de expulsión, harán que sus miembros organicen sus recursos siguiendo diferentes

estrategias para el logro de ciertos objetivos (referidos a la unidad de ella o a los objetivos de sus miembros). Por su parte, el concepto de estrategias permite la reconstrucción de la lógica que marcará las acciones de supervivencia, como puente entre la organización social de la reproducción y las familias que allí se reproducen.

Recuperando los puntos presentados y analizados en el capítulo IV les profesionales del Trabajo Social con condiciones de trabajo signadas por la polivalencia funcional y la sobrecarga en sus espacios socio ocupacionales, tienen estrechos márgenes de autonomía relativa para poder decidir sobre sus abordajes y específicamente sobre los proveídos judiciales en el trabajo con las organizaciones familiares. Al informar, entonces, se deberá saber el porqué y el para qué de aquello a informar, considerando importante contar con el expediente completo, sabiendo que existe una delgada línea entre la protección y el control social. En este sentido, evitar responder a las demandas de mera vigilancia e inspección con intervenciones elaboradas estratégicamente enfatizando en la articulación con organizaciones e instituciones en territorio. Destacamos también, en la elaboración de las pericias, la importancia de analizar dentro de los núcleos familiares, la función asignada a la mujer desde una función productiva, siendo que las representaciones sociales hegemónicas se materializan en la función del cuidado y maternaje (reproductiva). Por tal sentido, es necesario poder construir un diagnóstico de la situación problemática, para evitar visiones estáticas, estigmatizantes y clasificatorias de los seres sociales entendiéndolas en el marco de la división sexual del trabajo y de la mercantilización de las relaciones sociales.

Asimismo ahondamos en la especial cautela profesional que debemos tener para evitar prácticas que responden a demandas para “fiscalizar la pobreza”, cuando en palabras también de Montañó (2000) se penaliza a la misma comprendiendo que la formalidad del proceso judicial constriñe el accionar profesional en cierta medida.

Por último, se destacó la importancia de considerar la dimensión ético-política del Trabajo Social, puesto que les trabajadores sociales, a través de nuestra intervención profesional, ponemos en juego determinados valores y proyectos que orientan y direccionan nuestras acciones. Asimismo, por la inserción en la división social y técnica del trabajo, las acciones desarrolladas por les profesionales contienen un carácter político, en cuanto relaciones de poder que son construidas en el ámbito de las relaciones contradictorias entre las clases. Es decir, el/la profesional –a través de su intervención- participa tanto del proceso de reproducción de los intereses de las clases dominantes como, al mismo tiempo, da respuestas a las necesidades de reproducción de las clases dominadas.

A su vez, en el marco de las políticas sociales, propusimos reflexionar sobre la necesidad de enfrentar un patriarcado racista, colonial y capitalista que mercantiliza los vínculos sociales y los vínculos del sujeto con la naturaleza y su sobre apropiación, considerando que en la actualidad los conflictos no son solo entre capital - trabajo sino que son entre capital y vida, por estar en juego la sostenibilidad de la vida cotidiana.

En síntesis, proponemos pensarnos permanentemente como parte de un Trabajo Social situado y disruptivo, analizar las relaciones sociales desde una determinación socio histórica, a fin de traccionar y disputar la arena del campo social con los pilares fijados en la democracia, la igualdad y la justicia social. Interviniendo como una práctica instituyente, no como un dispositivo institucionalizado, ya que al decir de Iamamoto (2003) la profesión surge como un hecho histórico siendo ésta esencialmente política. Ante esto se busca un equilibrio de les profesionales en tanto su

capacidad adaptativa como también en su reflexividad.

A partir del análisis de las entrevistas realizado en capítulo IV consideramos que tanto los funcionarios, magistrados como otros profesionales desconocen los alcances de la profesión, incluso consideramos que se sabe más sobre las limitaciones que sobre las incumbencias y alcances. También es este espacio rígido en que se interviene donde cotidianamente se utiliza un lenguaje codificado e intimidatorio que marca diferencias jerárquicas con los usuarios en general. Como plantea Borgioanni (2013), el saber burocrático imprime un criterio de verdad y jerarquía de los saberes en una rigidez procedimental que no se condice con la dinámica social. Se hace necesario entonces problematizar las demandas hacia la profesión -sustentadas desde concepciones disciplinarias signadas por una concepción conservadora del Trabajo Social-. ¿Cuánto de esa formalidad, rigidez e intimidación tiene realmente que ver con nuestro objetivo en la intervención?

La profundización de la judicialización de la vida cotidiana nos obliga a pensar la construcción de respuestas posibles ante los conflictos que se manifiestan en la vida cotidiana, apelando a instancias jurídicas en los sectores más pobres. Capello (2011) refiere que atender a la categoría genérica de control social promoverá reflexiones en torno al concepto de criminalización de la pobreza y criminalización de la protesta social.

Esta misma complejidad de los procesos sociales es en donde se encuentra inscripta la profesión, interpelando las “verdades jurídicas”, intentando incidir en los mecanismos institucionales para poder generar acciones que promuevan la desburocratización de las prestaciones y las relaciones con los sujetos y así fortalecer acciones colectivas.

Asimismo, desde los aportes de la autora Borgioanni (2013), es importante poder comprender que la subordinación a las decisiones tomadas por la autoridad judicial no significa subalternidad profesional, ya que éste dispone de autonomía técnica y ética en el ejercicio de sus atribuciones - las cuales se encuentran legalmente reguladas- pudiendo día a día ganar espacio en el campo de batalla.

De tal modo, el trabajo profesional para la institución como facilitadores para la comprensión de procesos, deberá ir en el sentido de la oposición al estado de las cosas, en la resistencia a las más diversas formas de alienación, cuestionando y enriqueciendo los estudios sociales con los datos de la realidad. El papel no será el de decidir y dictaminar, sino el de crear conocimientos desalienantes desde construcciones conjuntas respecto de la realidad sobre la cual va a deliberarse a posterior, destacando que estos aportes refieren -ni más ni menos- a la vida de personas. Se trabaja con un amplio bagaje de conocimiento y una opinión fundamentada de la situación peritada, lo que permite una mirada cualitativamente diferente ante el hecho, pudiendo hacer una recreación de la situación problemática y conocer sobre la existencia de otros aspectos que lo aquejan. Por todo lo expuesto es que el escenario social permite posicionarnos cada vez más firmes en prácticas de autodeterminación desde una perspectiva de derechos humanos, fortaleciendo los proyectos colectivos y la democratización de las relaciones sociales.

En tal aspecto, es una deuda pendiente de los trabajadores sociales, el poder ganar espacios de acción, ganar márgenes de pensamiento crítico y autónomo para dejar de ser una profesión que por momentos es hablada por otros, por ejemplo, al no ocupar los espacios destinados a la mediación, espacios que serían claramente acordes para el

abordaje profesional, pero ha sido tomado por otras profesiones hegemónicas. Tal vez a estos espacios no se nos incorpora por falta de consolidación de los colectivos profesionales que abran y exijan nuevos caminos de reivindicación, de práctica socio ocupacional, del fomento a escribir, debatir, y así repensar sobre las experiencias de la práctica profesional cotidiana, la recopilación de los trabajos de campo, los registros, las investigaciones, la sistematización de prácticas y procesos colectivos y las diversas reflexiones conjuntas ante las nuevas exigencias de los paradigmas actuales.

Parafraseando a Martinelli, convoco a que sigamos pensando a qué intereses sirve la intervención profesional de los trabajadores sociales ante diversas particularidades porque sólo cuando sirva a las mayorías, cuando sea universal y popular...será justicia.

Quienes ejerzan el Trabajo Social tendrán así bastas oportunidades para constituirse en un fuego, ese que acompañe y visibilice el cambio permanente, que oriente la búsqueda; modificando sus alcances para convertirse en una llama que no calle las desigualdades ni las vulneraciones naturalizadas dado que la defensa de los derechos humanos no es una cuestión arbitraria.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende...

Eduardo Galeano

Bibliografía

- **Alayon, N.:** Informe de la CELATS (1992): "Historia del Trabajo social en Argentina" Ed. Espacio 5° edición, Buenos Aires.
- **Althusser Louis (1973):** Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis. Ed siglo veintiuno. Buenos Aires.
- **Aquín, Nora (2013):** Intervención social, distribución y reconocimiento en el pos-neoliberalismo. En Revista Debate Público, reflexión de Trabajo Social.
- **Argumedo, Alcira (s/F):** *Crisis de las Ciencias Sociales de la Argentina en CRISIS*. Consejo de decanos de facultades de ciencias sociales y humanas de universidades nacionales (Editor). Editorial Prometeo, Buenos Aires, Argentina.
- **Arias, A. J. (2012).** Pobreza y modelos de intervención. Aportes para la superación del modelo de asistencia y promoción. Espacio Editorial. 2012. Buenos Aires.
- **Azcacibar, Mariel Lucia (s/f):** Intervención profesional: construcción de informes sociales en la justicia.
- **Azcacibar, Chillemi, Novillo y Utrera.** Revista Intercambios N.º 16 ¿Qué hacemos los trabajadores sociales en la justicia? Reflexiones desde la docencia universitaria y la intervención profesional.
- **Bachelard, Gastón (1981):** El nuevo espíritu científico. Editorial Nueva Imagen, México.
- **Baratta A. (1998):** "Entre la Política Social y la Política de Seguridad", en: El Cotidiano, México D.F.
- **Baratta, A. (1996):** "Resocialización o Control Social. Por un concepto crítico de 'reintegración social' del condenado" "No Hay Derecho", III, 1991, págs. 30-42
- **Barg Liliana (2003):** "Los vínculos familiares". Cap. 3 Espacio Editorial. Buenos Aires.
- **Basta, R. Moretti P. y Parra G. (2014):** Notas sobre el ejercicio profesional del trabajo social en la contemporaneidad, *Revista red sociales del Departamento de Ciencias Sociales*, 5:7-23
- **Borgianni, E. (2013):** Para entender o Serviço Social na área socio jurídica. *Serviço Social & Sociedade*, pp 407-442.
- **Borgioanni E., Montaña C. (Comp) (1999):** La política social hoy. Traducido por **Alejandra Pastorini** revista Biblioteca Latinoamérica de servicio social. Enlace; https://es.scribd.com/document/387549662/Borgianni-E-Montaña-C1999-LaPolítica_social-hoy-Antología.
- **Bourdieu. Pierre (1987):** De las reglas a las estrategias en: Bourdieu Pierre, Cosas Dichas, Editorial Gedisa, págs. 67-82. Barcelona.
- **Bouzas, P. (2004):** *El constructivismo de Vigotsky: pedagogía y aprendizaje como*

- **Cantamutto Francisco y Leandro Strata (2018):** Disertaciones realizadas en el Seminario III encuentro interdisciplinario sobre cuestión social y políticas públicas, 06/2018, UNICEN. Enlace: <http://redelp.net/revistas/index.php/rde/article/view/488/456> . Artículo: Economía política de la valorización en Argentina: la energía en las disputas del bloque en el poder. Revista DESPIERTA.
- **Cappello, M. & Senatore, A. (2011):** Cuestión social, cuestión penal, tensiones y debates de la intervención profesional ante la criminalización de la pobreza. En: Mallardi, M & Oliva, A (Coord.). *Cuestión social, reproducción de la fuerza de trabajo y políticas de asistencia*. Tandil, Argentina; UNICEN.
- **Carli Sandra (1994):** "Transformaciones en el concepto de infancia en las alternativas pedagógicas (1990-1955)" en Puiggrós, A(1994): *Escuela, democracia y orden (1916-1943)* Ed. Galerna. Buenos Aires.
- **Cavallieri S., Pantanali S. y Perez Torrecilla S. (2018):** Procesos de intervención en Trabajo Social: aportes a la formación y al ejercicio profesional desde una perspectiva crítica. Edulep, Buenos Aires.
- **Cazzaniga, Susana (2014):** "Profesiones" FTS, UNER, Paraná (Documento de trabajo Texto digital).
- **Ciafardo, E. (1992):** *Los niños en la Ciudad de Buenos Aires (1890-1910)*. Ed.: Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.
- **Coraggio, J L (2002):** La transformación social posible desde el trabajo social: la necesidad de un enfoque socioeconómico para las políticas sociales, en Coraggio 2004, De la emergencia a la estrategia. Mas allá del alivio de la pobreza. Ed. Espacio. Buenos Aires.
- **Danani, C. (2006):** "Politización: ¿autonomía para el Trabajo Social? Un intento de reconstruir el panorama latinoamericano". Revista Katálisis v. 9 n. 2, UFSC Florianópolis. (Texto digital).
- **Daroqui, A (2004):** Una lectura crítica sobre "La clase media militante de la seguridad". Revista Argumentos, 4, disponible en <http://www.revistaargumentos.com.ar>
- **Daroqui, A. et al., (2006):** Voces del encierro, Omar Favale Ediciones, Buenos. Aires.
- **Daroqui, Alcira y Guemureman, Silvia (2001):** *La niñez ajusticiada*. Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina.
- **Daroqui, A (2007):** De la resocialización a la neutralización e incapacitación, nota de la revista Encrucijada, N.º 43, disponible en: <http://www.uba.ar/encrucijadas/43/sumario/enc43resocializacion.php>
- **Daroqui, A (2008):** Administración punitiva de la exclusión ponencia disponible en: <http://webiigg.sociales.uba.ar/inaju/publicacionesn.html>.
- **De Jong, Eloisa, Basso, Raquel, Paira, Marisa (2001):** La familia en los albores del nuevo milenio."Espacio Editorial. Buenos Aires. Pp 11 a 31.

- **De Jong, Eloísa, Basso, Raquel, Paira, Marisa (2010):** Familia: representaciones y significados. Unalucha ente semejanzas y diferencias. Universidad Nacional de Entre Ríos. Espacio Editorial. Buenos Aires.
- **De Martino, M (2001):** “Políticas sociales y Familia. Estado de bienestar y neoliberalismo familiarista”. En Revista Fronteras, Dpto. de Trabajo Social FCS UDELAR N°4, Montevideo.
- **Diker Gabriela (2009):** ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias?. UNGS Biblioteca Nacional, Buenos Aires.
- **Dulcich, Ramiro (2008)** Tesis Doctoral “Servicio Social en tiempos de barbarie. Dilemas y desafíos del proyecto profesional crítico en América Latina”. Universidad Federal do Rio de Janeiro Centro de Filosofia e Ciências Humanas Escola de Serviço Social.
- **Duschatzky, Silvia y Corea, Cristina (2002):** “*Chicos en banda: los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones*”. Ed. Paidós. Buenos Aires.
- **Eroles, Carlos (2005):** *Glosario de temas fundamentales de Trabajo Social*. Ed. Espacio, Buenos Aires, Argentina.
- **Eroles Carlos, Fazzio Adriana y Scandizzo Gabriel. (2001):** *Políticas públicas de infancia. Unamirada desde los derechos*. Bs As. Ed Espacio 2° impresión, 2005.
- **Escudero J C y Doloretto M (2005)** “Números de la pobreza” en revista Conciencia Social N° 7-8, año V, Córdoba, diciembre de 2005.
- **Fazzio, A. y Sokolovsky, J. (2006):** Cuestiones de la niñez. Aportes para la formulación de políticas públicas. Ed. Espacio. Buenos Aires.
- **Feliz, M.; Migliaro, A. (2017).** *Desigualdad en sociedades extractivistas: Intersecciones de clase, género y territorio en el neodesarrollismo*. (In)Justicias Espaciales en Argentina y América Latina, 9 y 10 de noviembre de 2017, Buenos Aires. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10086/ev.10086.pdf
- **Fernández Soto (2005):** El Trabajo Social y la Cuestión Social: Crisis, movimientos sociales y ciudadanía (1er Congreso Nacional de TS del centro de la pcia. De Buenos Aires).
- **Foucault (1967):** historia de la locura en la época clásica. Ed. Breviarios. Fondo de cultura económica. México □ **García Delgado Daniel (03/2018):** “Desarrollo, políticas públicas e innovación en la Argentina del siglo XXI. La “Creativa destrucción de Cambiemos”.
- **Gargarella, Roberto (1999):** Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía política. Ed. Paidós
- **Gianna S. y Mallardi M. (2016):** Transformaciones familiares y Trabajo Social. Debates contemporáneos y contribuciones analíticas. Editorial Dynamis, Buenos Aires.
- **Gilberti Eva (Comp.)(1997):** *Políticas y niñez*. Bs As Ed. Losada. Fuente: <http://www.psicocent.com.ar/presenracion/php2pdf>. Equipo interdisciplinario en psicología

comunitaria: “Infancia y niñez en los escenarios de la posmodernidad”, ponencia presentada en el IV congreso argentino de salud mental 2009-BS AS. Autora: Silvina Cohen Imach de Parolo (Lic. en psicología).

- **Giberti, E., Garaventa, J. y Lamberti, S. (2005):** *Vulnerabilidad, desvalimiento y maltrato infantil en las organizaciones familiares*. Colección familias .Ed. Noveduc (novedades educativas). Buenos Aires.
- **Giberti Eva (1994):** “ Lo familia y los modelos empíricos” en Wainerman C. (Comp.) *Vivir en Familia*. Ed. Unicef- Losada. Bs As Argentina ⁹⁶ Óp. Cit.
- **Grassi, E. (1989)** *La mujer y la profesión de Asistente Social. El control de la vida cotidiana*. Editorial Humanitas. Buenos Aires.
- **Grassi, E. (2019):** “Neoliberalismo, desigualdad y cuestiones de legitimidad”. Escenarios-Revista de Trabajo Social y ciencias sociales. Disponible en:
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/97783/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllo wed=y
- **Heller, Agnes (1977).** Sociología de la vida cotidiana, Barcelona, Col.Historia/Ciencia/Sociedad, Península, 423 pp.
- **Hopenhayn, Martin.** ¿Integrarse o subordinarse? Nuevos cruces entre política y cultura. *En libro: Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas*. Daniel Mato. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2005. pp.17-40. Acceso al texto completo:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Hopenhayn.rtf>
- **Iamamoto Marilda V. (2007):** *Servico Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho equestao social*. Cortez. San Pablo.
- **Iamamoto, Marilda V. (2002):** *Servicio Social y División Social del Trabajo. Un análisis crítico de sus fundamentos*. Cortez. San Pablo.
- **Iamamoto Marilda V. (2003):** El servicio social en la contemporaneidad, trabajo y formación profesional. Editora Cortez. San Pablo.
- **Karsz, Saúl (2007)** Problematizar el trabajo social. Definición, figuras, clínica. España, Gedisa. Título original: Pourquoi le travail social? Définition, figures, clinique. París, Dunod, 2004.
- **Klachko P. y Arkonada K. (2016):** Desde arriba, desde abajo. De la resistencia a los gobiernos populares: escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina. Ed. Prometeo, BsAs.
- **Korol, C. (2009).** Criminalización de la pobreza y de la protesta social, Ed. El Colectivo. Bs As.
- **Lefebvre, Henri (1972).** La vida cotidiana en el mundo moderno, Madrid,

Alianza Editorial, 255 pp.

- **Lewkowicz I. (2004):** *Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez*. Ed. Paidós, Buenos Aires.
- **Lopez Antonio (s/f):** “El trabajo social es un síntoma del capitalismo” en Revista Escenarios N 64. Buenos Aires.
- **Lorente Molina, B. (2004):** “Género, ciencia y trabajo. Las profesiones feminizadas y las prácticas decuidado y ayuda social” en Revista Scripta Ethnologica, año/vol. XXVI. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires.
- **Mallardi, Manuel; Madrid, Liliana y Oliva Andrea (Comp)(2011):** Cuestión social, reproducción de la fuerza de trabajo y políticas de asistencia. Buenos Aires. Cap.5: Cuestión Social/Cuestión Penal.Tensiones y debates de la intervención profesional ante la criminalización de la pobreza Autoras: **Marina Cappello y Anátilde Senatore**. Publicación de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 2011
- **Mallardi, Manuel (2019):** Informe Social y relaciones familiares. Categorías en disputa. Ed. Puka.Buenos Aires.
- **Mamblona, C. y Matusevisius J. (Comp.2019):** Luchas sociales, sujetos colectivos y Trabajo Social en América Latina (2019) Ed. Puka Buenos Aires.
- **Martinelli, M. L (1997):** “Servicio social: identidad y alienación”. Ed Cortez. San Pablo.
- **Merklen D., (2010):** Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática: 1983-2003. EdGorla, Buenos Aires.
- **Miguez Daniel (2004)** *CLAVES PARA TODOS: Los pibes chorros*. Ed.: Capital intelectual. Buenos Aires.
- **Minujin A. y Kessler G. (1995):** La nueva pobreza en la Argentina. Ed. Plantea, Bs As.
- **Moncada, Alberto (2009)** “Las falacias del neoliberalismo” Sociólogos Sin Fronteras.
- **Monedero, J.C. (2009):** “Legitimidad” en Reyes, R. *Diccionario Crítico de Ciencias Sociales.Terminología científico – Social*. Tomo 3. Madrid-México, Ed. Plaza y Valdéz.
- **Montaño, Carlos (2000):** *La naturaleza del Servicio Social: un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su reproducción*. Cortez. San Pablo.
- **Montaño, Carlos (2004):** XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social – ALAETS, Costa Rica.
- **Morin, Edgar (1999):** Los siete saberes necesarios para educación del futuro. Plan de UNESCO Ed.Santillana. Buenos Aires.

- **Netto, José Paulo (1997):** *Capitalismo monopolista y Servicio Social*. Cortez. San Pablo.
- **Netto, José Paulo (2012)** *Trabajo Social: Crítica de la vida cotidiana y Método en Marx*. Productora delBoulevard. La Plata.
- **Netto, José Paulo (2003):** Cinco notas a propósito de la cuestión social. En: Borgianni, E., Guerra, Y. y Montaña, C. *Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-políticoprofesional*. Capítulo 2. Sao Paulo: Cortez. Pp. 53-69.
- **Netto José Paulo.** des grabación de conferencia 25/10/2000 en la carrera de TS de la UBA "Reflexiones en torno a la "cuestión social". Una mirada crítica desde el Trabajo social.
- **Neuman, Elías (1991):** *Los que viven del delito y los otros. La delincuencia como industria*. NuevaCriminología. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.
- **Nicolini Graciela (2011):** "Judicialización de la vida familiar. Lecturas desde el Trabajo Social" Capítulo 2. Espacio Editorial. Buenos Aires.
- **Nozick, Robert (1991):** *Anarquía, Estado y utopía: Teoría del Estado de naturaleza*. Fondo de CulturaEconómica. México DF.
- **Oliva, Andrea:** Los recursos en la intervención profesional del Trabajo Social - Autor: OLIVA, AndreaAntonia.
- **Panaia, M. (2008):** "Una revisión de la sociología de las profesiones desde la teoría crítica del trabajo en la Argentina". Documento de proyecto. Santiago de Chile, CEPAL Naciones Unidas.
- **Parra, Gustavo (2001):** *Anti modernidad y trabajo social. Orígenes y expansión del trabajo social argentino*. Ed. Espacio, Buenos Aires.
- **Pastorini, Alejandra (2004):** ¿quién mueve los hilos de las políticas sociales? Avances y límites en la categoría "concesión-conquista" in (pp207-231) in Borgianni, E y Montaña, Carlos (org) (2004): *La política social hoy*. 2da edición Cortez Sao Paulo.
- **Pelegri, X. (2004):** El poder en el trabajo social: Una aproximación desde Foucault. *Cuadernos de Trabajo Social*, 17, pp. 21-43. Recuperado de : <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1155756&orden=1&info=link>
- **Penna, Maura (s/f):** "Lo que hace ser nordestino", Ficha de cátedra Antropología I – Cátedra Grimberg– Carrera de Trabajo Social – UBA.
- **Perrone R; Nannini, M. (1997):** *Violencia y abusos sexuales en la familia. Un abordaje sistémico y comunicacional*. Ed. Paidós. Buenos Aires.
- **Pontes Reinaldo (s/f):** " Mediación: Categoría fundamental para el trabajo del Asistente Social".
- **Poulantzas, Nicos (1973)** *Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista*. Siglo XXI, México.
- **Quintero Velásquez, Ángela (2007):** *Diccionario especializado en familia y género*. Ed:

Lumen. Buenos Aires.

- **Reinoso Marta y Daniel Jaremchuk (eds.) y otros (2012)** *"El trabajo social en Santa Cruz. Historia, profesión y configuraciones identitarias en el proceso evolutivo del campo profesional.* ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PEDAGOGÍAS ALTERNATIVAS II. Pcia de Sta. Cruz. Edición de Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Argentina.
- **Trabajo Social Global.** Revista de Investigaciones en Intervención Social. Vol. 3, nº4. Junio 2013, 133-156
- **Rincón Gamba Laura (2011):** La construcción de identidad territorial de los nyc ('nacidos y criados') en Santa Cruz, Patagonia. ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 2221-3872, N° 9, 2011, Sección Tema Central p. 69-86 71.
- **Robles, Claudio (2004):** "La Intervención Pericial en Trabajo Social". Editorial Espacio. Bs As.
- **Robles, Claudio (2011):**Coord. El trabajo social en el campo jurídico. Editorial Espacio: el trabajo social del trabajador social, Buenos Aires.
- **Sader Emir, García Linera Álvaro y Forster Ricardo (Comp) 2016:** *Las vías abiertas de América Latina. Siete ensayos en busca de una respuesta: ¿Fin de ciclo o repliegue temporal?.* Ed. Octubre . Buenos Aires
- **Sader, E. Gentili P (s/f):** La trama del neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social, Ed. Universitarias. Buenos Aires.
- **Saintout, F. (2006):** *Jóvenes. El futuro llegó hace rato. Comunicación y estudios culturales latinoamericanos..* Bs. As EPC Educación. Facultad de periodismo y Comunicación social. UNLP. Cap.3 A y B.
- **Saltalamacchia, H (2005):** Capítulo" Del proyecto al análisis: aportes a la investigación cualitativa, socialmente útil" En: *Sujetos, teoría y complejidad..* Ed. El Artesano Buenos Aires.
- **Sartori, V. (2010):** Lukacks e critica ontológica ao direito. Ed. Cortez, Sao Pablo.
- **Shaffer, David (2000)** *Psicología del desarrollo, Infancia y adolescencia.* México, 5° edición: Thomson.
- **Senatore Anatile (2014):** "La familia como sujeto de intervención. Procesos de judicialización de la vida cotidiana" en *Procesos de Intervención en Trabajo Social: Contribuciones al ejercicio profesional crítico.* Comp. Mallardi Manuel, Colegio de TS de la Pcia. de Buenos Aires.
- **Senatore Anatile (2015):** ¿Sujetos de derecho y objetos de castigo? .Familiares de detenidos. Su lugar en el tratamiento carcelario. Cátedra Libre Marxismo y Trabajo Social. Editorial Dynamis , BuenosAires.
- **Seoane Jose, Taddei Emilio y Algranati Clara (2018):**Movimientos sociales e internacionalismo en Nuestra América. Del ciclo de conflictividad y cambios sociopolíticos a la ofensiva neoliberal actual. Ed. Luxemburg, Buenos Aires.
- **Sileoni Alberto** en Revista diálogo político: "Educación y pobreza en Argentina" Vol. 22 N°4

Año 2005.

- **Svampa Maristella y Antonelli Mirta (editoras) (2009):** *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos sociedad. Buenos Aires.
- **Szalkowicz Gerardo y Solana Pablo (Comp.) (2017):** América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista. Ed. Sudestada, Buenos Aires.
- **Taddei, Emilio y Thwaites Rey Mabel (2019):** El poder judicial y la reconfiguración neoliberal del Estado bajo el macrismo. Salir del neoliberalismo. Buenos Aires.
- **Tenti Fanfani Emilio (2007):** *La escuela y la cuestión social. Ensayos de sociología de la educación*. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires.
- **Tezanos, J.F. (1999):** Tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades tecnológicas avanzadas. Un marco para el análisis. En: J.F. Tezanos (ed.). *Tendencias en desigualdad y exclusión social*. Tercer Foro sobre Tendencias Sociales. Madrid: Editorial Sistema.
- **Tonet, Ivo (2013):** “Sobre el socialismo” Sao Paulo, 1ra edición
- **Torrado, S. (2010):** *El costo social del ajuste. Argentina 1976-2002*. Tomo II. Ed. Ensayo Edhasa. Buenos Aires.
- **UNICEF 2005:** Estado mundial de la infancia.
- **Urteaga, E. (2008):** “Sociología de las profesiones: una teoría de la complejidad”.
- **Vasilachis de Gialdino, Irene (2003):** Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales. Ed. Gedisa, Barcelona.
- **Vélez Restrepo, O. (2003):** *Reconfigurando el Trabajo Social*, [Cap. IV.] Bs.As Ed.: Espacio.
- **Wacquant, L. (1999):** Las cárceles de la miseria, Manantial, Buenos Aires.
- **Wainerman Catalina (Comp. 1994), Cicerchia Ricardo, Geldestein Rosa; Giberti Eva, Grosman Cecilia y Jelin Elizabeth “Vivir en familia”** Bs.As Editorial Unicef Losada.
- **Wainerman, C. y Geldstein N. (1994):** “Viviendo en familia: ayer y hoy”. En Wainerman, C. (ed.) *Vivir en Familia*. Bs. As- Ed. Losada. Wacquant Liuc “La regulación penal de la pobreza en la era neoliberal”. 2012. Enlace: <https://sociologos.com/2012/05/25/la-regulacionpenal-de-la-pobreza-en-la-era-neoliberal-por-loic-wacquant/>.
- **Zaffaroni, Eugenio Raúl y Otros (2005):** *Derecho Penal. Parte General*. Ediar Buenos Aires.
- **Zamanillo, T. (2012):** Las relaciones de poder en las profesiones de ayuda. Una cuestión ética de primer orden. *Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar*, 1, pp. 157-170. Recuperado de: https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/35214/1/Las_relaciones_de_poder_en_las_profesiones_de_ayuda.Una_cuestion_analitica_de_primer_orden.pdf

Webgrafía

- Fuente: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/10446/9124>
- Fuente: <https://prezi.com/m/eg9nukdr97os/clasificacion-de-las-ciencias-segun-habermas/>
- Fuente: <http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/index>
- Fuente: <http://www.psicosocialyemergencias.com/>
- Fuente: <https://es.scribd.com/doc/303716633/DialnetFuncionYProfesionalidadDelTrabajo-3156403> De Robertis, C. (2009). Función y Profesionalidad del Trabajador Social. *Palabra*, 10, pp. 181-197.
- Fuente: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3852175.pdf>____Faleiros, V de P. (2011). Desafíos del Trabajo Social frente a las desigualdades. *Revista Emancipação*. 11, 1, pp. 117-128.
- Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
- Fuente: <http://www.condenaditosdelsistema.neo.com/falacias/2009.58>.
- Fuente: <http://www.ts.ucr.ac.cr> 7
- Fuente: <http://www.politicassociales.gov.ar/>
- Fuente: <https://sociologos.com/2012/05/25/la-regulacion-penal-de-la-pobreza-en-la-era-neoliberal-por-loic-wacquant/>
- Fuente: <http://redelp.net/revistas/index.php/rde/article/view/488/456>
- Fuente: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Hopenhayn.rtf>
- Fuente: www.clacso.org

Anexo

La primer entrevista que se expondrá a continuación ha sido realizada con la Jueza a cargo del Juzgado de primera instancia N°1 en lo civil, comercial, laboral de minería y de familia.

➤ Entrevista a Jueza, abogada de 42 años de edad:

Entrevistadora: Buenos días, la presente entrevista se enmarca en una investigación sobre la intervención profesional del Trabajo Social en el ámbito socio jurídico. Por tal motivo se realizarán diversas preguntas a fin de caracterizar la intervención en esta institución del profesional del área, por lo que se consulta:

¿Cuál es su función específica en la institución?

Jueza: Hola ¿qué tal? Yo soy juez de civil, comercial, laboral, minería y familia.

Entrevistadora: ¿Con qué población trabaja desde la institución?

Jueza: Nosotros trabajamos con Puerto San Julián que tiene alrededor de 18.000 habitantes.

Entrevistadora: ¿Ustedes trabajan de forma articulada con otras instituciones de la localidad?

Jueza: Sí, trabajamos -depende el área- por ejemplo, en Familia el tema de internaciones trabajamos con el área de Salud Mental del hospital, en el área niñez trabajan con la Dirección de protección integral de la localidad de acá y de Gobernador Gregores, después trabajamos con el área de violencia de la Comisaría, trabajamos sobre todo el espacio de la Oficina del género que sea como la eventual Comisaría de la Mujer que estamos esperando que se cree. Nosotros trabajamos con ellos y esos son los que trabajamos interrelacionadas directamente y después trabajamos con otras dependencias, pero ya no relacionado, sino que trabajamos con cosas que ellos hacen, por ejemplo, con la Defensoría y la Fiscalía, pero no es que nos comunicamos y nos tenemos que poner a hacer esto y aquello.

Entrevistadora: *¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en cuanto a lo que es el área de familia ?*

Jueza: Bueno desde el año pasado, este año a mí me impactó el tema de internaciones involuntarias por qué creció notablemente, se cuadruplicó el número de casos. En verdad son menores de edad con intentos de suicidio y tratamos de buscar como un rango común porque había un montón de temas que nosotros no estábamos preparados para atenderlos. Esto en principio fue así, primero empezamos intuitivamente a verlos, pero empezamos, así como instintivamente y empezamos atendiendo a los adolescentes: eran primero de 15 años, luego de 14, de 12, de 11 también de 18 que ya son mayores de edad, pero adolescentes también(...). En estos casos empezamos a ver si las niñas y los supuestos estados, cómo estaban esas niñas y niños, si tenían novio, novios y si había violencia o sin violencia, con familia sin familia, escolarizados y entonces por eso empezamos a trabajar más con salud mental y niñez en tratar de ver para donde empezamos a colaborar eso.

Entrevistadora: *Y en esos casos ¿cómo se trabaja?¿se hace un acompañamiento al abordaje de otras instituciones o los abordajes parten desde acá?*

Jueza: La Ley lo que determina -la ley de salud mental- (aclara) es una ley relativamente nueva, bastante nueva y hermosa si la lees (sonríe), y es hermosa en una mirada integral y protectora. Pero ahí dentro de la comunidad lo que sucede no es lo que la Ley dice, no están todas las herramientas en la comunidad. Para esto entonces se empezó a trabajar con lo que tenes, por ejemplo, nosotros hemos aprendido que si bien es una comunidad chiquita y tenemos un montón de menos espacios técnicos que tienen otras localidades, sí... tenemos un agua, pero también sí tenemos nosotros una comunicación mucho más fluida con respecto a los poco que tenemos.

Entrevistadora: *¿Eso mismo sucede con la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de NNyA?*

Jueza: Claro que sí, entonces eso digamos nos facilita enfrentarlos con rapidez en cuanto a eso y a que lo que hacemos, igual a lo que dice el área Salud de lo que dice la Ley mental, es que la determinación de información la tiene el hospital. Eso es fundamental, trabajar lo local y que ese día mismo del hecho nos comuniquen a nosotros, ahí lo que tenemos que hacer es preparar la supervisión la cual consiste en dar un control de legalidad -se llama- sobre esta acción porque en verdad se está restringiendo la libertad

de una persona, entonces se intenta que esto sea el tiempo lo más corto posible, y evaluar cómo se replica esto en los menores de edad y sus internaciones.

Te cuento, nosotros empezamos a armar un dispositivo con los profesionales -dos psicólogos y una trabajadora social- un poco hablado con ellos de que controlamos que el tratamiento que ellos posteriormente disponen siga los plazos efectuando, por ejemplo, si ellos establecen la terapia psicológica semanal, pero ellos no pueden controlar su cumplimiento entonces nosotros con el equipo de acá (refiere a tal gabinete psico social) no hacemos el tratamiento, pero sí lo controlamos verificamos que se haga. Sería hacer un seguimiento, eh... que están yendo, cuales están siendo indicadores de riesgo, cómo poder acompañar y eso lo hacemos con la Defensoría, en conjunto, porque tienen esos chicos un abogado defensor y así nos comunicamos. También tenes revisión de casos, en algunas ocasiones hemos citado a los padres para bueno, ver qué está pasando en esa familia, porque no prestan ayuda al niño, por qué no tienen presencia de padres, porque algunos te digo hasta tienen doble internación así que bueno...

***Entrevistadora:** Mas allá del caso de articulaciones en caso de internaciones y en atención de casos con niños ¿con qué profesionales cuenta el juzgado?*

Jueza: Contamos con dos psicólogos, eh... un hombre que está hace muchos años , 20 años, y la psicóloga que hace 2 o 3 años se incorporó y con una asistente social que esta hace 11 años.

***Entrevistadora:** ¿ Y cuáles son las principales demandas para con la trabajadora social?*

Jueza: Bueno, eh...tenemos en el caso de ella, hace los informes domiciliarios con la psicóloga o el psicólogo, las internaciones, los apoyos y salvaguardas en casos de discapacidad o enfermedades crónicas como alcoholismo; y lo que yo le pido es que me vinculen la información que tienen, porque a veces en el caso de internaciones estamos agotando a la persona porque está con la operadora que le dará la medicación y yo voy a ver si tomó o no la medicación, entonces, lo que hacen es vincular la información del hospital con la información del seguimiento en su casa, vinculándola con las escuelas, ella es la que me hace una mirada más globalizada dentro de ese equipo.

También trabajamos mucho con la asistente social en el tema de los niños, con causas de familias, ahí todas las causas que tengan que ver con menores interviene la

trabajadora social entonces interviene en: todas las violencias, en todos los regímenes comunicacionales, en los cuidados personales, en todo lo que tenga que ver con menores; interviene en todas las cuestiones de género donde yo necesito saber cómo se van llevando las medidas, cómo se van cumpliendo los objetivos, básicamente la intervenciones.

Antes veíamos que le dábamos una participación a ella antes de que yo tome intervención del caso y ahora lo que hacemos con el informe social es hacerlo después de esa parte de que se tomen medidas...sería como los ojos nuestros en la casa a partir de las medidas que tomamos.

Entrevistadora: ¿La profesional logra plantear el abordaje y sugerir alguna de las formas de la intervención?

Jueza: Creo que no, lo que sí sucede es que ella no lo materializa escrito. Ahora empezamos a hacer reuniones que vamos a empezar a trabajar con los profesionales y el secretario; la idea es ahora incluir a la asistente social y los psicólogos para dinamizar en cuanto a la estrategia en cada caso y participar ellos en la cocina de las decisiones que vamos tomando nosotros en los casos de seguimiento porque cada caso tiene particularidades diferentes.

Entrevistadora: ¿Esa propuesta se irá reevaluando sobre la marcha o será previa a la modalidad que elija para el abordaje con las medidas tomadas?

Jueza: Una vez por mes sería, como mínimo, porque nosotros no hacemos como de supervisión técnicamente, porque no hacemos eso, lo nuestro es oficioso, trabajar con niños es oficioso, entonces nosotros determinamos qué medida vamos a establecer, se la comunicamos a la Defensoría, pero no siempre la idea de la medida viene de otro espacio. Entonces los podemos juntar y ver entre todos cómo podemos trabajar eso. No lo estamos haciendo en conexión, lo que sí eso nos hace falta a mi parecer. Suponte a mí viene la asistente social y me adelanta las actuaciones en la oralidad por ejemplo me cuenta fui al domicilio de tal persona y llamé a las 3 pm y está haciendo tal tratamiento, o está yendo a tal escuela o taller. Eso mismo que te dije repensarlo si se puede evitar un daño, o por ejemplo me parece a mí que quiere volver con su pareja, no trabaja, la dinámica es probable que sea una relación con episodios de violencia, es posible que vuelva con su pareja...mmm...bueno y lo vamos charlando a veces sobre eso se va promoviendo algo y así.

***Entrevistadora:** Desde su parecer como Jueza, ¿cuáles son las principales problemáticas o limitaciones que se le presentan a la colega en su desempeño profesional dentro de la dependencia?*

Jueza: Pensando en cómo se desenvuelve ella en la institución no veo que tenga limitaciones, lo que le pasa a ella es que siempre se la necesita para realizar los domicilios y, nada, sí veo que en personal no estamos completos, pero no sé si falta personal. Yo creo que hay un problema por ejemplo en el caso de nuestras funciones en el Juzgado Penal ella está a disposición de todas las requisitorias que podrían hacerse en las dependencias judiciales. Ya te digo desde el Juzgado de Paz que hacen los Informes socio ambientales, por ejemplo, cuando fue la entrega de viviendas, del plan el IDUV provincial tuvo que hacer 60 entrevistas en domicilios en un mes; mientras que además cumple funciones a pedido de la Cámara Criminal en Penitenciaria. En sí son como muy amplias sus funciones, no es solamente conmigo que trabaja, es así nosotros según la Ley deberíamos tener un gabinete especializado solamente en familia, destinado acá...pero no pasa. Ni siquiera podría trabajar para el Juzgado civil, estamos con Familia, Laboral y Civil todo junto en un gabinete especializado que sería solo para trabajar en Familia, pero eso no lo tenemos aún.

***Entrevistadora:** ¿Sabrá decirme hace cuanto tiempo se encuentra la Trabajadora Social en esta condición de ser la única dentro del gabinete?.*

Jueza: Desde que estoy en ejercicio de funciones, hace 11 años siempre fue la única en el juzgado, no había más de una profesional social. Ahora hace dos años y medio entro una psicóloga nueva; desde entonces empezamos a tener el gabinete dos psicólogos y la asistente social, la idea de trabajo la tenemos que establecer este año.

***Entrevistadora:** ¿Cuáles son los obstáculos en el planteo de las estrategias de trabajo interdisciplinario?*

Jueza: Tenemos una función puntual en el área de seguimiento social, nosotros tenemos eso, no se me ocurre pedir más tampoco porque me parece que pedir más es colapsar al equipo porque no damos abasto con el seguimiento, pensá que mucho lo coordinan en las mañanas, pero lo concretan en la tardes, y bueno es sobrecargar a la profesional constantemente.

Entrevistadora: *¿Los profesionales se constituyen en un gabinete?*

Jueza: No, no se constituyen en gabinete. Yo les paso el expediente, y bueno es un caso de una familia, no es que es tuyo el tema. Por ejemplo, en los procesos de determinación de capacidades, los seguimientos son semestrales, entonces entre los peritos profesionales se informan sobre lo que abordan...muchas veces hay gente que es discapacitada porque es pobre en general.

Entrevistadora: *¿A qué se refiere con que es discapacitada por ser pobre?*

Jueza: Claro, hay gente que es discapacitada porque pasó sus años institucionalizada por no poder hacerse tratamientos por fuera de lo que ofrece en salud la provincia, entonces por ejemplo los chicos con autismo cuentan con más derechos por tener más canales de acceso a prestaciones.

De lo que me decías antes, acá trabajan por separado, como compartimientos, pero el asistente social acá por disposición de judiciales es de esta localidad, acá forma parte de un gabinete, pero en Gobernador Gregores, por ejemplo, no tienen gabinete. Se le da los pedidos y los aborda. Pero a diferencia de acá allá la asistente social está abocada a la Defensoría oficial.

Entrevistadora: *¿Quiere agregar algún comentario?*

Jueza: No, está bien, eso es todo...¿vos? ¿Algo más que te cuente?

Entrevistadora: *Es todo, muchas gracias.*

Jueza: No hay porqué, hasta luego.

Entrevista al **Agente Fiscal**, a cargo de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal:

➤ Entrevista al Fiscal, abogado de 39 años de edad:

Entrevistadora: *Buenos días, la presente entrevista se enmarca en una tesis de investigación sobre la intervención profesional del Trabajo Social en los ámbitos socio jurídicos. Por tal motivo se realizarán diversas preguntas a fin de caracterizar la intervención en esta institución de la profesional, por lo que se consulta:*

¿A qué institución pertenece?

Fiscal: Pertenezco a la Fiscalía de Puerto San Julián.

Entrevistadora: ¿Qué antigüedad tiene en el cargo en dicha institución?

Fiscal: Presento en el cargo un año y 5 meses de antigüedad.

Entrevistadora: ¿Cuál es su función específica en la misma?

Fiscal: Soy Agente Fiscal y en la órbita de la materia penal es dictaminar y una vez concluida la instrucción penal el dictamen de elevación a juicio, si hay pruebas suficientes como para que amerite la realización de un juicio.

Entrevistadora: ¿A qué área del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz pertenece?

Fiscal: Pertenezco al Ministerio Público Fiscal.

Entrevistadora: ¿Usted con qué población trabaja?

Fiscal: Abordo aproximadamente a 25 mil personas, como universo total, ya que el mismo componen la localidad de Puerto San Julián y la localidad de Gobernador Gregores.

Entrevistadora: ¿Qué población acude y qué demandas se presentan ante esta Fiscalía?

Fiscal: La fiscalía, el Juzgado de instrucción y las comisarias son los lugares donde se inician los trámites penales a través de una denuncia y bueno esa es la principal función.

Entrevistadora: ¿Trabaja con familias que estén en conflicto?

Fiscal: En realidad la Fiscalía de Puerto San Julián es una fiscalía universal, que es lo que sucede en algunas provincias cuando hay pueblos que no tienen Juzgados por su cantidad de habitantes. No tienen Juzgados dedicados a una única materia, por ende se abarca todo lo que tiene que ver con Civil, Familia, Minería, Laboral y la parte Penal también. Nosotros tenemos junto con Tierra del Fuego somos las únicas provincias que tenemos un código con juez inquisidor. Esto es que es el juez quien recolecta la misma prueba quien te procesa siendo el mismo un modelo inquisitivo, próximamente podría modificarse para ser acusador, recolecta el fiscal y te acusa el juez de garantía y ahí evalúa si está bien lo dictaminado.

Entrevistadora: *¿Usted trabaja en articulación con otras instituciones?*

Fiscal: Por supuesto, se dictamina en todas las cuestiones de Familia, de Civil de divorcios, de sucesiones, y demás lo que es enviado por la causas del Juzgado de Familia.

Entrevistadora: *¿Con que profesionales cuenta la institución?*

Fiscal: El Poder Judicial tiene un abanico de profesionales, tanto peritos informáticos, como psicólogos, psiquiatras, hay un gabinete especializado en cada una de las áreas. Lo que sí, lo que depende de nosotros específicamente, tenemos escaso personal porque al ser una jurisdicción chica tenemos un psicólogo y una asistente social para 25 mil personas aproximadamente, por ende, se debe articular con hospitales locales. Sino solemos derivar los casos a donde se nuclea, puntualmente el Poder Judicial en Rio Gallegos en este caso, donde están todos los profesionales que pertenecen al Poder judicial provincial, siendo a 380 km de acá, todo un tema eso.

Entrevistadora: *¿Cuáles son las demandas institucionales a la trabajadora social?*

Fiscal: La trabajadora social en lo que respecta a Penal, tiene que hacer seguimientos tutelares muchas veces, sobre los menores, porque es Juzgado de instrucción y del menor, después tiene que hacer informes con respecto a los detenidos que están en vísperas de arribar a salidas transitorias, entonces tiene ella que hacer un informe en el lugar en el cual se van a insertar, sobre la situación en la que se encuentra la persona que los va a albergar, dependiente estos pedidos de la Cámara Criminal. Esto corresponde a cuando esta por recuperar la libertad, ya sea por salida transitoria o libertad condicional se remite un informe solicitado a la licenciada en trabajo social para que dé su versión del lugar al que va a ocupar esta persona cuando recupere la libertad.

Entrevistadora: *¿Ustedes con los profesionales que trabajan interdisciplinariamente mantienen reuniones? ¿Hay espacios para plantear sugerencias?*

Fiscal: No, no tanto como reuniones, pero si se les hace indicaciones de los diferentes casos sobre que se necesita como pericia o como informe, para que sea más detallada alguna cuestión por sobre otra. Sugerencias se aceptan sí, siempre.

Entrevistadora: ¿Usted cómo Fiscal tiene la posibilidad de plantear nuevas líneas de trabajo, de abordaje o cambios en la modalidad de trabajar desde la institución?

Fiscal: Sí, todo el tiempo va avanzando la sociedad y asimismo va cambiando el criterio, el derecho es el que se tiene que ir amoldando a todos los cambios sociales. Se tiene que ir amoldando y por supuesto que el área de la esencia del trabajo social también tiene que ir acompañado en los cambios.

Entrevistadora: En esta dependencia puntual ¿cómo se toman las decisiones relativas al funcionamiento institucional?

Fiscal: No, en la órbita local las decido yo, pero en realidad también hay un cuerpo auxiliar que acompaña todo el trabajo de la Fiscalía que por supuesto decisiones toman en conjunto.

Entrevistadora: ¿Participan de instancias formativas o de capacitación?

Fiscal: Participamos desde la Escuela de Formación del Tribunal, sí.

Entrevistadora: ¿Realiza pedidos directos a la Trabajadora Social?

Fiscal: Sí, sí y cuando nos interesa una determinada cuestión, directamente en el informe, aparte del informe habitual se le solicita que amplíe en tal o cual sentido lo mismo a los peritos psicólogos, hay que destacar la especificidad de cada uno en su órbita y respetar sus formas de trabajo e indagación.

Entrevistadora: ¿Cuáles son las principales problemáticas que presentan las familias y los NNyA?

Fiscal: Eh... bueno es muy diverso porque el principal sostén de una familia cuando tiene que, por ejemplo, alojar a un detenido como tutores se debe tener una salida económica medianamente adecuada. Debe tener un lugar donde se va a encontrar esta persona, donde no tiene que haber registros de violencia dentro de ese núcleo familiar, además de diversas cuestiones, el tema del alcoholismo, la adicción y demás...

Entrevistadora: ¿Más allá de los exhortos desde la Cámara Criminal, ustedes trabajan con violencias y abuso sexual, violencia de género en las denuncias?

Fiscal: Sí, sí todo eso transcurre en lo que es la Justicia ordinaria así que todos los casos están dentro de la órbita de la fiscalía.

Entrevistadora: *¿Cuáles serían las principales problemáticas que observa en su órbita?*

Fiscal: La verdad la gran problemática en ese sentido son los abusos sexuales, la cantidad de abusos que suceden en estas localidades chiquitas es alarmante y la licenciada en trabajo social tiene un trabajo permanente por ello, en lo que tiene que ver con los menores.

Entrevistadora: *¿Y usted cómo considera que haya un sólo trabajador social para cubrir las problemáticas que el total de la población local presenta?*

Fiscal: Ni siquiera, en realidad eh... hay una sola que pertenece al Poder Judicial, dentro de estas localidades... se trabaja eh... con varias profesionales de instituciones que dependen de otro tipo de organismos. Acá cualquier organismo del Estado se utiliza mediante solicitud y bueno, ante ello deben cumplir bajo las normas del deber de incumplimiento de funcionario público. Son espacios públicos y tienen que acudir al llamado del Poder Judicial. Pero eso en cuanto a cómo funcionamos, pero pensá que ella no solo actúa para un estamento, sino que está en 5 o 6 dependencias, muchísimo trabajo aborda.

Entrevistadora: *¿Cuáles son los datos estadísticos sobre abuso sexual intrafamiliar en la localidad? Ya que la refiere como la problemática primordial en lo local.*

Fiscal: No en realidad no, no aparece en comparación con otras localidades sino con la cantidad de delitos que hay en la jurisdicción. Por ejemplo, puedo decirte que en otros lugares es más alarmante la cantidad suicidios que se dan, o los delitos de homicidio. Bueno así es que, en este caso, en esta sección no tenemos tantos homicidios, pero si tenemos una cuota importante de abusos sexuales que generalmente se desarrollan en los núcleos familiares.

Entrevistadora: *¿Encuentra limitaciones en el ejercicio de sus funciones en cuanto a infraestructura o con el recurso humano institucional?*

Fiscal: Las limitaciones generalmente están en los delitos económicos, porque no hay especialistas que puedan aportar una visión mucho más específica que la que tenemos nosotros, o en lo que tiene que ver con los abusos el contar solamente con dos psicólogos no más. Logramos desarrollar una tarea casi habitual el tomar entrevistas, plasmar los

informes y diferentes problemáticas de una misma manera medio como un eslogan y eso no te permite crecer, que puedan disponer de más disponibilidad para realizar otras tareas, proponer otro tipos de intervenciones. Entre esas cosas, después también en la División Criminalística a veces no cuenta con las herramientas necesarias como para poder desarrollar buenos informes para la división de investigaciones, otros cumplen las funciones de trabajar encubierto la misma situación para poder intervenir un teléfono o estas cuestiones es todo mucho más engorroso y se depende de la centralidad que ocurre en Río Gallegos.

Entrevistadora: Para terminar, en cuanto a la intervención profesional del trabajador social, usted conoce -más allá de las funciones específicas que desarrolla en los pedidos realizado por su área cuáles- son las alcances de la profesión?

Fiscal: Sí, como alcances tienen un abanico muy amplio, tengo conocimiento porque tengo mucho contacto con trabajadoras sociales y es una especialización en la cual aporta mucho al sistema Penal y, de Familia sobre todo, exponen siempre cosas que no teníamos en cuenta, explican desde otro lugar, como si se pararan de ambas veredas.

Entrevistadora: La incorporación de un trabajador social para su espacio de trabajo, ¿sería una demanda cubrir?

Fiscal: Sí, es una demanda que cubrir hace rato, se está solicitando la cobertura de mayores cargos para licenciadas en Trabajo Social hace unos 7 años, pero por ahora no hubo avances desde el Tribunal.

Entrevistadora: Eso es todo, ¿quisiera agregar algo más?

Fiscal: No, está bien, te agradezco eh...

Entrevistadora: Muchas gracias por el tiempo y la amabilidad.

Final: Hasta luego, a tu disposición

Entrevista a la **Trabajadora Social**, dependiente del Poder Judicial de la pcia. de Santa Cruz:

➤ Entrevista a la Lic. En Trabajo Social, de 36 años de edad:

Entrevistadora: Buenos días colega, la presente entrevista se enmarca en una tesis de investigación sobre la intervención profesional del Trabajo Social en los ámbitos socio jurídicos. Por tal motivo se realizarán diversas preguntas a fin de que pueda describir su propio desempeño profesional dentro del Poder Judicial, por lo que se consulta :

¿A qué institución pertenece?

TS: Eh... al Tribunal Superior de justicia de Santa Cruz en este caso a la dependencia Administrativa del Juzgado de 1ª instancia de Civil, Familiar, Comercial y Minería.

Entrevistadora: ¿Cuál es su función específica allí?

TS: Soy la perito trabajadora social... bah...para ellos es la figura de Asistente Social.

Entrevistadora: ¿Con qué población trabajas?

TS: Actualmente con todo lo que es la población de Puerto San Julián, creo que son Aproximadamente 20.000 habitantes.

Entrevistadora: ¿Realizan un trabajo articulado con instituciones de la localidad?

TS: Emmm, si, ahora en este momento Salud Mental lo que es con el centro de Salud Mental del nosocomio y con la Oficina de Protección de la Niñez, además con la Dirección de la mujer de acá.

Entrevistadora: Ahora bien, como perito trabajadora social ¿qué tipo de demandas recibe?

TS: Muchos casos de violencia de género, violencia familiar, los beneficios de semi libertad de internos, los trámites como alimentos, las salvaguardas, la opción a regímenes de visitas, regímenes de comunicación o la visita para generar canales de comunicación y responsabilidad parental. ¿Qué más? información sumaria y abordajes de menores, protección de personas y también ayudas en casos con adicciones, consumos...

Entrevistadora: ¿Y todos estos abordajes dependen del Juzgado de Familia o de otras áreas?

TS: Nono, a otra institución no. Los exhortos son de la Cámara Criminal, que son los beneficios de semi libertad que son los supervisiones a los internos que salen a trabajar; también se le hacen informe de los empleadores y tutores de los internos que salen y eso es a través del Juzgado de Instrucción. Después están los informes de Familia, que son la mayoría, y cada tanto algún informe para Civil.

Entrevistadora: *¿Usted participa de las Cámaras Gesell?*

TS: No, actualmente no, en un momento sí participaba.

Entrevistadora: *¿Con qué otros profesionales cuenta la institución?*

TS: Eh...dos actualmente. Hay dos psicólogos, el psicólogo es el licenciado XX, quien estaba desde antes que yo ingresara a trabajar y hace dos años se incorporó la licenciada XX que es una psicóloga que, como dije, ingresó recientemente y está trabajando en el gabinete con él, en la parte psicológica.

Entrevistadora: *¿Trabajan con abogados también?*

TS: Eh... sí, a ver no los abogados que están no... no. Estoy pensando en los chicos no, no en las secretarías están los abogados y después de empleados, abogado creo que no hay pensándolo bien. Ah sí, perdón, en la secretaría Civil hay dos abogados.

Entrevistadora: *¿En cuanto a las demandas de abordaje profesional trabajan de forma interdisciplinaria?*

TS: En algunos casos si, abordamos interdisciplinariamente las “ayudas y salvaguardas” que son para las personas con adicciones, o con intentos de suicidio, este... o con problemas mentales y en las responsabilidades parentales y en los regímenes de comunicación, también cuando hay riesgo para un menor o sus padres y hay que hacer una evaluación generalmente yo solo soy la que realiza la intervención sobre los padres, y a la vez los psicólogos ponen el foco sobre los niños en la visita domiciliaria.

Entrevistadora: *¿En cuanto a las demandas de la institución hacia ustedes, adoptan estrategias pautadas o pueden realizar sugerencias a sus superiores? .*

TS: Si en su momento le planteé a mi jefe, a los dos a la Jueza de Familia y al Juez de Instrucción que estaba un poco sobrepasada de trabajo y que veía necesaria la posibilidad de ingresar a una colega o un colega. Los dos hicieron el pedido formal al Tribunal, pero hubo una respuesta del Tribunal diciendo que las estadísticas en ese momento no justificaban el ingreso de un nuevo profesional al área... bueno...(realiza un gesto de resignación con su cara y manos).

Entrevistadora: *¿Participa de instancias formativas o de capacitación?*

TS: Sí, en mi caso estoy un poco condicionada porque al no tener un colega en el área no tengo quien me cubra, eh... cuando pueda si quisiera hacer capacitaciones, por ejemplo, un posgrado algo que no implique más tiempo. Por lo general de las cosas que he hecho me han hecho por comisión de servicio, para Congresos, debates o charlas de dos días, mas no me permitían.

Entrevistadora: *Entonces a partir de este relato ¿Cuáles son las limitaciones encontradas en torno al ejercicio de sus funciones profesionales?*

TS: Bueno eso, no puedo ir por ahí y continuar con una formación académica, que sea un poco más amplia. A mí en su momento me interesó mucho hasta hacer el posgrado de Trabajo Social forense en la Universidad de la Comahue, pero no lo pude hacer por este motivo; más allá de eso tampoco me reconocían nada de gastos dentro de la Escuela de capacitación del Tribunal porque no estaba como adherido - o sea a lo que son las capacitaciones que ellos otorgan y que dan puntaje - este... y bueno después también lo que implica las salidas personales cuando tenga motivos particulares tengo que pedir que me cubran y cuando me enfermo afectan a colegas de la localidad, cuando me tomo receso invernal de fería también, y eso implica también un desgaste para mis colegas porque muchas veces por ahí me lo han planteado ellas mismas. Por ejemplo. X me dice en enero que la “bombardean” con los presos que sí o sí son informes que hay que hacer por los plazos de condena y por eso precisan nuestra supervisión y ella no tiene el tiempo, está tapada con su propio trabajo en el hospital y lo tiene que hacer porque se lo ordenan por tener función pública, y así.

Entrevistadora: *¿Y en esos casos se entrega una carátula con un proveído en el oficio del expediente y algún complemento más?*

TS: No, solo eso se les da. Se las notifica y salen con eso. Además, es una intervención ad honorem, cuando a los abogados que serían también Ad hoc se les paga al tiempo, pero se les paga. Eso está mal para mí. Están obligadas por ser una carga pública en resumen. Específicamente en cuanto al TS se pide como requisito traer un informe de tal tema claro, ni siquiera ven la información que tiene adentro el expediente. Igual, en el caso de los exhortos a mí tampoco me llega en forma yo sé por ejemplo el delito que cometió el sujeto,

el preso que va a salir sólo por la carátula, los autos serían donde dice suponte que fulano de tal según abuso sexual agravado. Así sé que cometió, pero eso nada más... no tengo un expediente que me diga si le hicieron el psicológico cómo le fue solamente me dicen la pericia: alguien va a salir como tutor de fulano y entrevistar el señor tal, a fin de ratificar si es real la oferta laboral, si son acordes las condiciones de trabajo, qué horarios cumplirá y demás.

Entrevistadora: ¿Le permiten hacer sugerencias en estos planteos?

TS: Sugerencias sí, habitualmente sí pero en este caso ..eh... cuando son exhortos es muy difícil porque todavía no se le otorgó el régimen para salir entonces cómo voy a sugerir algo si yo no lo conozco al interno, ósea ahí al no ser cercano el seguimiento, es más complicado.

Entrevistadora: ¿Y en los otros casos puede hacer sugerencias?

TS: En las supervisiones sí, por ejemplo ahora un empleador me comenta que va a salir de vacaciones y por dos semanas el preso no tiene que salir porque no va a estar, entonces eso yo lo informo por ahí que me diga mira necesito que trabaje 2 horas más porque tengo mucho trabajo y necesito que se amplíe el horario entonces yo solicito eso y bueno informo que el empleador está de acuerdo con que se amplíe el horario, el abogado del preso va a solicitar el horario y así.

Entrevistadora: Mas allá de los privados de su libertad, en los abordajes que tiene con familias ¿Ud hace sugerencias en los modos de abordaje que se le estipulan?

TS: Si, mira previamente hay siempre porque se hacen los diagnósticos en relación a la vulnerabilidad y riesgo del mismo, qué se está viendo en relación a las personas y se pueden hacer sugerencias, pero siempre mencionando que está “salvo mejor criterio de su señoría” porque son observaciones y sugerencias que el profesional hace, pero quedan en consideración del Juez si las aplica o no.

Entrevistadora: ¿Eso cómo lo considera?

TS: No, creo que está bien porque en realidad quien resuelve por ley es el Juez, que nosotros somos peritos y lo que hacemos es hacer una práctica forense de nuestra especialidad; informamos de una forma que pueda comprender y considere como una

valoración para que mejore la situación de riesgo o la situación de la problemática que los afecta.

Entrevistadora: ¿Y al presentar discrepancias cómo se resuelven? Si es que se resuelven.

TS: No, a veces hay diferencias en cuanto, a veces suele pasar que por ahí que no consideran adecuado lo que vos estas sugiriendo, o por ahí considera que sí pero agrega algo más o por ahí simplemente si lo acepta y lo pone a consideración para resolver, la mayoría de las veces incorpora lo que considera mi postura.

Entrevistadora: ¿Tienen diferencias en el uso de ciertas nominaciones o categorizaciones al referirse a los grupos familiares, en cuanto a las formas de nombrarlas?

TS: No, lo que pasa es que el lenguaje jurídico es muy específico ellos usan palabras similares, pero además también la legislación nombra en las leyes las problemáticas de determinada manera por ahí diferente a lo nuestro, pero no tenemos muchas diferencias. En realidad, lo que yo siempre trato es de no dejar de hablar como hablo en mi carrera y en todo caso si yo tengo que amoldarlo a la normativa jurídica me puedo amoldar a las denominaciones que se ajustan, pero en realidad siempre trato de usar las más porque también las más calculo que sirven y no deja de ser lo mismo. Por ejemplo, en vez de decir menor puedo decir el niño o el joven ¿no? o la adolescente tal porque menor, ponele que es como lo usan en la instrucción y ahí ellos no te van a decir el niño.

Entrevistadora: ¿Utilizan el término disfuncional al caracterizar aspectos de las organizaciones familiares?

TS: Ese término sí, sí, pero generalmente los solemos usarlo más con los psicólogos y no los TS por nosotros solos. Ósea en los interdisciplinarios ellos pueden plantear eso.

Entrevistadora: En cuanto a los alcances de tu profesión, ¿Considera que esto es conocido por el resto del equipo y por los funcionarios? ¿Le han cuestionado sus funciones?

TS: No dentro del Juzgado, de la institución misma, sino por ahí los abogados de afuera que son los que obviamente representan a los defendidos, a los acusados, claro que muchas veces por ahí mi informe no le conviene a la persona que representan y me los han impugnado que es como decir no vale o no se toma, pero bueno no lo tomo personal porque también ellos están haciendo su trabajo y es parte del juego. Una informa con la

verdad y es como dicen por ahí: ante una familia nosotros somos los ojos afuera para informarle, al ingresar a las viviendas veo e informo lo que veo no exagero ni agrando ni achicó la información simplemente plasmo lo que veo y en base a eso yo hago una observación profesional.

Entrevistadora: ¿Hace cuantos años se encuentra trabajando en la institución?

TS: Hace 10 años estoy

Entrevistadora: ¿Ustedes tienen distintos concursos para lograr ascensos en su categoría?

TS: Los ascensos son cada 4 años en forma automática, son de categoría ... eh... porque después hay un Jefe zonal personal, en este caso suele estar en Caleta Olivia o en Río Gallegos donde están los Cuerpos periciales de trabajadores sociales más grande, donde hay más trabajo porque las localidades son más grandes, y porque hay más profesionales y pueden comparar, todavía acá en zona centro no tenemos Cuerpos, aunque todavía no tendríamos la posibilidad de formarlos por las categorías y porque somos poquitos.

Entrevistadora: ¿En algún momento hay actores que se acerquen directamente para hablar con ud sin tener e intervención desde el Juzgado? Desde una familia, un niño o alguien que se acerque a consultarte cosas.

TS: Sí, sí, sí, por ahí ha pasado que, pero es lo de menos, porque en realidad yo siempre trato de dejarles en claro a las personas a las que entrevisto, y siempre las encuentro fuera del horario de trabajo, o se acercan a preguntarme cosas puntuales que nosotros por reglamento -los peritos- no tenemos permisos de asesorar eso no lo puede hacer una persona diciendo hace esto o no hagas aquello. Siempre le digo que se comuniquen con su abogado, que se asesoren y que presente las pruebas que se les pida. Igual acá es un pueblo sumamente chiquito, me los encuentro en la verdulería y me vienen a preguntar por su caso y así. Obvio que yo me limito, no puedo darles información del proceso, pero si tengo que darles info para que accedan a un trámite o alguna institución eso si lo hago.

Por ejemplo, me pasa con las violencia si hay una situación de riesgo y yo tengo un seguimiento quincenal, qué pasa en el medio de esos 15 días, si pasa algo la gente sabe que, la señora por ejemplo puede ir a buscarme sí necesita que se informe la prohibición de acercamiento del violento, supónete, siempre le digo háblalo con tu abogado, pero también me puede llamar a mí y yo lo informo antes al secretario del Juzgado.

Entrevistadora: *¿Cuáles son las problemáticas que se evidencian con mayor frecuencia?*

TS: Violencia, violencia género, violencia familiar no tanto como antes ahora hay más violencia de género... eh... este año está terriblemente el tema del abuso y el tema del suicidio está afectando mucho el tema en los adolescentes. Hemos tenido muchos intentos suicidas, nueve el año pasado y otros menos este año que es mucho para San Julián. Tuvimos nueve intentos y dos concretados y hemos tenido mucho también de lo que es... este... regímenes de comunicación. Suelen ser muy difíciles porque tenes muchos padres en conflicto que usan a los hijos como caballitos de batallas y en algunos casos son eternos, permanentemente se media y ahí es complicado porque dependen si o si del Juzgado para todo. No se pueden poner de acuerdo y hay estrategias que van pasando y después se vuelven a poner en conflicto, se torna tedioso a veces porque no llegan a nada viven inmersos en ese conflicto, asique bueno, nada.

También hacemos estrategias para los adictos, a la gente con alcoholismo, drogadicción, con discapacidad que no tienen situación de protección no tienen familiares a cargo o no tienen los medios o acá como no contamos con centro de día, el área de Salud Mental es un área que es incipiente y está un poquito floja por ahí, no hay turnos, son todas esas cosas que llegan igual. Algunas más urgentes que otras claro, ¿no?.

Entrevistadora: *¿Trabajas en conjunto con la Defensoría?*

TS: Trabajamos con Defensoría, trabajamos mucho actualmente, se está trabajando mucho con la Dirección de la Mujer que tiene la Comisaría de la Mujer en la que están entrando directamente las violencias, se toman las denuncias en el momento y se tiene un Protocolo de actuación. De ahí se llama a Defensoría, y la Oficina de Asistencia Letrada esta es la que sería la Oficina de Violencia Doméstica, queda para nosotros el abordaje allá es más que nada el asesoramiento legal para después hacer una audiencia posterior en el Juzgado de Familia -para establecer la medidas protectoras-.

Entrevistadora: *¿En la Defensoría cuentan con trabajador social?*

TS: No

Entrevistadora: *¿Y en la OVD cuentan con trabajador social?*

TS: No

Entrevistadora: *¿En la Comisaría de la mujer hay trabajador social?*

TS: No

Entrevistadora: *Ante esto ¿Se complejiza realizar sus abordajes ejerciendo funciones en varias áreas sola en simultaneo?*

TS: Totalmente, ay Dios mío, te cuento por ejemplo en las violencias debo escuchar a los dos, a la víctima y al victimario, entonces me da una mano el psicólogo y nos dividimos a que rol escucha y entrevista cada uno, sino desconfías siempre o te da lástima siempre, viste como es...en la calle ando esquivando gente, pero si ellos tienen una conflictiva no es mi opción es mi trabajo, sería por lo que representas no por lo que sos, es como que representas la Ley vos, pero no sos la jueza. Si ante algún informe los abogados de partes te pueden impugnar tu informe, por inspección ocular, estando solo como profesional del área es complejo como decís. Hay que evitar lo rutinario, esto de “viene la chusma de la trabajadora social”, una vez escuche eso mientras entraba a un domicilio jaja -sonríe- pero bueno yo lo que debo hacer es informar todo, ahí podes prever un riesgo, asique que me digan chusma por ir a las casas no me molesta ni un poco.

Entrevistadora: *¿Ha ido modificando su manera de intervenir?*

TS: Sí, claro, vas viendo qué resulta mejor en la intervención, cuáles son las técnicas con las que mejorte movés.

Entrevistadora: *¿Cómo aprecia ud misma su ejercicio profesional?*

TS: Al principio me resultaba raro, me sentía autoritaria y era mi primer trabajo recién recibida, pero con el tiempo me di cuenta de mi lugar y revalorice mi profesión. Por ejemplo, al hacer intervenciones aclaras: lo dispuso el Juez, es por orden del Juez. Yo solo tengo que informar y nada más, no me puedo hacer cargo del problema de todos, sino te enfermas. A veces sugiero cosas más bien pero mi función es informarles a ellos lo que solicitan. Ponele a mi la cuestión ambiental, la condición de la vivienda no me interesa, no pongo si esta ordenado si los muebles tal cosa, me parece que no hacen al tema en sí, pero la colega de XX ponele, les abre la heladera, cuenta las botellas de cerveza, de agua, se sirve leche para ver si está cortada, abre el arroz a ver si tiene gorgojos. No soy “obsesiva” -hace comillas con sus dedos- con eso, pongo a lo sumo se observa higiene y orden en los ambientes,

mobiliario suficiente, punto.

Hay que tener presente que en las intervenciones interdisciplinarias con tu firma vos avalas al perito psicólogo también, lo que dicen es en conjunto por más que cada uno hable desde su disciplina. Pero siempre dejar en claro que la Jueza nos dio la instrucción de hacer tal o cual cosa en ese domicilio que se visita. Mi trabajo es ser una herramienta del Juez, vos podes tener mucha objetividad, pero mi subjetividad también pesa porque voy a estar mirando más tal cosa, escuchando mejor aquello, prestas distinta atención a lo otro, de hecho pasa eso. Yo le digo la verdad, listo ellos ya tienen el dato y bueno con los cambios, ponele con el nuevo Código Civil, el régimen de visitas se llama régimen comunicacional, la tenencia pasa a ser cuidados parentales con el cambio de agosto del otro año entonces siempre sirve estar adaptándose.

Entrevistadora: *¿Mantiene contacto con otros colegas para poder conversar sobre tu ejercicio o cuestiones de la profesión en general?*

TS: Eh..me gustaría tener supervisiones, yo nunca hice terapia, pero creo que por momentos tenemos cosas que nos exceden, o que nos exigen cierta implicancia que no tenemos que caer en eso, mantener la objetividad es difícil estando siempre sola. Es lo que yo pienso, como yo lo pienso, no lo debato con nadie...y así...bueno...que se yo no quiero actuar por mecánica ya. Ponele ahora tuvimos toda una seguidilla de casos de adolescencia conflictiva, desvalida con intentos de suicidios. Ahí interviene Salud Mental y se pasan a internaciones involuntarias, que tienen un control de legalidad, por ser un riesgo para sí mismos y para terceros. Ahí acompañan más que nada el Juez, el Defensor y el psicólogo porque hay un riesgo latente. Ahí específicamente, por nuestra especialidad, el trabajador social hace un abordaje con la familia para ver cómo lo esperan quien se hará cargo de cada cosa y como se organizan cuando salga de la internación, ahí la familia debe cumplir con lo que se le dispone para garantizarle el cuidado al chico/o la chica.

Entrevistadora: *En referencia a las modalidades de intervención, ¿Realiza tareas que considera que no corresponderían al ejercicio profesional?*

TS: No, no creo que realice otras cosas. Bueno a veces puede ser que terminemos haciendo cosas más administrativas, o controles que podrían arbitrarse de distinto modo, les facilitamos todo ahora que pienso -se sonríe-.

Entrevista: *¿Cuál cree que es el horizonte de su intervención profesional dentro del Poder Judicial?*

TS: Que lindo término “horizonte”, bueno considero que mediamos como para facilitar soluciones, pero sirve a la vez no pensarse el centro de la escena sino ser mediador en el conflicto nada más...y bueno nada menos -sonríe-.

Entrevistadora: *Bueno eso es todo, ¿Quisiera agregar algo más?*

TS: No, bueno nada no lo dije, pero estoy contenta con el trabajo, puedo proponer bastante y cada familia es un mundo, uno no puede querer corregir las cosas, suceden y bueno.

Entrevistadora: *Muchas gracias por la apertura y por la amabilidad.*

TS: De nada chau, chau.